

PAPELES

DE CUESTIONES INTERNACIONALES



C Centro de
investigación
para la Paz

Dossier:
Colombia en la encrucijada

Malcom Deas, Alfredo Molano y otros

Las luchas de Dios en Irán

Allison Rohe

**Rusia ante el abismo en
Chechenia**

Rosa Meneses

Respuesta indígena en Ecuador

Nieves Zúñiga

Educación para el desarrollo

Manuela Mesa

Reseñas de libros

PAPELES *nº* 70 - 2000

De cuestiones internacionales

Director

Mariano Aguirre

Consejo de Redacción

Julián C. Carranza, Vicenç Fisas, Manuela Mesa, Alberto Piris, Francisco Rey, José María Tortosa.

Coordinación

Teresa Filesi

Edición

Teresa Filesi y Mabel González

Distribución

Ana Casado

Colaboradores habituales y asesores

Jesús M. Alemany, Ana Alonso, Lucía Alonso, Patrick Costello, Javier Díaz Malledo, Alfonso Dubois, Johan Galtung, Vicente Garrido, Susan George, Xabier Gorostiaga, Fred Halliday, Michael T. Klare, Saul Landau, Robert Matthews, Maxine Molyneux, José M. M. Medem, Roberto Montoya, Ignacio Ramonet, Francisco Rojas Aravena, Pedro Sáez, José A. Sanahuja, Dan Smith, Joe Stork, Berna Wang.

Papeles es una publicación trimestral del Centro de Investigación para la Paz (CIP), que forma parte de la Fundación Hogar del Empleado

El CIP realiza diversas actividades sobre paz, seguridad y desarrollo.

Información sobre las actividades de la Fundación Hogar del Empleado y el CIP pueden solicitarse a Duque de Sesto, 40, 28009 Madrid.

Tel.: (91) 431 02 80. Fax: (91) 577 95 50.

Correo electrónico: cip@fuhem.es

Web: www.cip.fuhem.es

Documentación: cd@fuhem.es

Diseño de portada: Pedro Arjona

Diseño interior: Marian Cao

I.S.S.N.: 0214-8072

Depósito legal: M- 30.281 - 1993

Foto de portada: Al Ahram Weekly

Las opiniones de los artículos publicados no reflejan necesariamente las del Centro de Investigación para la Paz y son responsabilidad de los autores.

Impresa en papel ecológico.

PRESENTACIÓN	5
---------------------	----------

TEORÍA

Educación para el desarrollo: Entre la caridad y la ciudadanía global	11
<i>Manuela Mesa Peinado</i>	

DOSSIER

Colombia en la encrucijada:	28
– Un horizonte vacío	29
<i>Malcom Deas</i>	
– El placer y la guerra digital	35
<i>Robin Kirk</i>	
– Desterrados	41
<i>Alfredo Molano</i>	
– En el batallón	47
<i>Anónimo</i>	
– Los señores de las esmeraldas	57
<i>Richard Sanders</i>	

ACTUALIDAD

Ecuador en crisis	63
<i>Nieves Zúñiga</i>	
Rusia ante al abismo de Chechenia	73
<i>María Rosa Meneses Aranda</i>	
Reformas y temores en Irán: Las luchas de Dios	81
<i>Allison Rohe</i>	
Las cuitas de Hafez Asad y el proceso de paz	89
<i>Ramy Wurgaft</i>	
Abdullah II de Jordania: democratización limitada	95
<i>Ignacio Álvarez-Ossorio</i>	
Enseñanzas de Timor Oriental	103
<i>José L. Gómez del Prado</i>	

DERECHOS HUMANOS

- Niños soldados: Fuera de tiempo, fuera de lugar** 119

Ángela Sobrino López

MEDIOS

- Medios y Derechos Humanos: Silencio ante lo esencial** 127

Jean-Paul Marthoz

CRÓNICA DE NO-PROLIFERACIÓN

- Crónica de no-prolifерación y desarme nuclear** 139

Vicente Garrido Rebolledo

RESEÑAS DE LIBROS

- Reconstruir el tejido social. Un enfoque crítico de la ayuda humanitaria, de Carlos Martín Beristain** 149

Lorena Bilbao Trecha

- El sistema internacional de cooperación al desarrollo: una aproximación a sus actores e instrumentos, de Manuel Gómez Galán y José Antonio Sanahuja/ Ayuda económica y seguridad nacional. La ayuda externa de Estados Unidos, del Plan Marshall a la posguerra fría, de José Antonio Sanahuja** 150

Francisco Rey

- Fumigación y conflicto. Políticas antidrogas y deslegitimación del Estado de Colombia, de Ricardo Vargas Meza** 153

Virginia Montañés

Para un observador desprevenido la situación en Colombia carece de sentido. Por una parte, el Gobierno y la guerrilla de las FARC están negociando. Por otra, continúan los enfrentamientos entre ambas partes y el fuego cruzado con otros actores violentos, especialmente los cada vez más poderosos paramilitares. En medio de la guerra está la población civil, obligada a tomar parte forzosamente, desplazada, asesinada y secuestrada en su vida cotidiana. Los trabajadores por los derechos humanos y todos aquellos que desean un cambio social que empiece por frenar la violencia y continúe por ocuparse de la injusticia y la desigualdad corren hoy peligro de muerte.

Algunos observadores consideran que en Colombia no hay proceso de paz sino unas negociaciones que no incluyen a todos los actores y que la guerra, desafortunadamente, va a continuar. Desde fuera, tanto los vecinos latinoamericanos, como Estados Unidos y la Unión Europea tienen una creciente preocupación. La presente situación genera inestabilidad regional, pero la caída de Colombia en la desintegración del territorio en manos de diferentes grupos violentos es considerado un fuerte problema estratégico. Si poco control existe ahora sobre el tráfico de drogas y armas, menos habría en un escenario de desintegración. Para evitar este futuro, el Congreso de EE UU acaba de aprobar un plan de ayuda especialmente militar que le dará más peso a las fuerzas armadas. Este plan implica, además, la presencia directa e indirecta de más asesores estadounidenses.

La creencia de que los problemas de Colombia se pueden sanar y prevenir con más armas y asesores junto con la destrucción de cultivos ilícitos conducirá a más violencia y aumentará el drama político y humanitario de ese país. En realidad, en función de prevenir que no se desestabilice la región, desde Washington y Bogotá se colabora cada vez más en agudizar la tensión.

La prestigiosa revista británica *Index on Censorship*, dedicada a denunciar las diferentes formas de la represión y la censura en los medios periodísticos y políticos, ha publicado recientemente un número especial dedicado a Colombia. En este número de Papeles reproducimos una selección de sus artículos escritos por prestigiosos autores e informantes que han guardado su identidad por cuestiones de seguridad. En ellos se abordan cuestiones como el narcotráfico, la represión de las fuerzas armadas, los desplazados y el comercio de diamantes. Entre las reseñas de libros nos ocupamos, igualmente, de la obra del economista colombiano Ricardo Vargas sobre las políticas antidrogas.

Situaciones paradójicas se viven también Irán donde el proceso de cambio y apertura impulsado por el primer ministro Jatamí y apoyado por parte de la sociedad choca con los líderes religiosos que están imbricados en poderosas estructuras del Estado islamista que nació con la revolución del ayatolá Jomeini hace veinte años. Otro país en el que se pueden producir cambios importantes es Siria, si el primer ministro Hafez Asad abandona el poder voluntariamente o fallece. Tanto los cambios en Irán como en Siria afectarán profundamente a las sociedades de ambos Estados como al conjunto de la región. En el primer caso, por su papel geopolítico de puente entre Oriente Medio, Afganistán y el Cáucaso. En el segundo, por el peso que tiene Siria en el proceso de estabilización de Oriente Próximo.

La guerra en el Cáucaso, entre otros factores, le ha permitido al primer ministro Vladimir Putin ganar las elecciones generales en Rusia. En sí misma, esta guerra -que no ha terminado- está siendo librada con fuertes violaciones de los derechos humanos y sin respetar reglas, por ninguna de las dos partes, pero con especial fuerza por parte de Rusia. Pero, más en general, la guerra contra Chechenia agudizará una tensión entre Moscú y las repúblicas del Cáucaso y marginará más a esta zona a vivir en la ilegalidad, la corrupción y la violencia.

Este número se completa con análisis sobre el ascenso de la respuesta indígena en Ecuador a los planes de ajuste y la dolarización de la economía (una revuelta indígena contra la pobreza y las medidas económicas gubernamentales comenzó también en Bolivia en abril), los niños soldados, el proceso de toma de decisiones que condujeron

a la intervención internacional en Timor Oriental y la no proliferación nuclear.

En el terreno teórico, Manuela Mesa analiza la evolución de los métodos de la educación para el desarrollo en las últimas décadas y Jean Paul Marthoz continúa con la serie de artículos que hemos publicado en los últimos dos años sobre medios periodísticos, conflictos, acción humanitaria y derechos humanos.

Mariano Aguirre
Director

**Educación para el desarrollo: Entre la
caridad y la ciudadanía global**

11

MANUELA MESA PEINADO

La educación para el desarrollo: entre la caridad y la ciudadanía global¹

Manuela Mesa es pedagoga y coordinadora del Área de Educación para la Paz del CIP.

La educación para el desarrollo es uno de los instrumentos de la política española de cooperación internacional. Se presenta un modelo de “cinco generaciones” para clasificar distintos momentos y enfoques de la educación para el desarrollo desde sus orígenes hasta el presente y se analizan los principales retos y desafíos de cada etapa.

Introducción

La educación para el desarrollo cuenta ya con algo más de cuatro décadas de historia. A lo largo de este periodo se han producido cambios muy perceptibles en el concepto y la práctica de la educación para el desarrollo y en la importancia que se le otorga a este ámbito de actividad. La educación para el desarrollo se ha convertido en un componente de las políticas y las estrategias de los diversos actores que integran el sistema internacional de cooperación y ayuda al desarrollo, sean

¹ Este artículo es una versión adaptada, revisada y actualizada del capítulo “Evolución del concepto de Educación para el Desarrollo” realizado por la autora para el Informe preliminar de la OPE “La Educación para el Desarrollo y las Administraciones Públicas”, coordinado por Pilar Baselga y Gabriel Ferrero y elaborado por Alvaro Nebreda, M^a Luz Ortega y Manuela Mesa.

gubernamentales o no gubernamentales. Con la reciente aprobación de la Ley de Cooperación el 8 de Julio de 1998, la educación para el desarrollo se define como uno de los instrumentos a través de los cuales se pone en práctica la política española de cooperación internacional. Esto supone un importante paso para la consolidación de la ED que se concretará en el futuro Plan Director, todavía pendiente de aprobación.

La configuración del concepto y la práctica de la educación para el desarrollo está directamente relacionado con el contexto y los condicionantes históricos del desarrollo, la cooperación internacional y las relaciones Norte-Sur, y con la evolución de los actores que la han incorporado como una de sus actividades y formas de actuación. En este artículo se opta, por una aproximación histórico-estructural. Este enfoque permite que la discusión sobre los conceptos y enfoques de la educación para el desarrollo cuente con una adecuada perspectiva histórica y, sobre todo, los pone en relación con los actores, las fuerzas sociales y las visiones filosóficas, éticas y/o ideológicas que las han impulsado y en concreto con los cambios que se han producido en el discurso y la práctica de la solidaridad internacional.

Se propone un modelo de “cinco generaciones” para clasificar distintos momentos y enfoques de la educación para el desarrollo desde sus orígenes hasta el presente. Se ha tomado como referencia la propuesta de Kortén sobre las tres generaciones de ONG y posteriores elaboraciones (ver Kortén 1987, 1990:117; Ortega 1994: 122-124; y Senillosa 1998: 43).

Las ONG han tenido un papel clave en el origen y evolución de la educación para el desarrollo. Como ha señalado Colm Regan, hablar de la historia temprana de la educación para el desarrollo es en gran medida lo mismo que hablar de la historia de las organizaciones no gubernamentales. Muchas de las primeras iniciativas en el ámbito de la educación para el desarrollo surgieron a partir de los programas en el exterior de diversas ONG. Estas iniciativas a menudo pretendían informar a los que respaldaban los programas, de la necesidad de apoyo, explicar el contexto económico y social del trabajo de las ONG en los países del Sur y/o dar a conocer las más serias violaciones de los derechos humanos que se derivaban de la situación de subdesarrollo (Regan 1994: 2). En fases posteriores el panorama institucional de la educación para el desarrollo se ha hecho más plural y complejo, al hacer su aparición nuevos actores institucionales —organizaciones intergubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas formales, otras organizaciones sociales— pero las ONGD siguen teniendo un papel central en la definición de las temáticas, los enfoques y los contenidos.

Este modelo no debe ser visto de forma lineal o “por etapas”, de forma que una generación sustituye a la anterior. Más bien, se trata de un proceso acumulativo en el que el discurso y la práctica de la educación para el desarrollo han evolucionado de forma desigual, de manera que en las actividades de un actor determinado se pueden encontrar simultáneamente rasgos de una u otra generación. Y como se indica más adelante, cada generación ha renovado su discurso y sus prácticas, y permanece vigente bajo nuevas formas. Por último, la educación para el desarrollo tiene rasgos propios y específicos según los distintos contextos nacionales y/o culturales que no son tratados en este artículo.

La primera generación: el enfoque caritativo-asistencial

Las primeras actividades de sensibilización social y recaudación de fondos de las organizaciones no gubernamentales surgieron en las décadas de los cuarenta y cincuenta. No pueden ser consideradas estrictamente educación para el desarrollo debido a su limitado alcance y a la ausencia de objetivos propiamente educativos. Constituyen, sin embargo, un importante precedente de la misma, y se han proyectado hasta el presente dotándose de nuevas formas y estrategias. La educación para el desarrollo a menudo tiene relaciones muy estrechas —y en no pocos casos contradictorias— con las actividades de sensibilización social y las campañas de recaudación.

En los años cuarenta y cincuenta los problemas del desarrollo y la fractura Norte-Sur apenas despuntaban en la agenda de las relaciones internacionales y como tema de interés público. Las organizaciones de este periodo son en su mayoría humanitarias y/o de adscripción religiosa. Su actuación se centra en situaciones de conflicto y de emergencia, en las que intervienen con un horizonte de muy corto plazo, en el que se pretende dar respuesta inmediata a las carencias materiales acuciantes mediante la ayuda humanitaria y de urgencia.

En este contexto, en el que los problemas de largo plazo del desarrollo estaban ausentes, las organizaciones de ayuda van a impulsar campañas de sensibilización orientadas básicamente a la recaudación de fondos. Estas campañas, que a menudo han recurrido a imágenes catastrofistas, intentan despertar sentimientos de compasión y apelan a la caridad y la generosidad individual, transmitiendo el mensaje implícito o explícito de que la solución radica en la ayuda otorgada desde el Norte. El contenido transmitido es muy limitado y sesgado; se reduce a las situaciones de emergencia que dan origen a la petición de fondos y a las manifestaciones de la pobreza, sin referirse a las causas ni al contexto en el que surgen. Las imágenes tipo suelen reflejar a las personas del Sur como objetos impotentes, pasivos, y cuya única esperanza es la compasión ajena. Por último, el énfasis en la ayuda del Norte como solución al subdesarrollo, ignorando los procesos y esfuerzos locales, revela una concepción eurocéntrica de la relación Norte-Sur.

Este enfoque persiste hasta el presente debido principalmente a razones institucionales. La proliferación de ONG que actúan en situaciones de crisis y que compiten por las donaciones ha configurado un “mercado de la conmiseración”. Algunas ONG perciben que la recaudación de fondos y la aparición en los medios de comunicación, y con ella la supervivencia institucional, depende de este tipo de imágenes y mensajes, a menudo en combinación con agresivas campañas de *marketing* (Smillie 1993: 31).

Un reciente estudio de la OCDE y el Consejo de Europa señala que para buena parte de las ONG la cuestión prioritaria es cómo incrementar los ingresos para proyectos en países del Sur. La educación para el desarrollo y la sensibilización de la opinión pública se considera de carácter secundario respecto a la obtención de fondos. En esencia, señala este estudio, estas organizaciones ofrecen, a cambio de dinero, oportunidades para que el donante mejore su valoración de sí mismo y pueda dar salida a sus sentimientos compasivos, altruistas y/o solidarios, sin que ello se contradiga con su actuación en otras esferas de la vida social, política y

La proliferación de ONG que actúan en situaciones de crisis y que compiten por las donaciones ha configurado un “mercado de la conmiseración”.

económica: como votante, como trabajador, como ciudadano, como consumidor (Smillie 1998: 30).

Un buen ejemplo de “puesta al día” del discurso y la práctica de este enfoque caritativo-asistencial, y de las contradicciones y debates que ello plantea en la actualidad en el ámbito de la educación para el desarrollo, son los apadrinamientos. Las tres organizaciones más importantes en este tipo de actividad —World Vision, Foster Parents Plan y Christian Children Fund— aumentaron el número de apadrinamientos a un ritmo del 40% anual desde principios de los años ochenta, pasando de unos 701.000 en 1982 a 4.790.000 en 1996. Al apelar a la conciencia individual del donante y establecer un vínculo supuestamente directo, los apadrinamientos se han convertido en la herramienta de recaudación más efectiva en el mundo de las ONG, y para los responsables de finanzas de algunas de estas organizaciones, en una “solución mágica” para “conectar el corazón y la billetera”. Como ventaja añadida, las organizaciones de apadrinamiento pueden sortear fácilmente las exigencias de rendición de cuentas que afectan a otras ONG, y son relativamente inmunes a la crítica convencional de que “el dinero no llega a su destino”.

Este tipo de actividad, sin embargo, ha sido muy criticada por varias razones. Como puso de manifiesto un reportaje aparecido en 1995 en *Chicago Tribune*, a menudo el “vínculo directo” que se establecía entre el niño concreto y sus padrinos no existía, y las cartas y fotografías que recibían estos últimos eran elaboradas por el personal de la organización, con un coste muy elevado (Smillie 1998: 31). En el plano educativo, las críticas han destacado que los apadrinamientos fomentan —nunca mejor dicho— actitudes paternalistas; centran la atención del donante en el niño y sus problemas individuales, ocultando deliberadamente las causas de dichos problemas, ya que sólo de esa forma puede justificarse el mensaje central de estas organizaciones: que la vida de ese niño concreto depende exclusivamente de la generosidad del donante, y no de los cambios estructurales que favorecen el desarrollo en la comunidad y el país en el que vive ese niño. Un mensaje, en suma, radicalmente opuesto al que se intenta fomentar desde otros modelos de educación para el desarrollo más evolucionados. Como ha señalado Ian Smillie, dado que el éxito que han alcanzado las fórmulas de apadrinamiento y los centenares de miles de donantes que se relacionan con la realidad del Sur y ven los problemas del desarrollo a través de este prisma, esta puede ser la mayor “oportunidad perdida” de la historia de la educación para el desarrollo (Smillie 1998: 31).

No obstante, el modelo caritativo-asistencial, a pesar de la aparición de estas nuevas fórmulas de recaudación, parece estar en retroceso desde mediados de los años ochenta debido a diversos factores: los cambios registrados en el comportamiento de las principales ONG humanitarias, como Cruz Roja; los esfuerzos de autorregulación del sector no gubernamental —el “Código de imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo” adoptado por las ONGD europeas a finales de los ochenta es una referencia especialmente pertinente—, así como las críticas a este enfoque de la sensibilización por parte de los medios de comunicación y ONG adscritas a “generaciones” posteriores.

También ha sido un factor importante, aunque se trata de un fenómeno situado fuera del marco de la educación para el desarrollo, la crisis general del humanitarismo y el asistencialismo. Esta ha venido motivada por la constatación generali-

zada de sus insuficiencias como estrategia de intervención en los países del Sur, y por la aplicación por parte de las ONG humanitarias de enfoques más omnicomprensivos, en los que socorros de corto plazo y desarrollo a largo plazo se articulan de diversas formas.

La segunda generación: el enfoque desarrollista y la aparición de la educación para el desarrollo

La aparición en la agenda internacional del subdesarrollo, como problema del “Tercer Mundo” se produce con la irrupción de los nuevos Estados poscoloniales y la creciente orientación de las organizaciones internacionales hacia estos países. Surge una mentalidad “desarrollista” que se extendió a los Gobiernos, a las organizaciones multilaterales, a las organizaciones no gubernamentales y a la opinión pública. Esto dio lugar a vastos programas de ayuda externa, como la “Alianza para el Progreso”, y a la promulgación en 1960 del “Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, que incluía objetivos precisos de crecimiento económico. Es en la década de los sesenta cuando aparece la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como tal, ya que los programas de ayuda de las dos décadas anteriores, como el “Plan Marshall” se orientaban a la reconstrucción de posguerra o a consolidar las alianzas estratégicas de la guerra fría, y no tenían el desarrollo económico como objetivo ni como instrumento.

El desarrollismo que emergió en el decenio de los sesenta tuvo distintas fuentes. En el ámbito económico, las nuevas teorías del crecimiento “por etapas”. Estas alegaban, a partir de unos supuestos pretendidamente “científicos”, que con las adecuadas aportaciones de capital, conocimiento y tecnología, todas las sociedades experimentarían un “despegue” económico y un rápido proceso de modernización conducente a la industrialización y la sociedad de consumo de masas, conforme al modelo de los países industrializados. En el ámbito político el desarrollo se convirtió en un medio y un fin de las estrategias de construcción nacional y de legitimación política y social de los nuevos Estados poscoloniales. Para las elites gobernantes y los movimientos nacionalistas en el poder en muchos de los nuevos Estados la industrialización, la construcción de vastas infraestructuras y la creación de un moderno aparato estatal eran medios para romper con los vínculos económicos del colonialismo y lograr la autodeterminación nacional. En el ámbito ético y filosófico, por último, se produjo un notable avance de la doctrina social de la Iglesia y del compromiso de diversas confesiones con el cambio social.

Esta mentalidad desarrollista dio paso a nuevas ONG “de desarrollo”, surgidas *ex-novo* o como evolución de las organizaciones misioneras o humanitarias clásicas. En su trabajo en el Sur, estas organizaciones adoptaron los proyectos de desarrollo y la participación comunitaria a partir de estrategias de auto-ayuda, como las herramientas básicas de intervención, adoptando un enfoque de largo plazo y dejando atrás el asistencialismo.

Es en este contexto en el que se configuró la educación para el desarrollo como tal. El punto de partida han sido las actividades de información relacionadas con los proyectos de las ONG y los esfuerzos de las comunidades para progresar por sí mismas. La recaudación de fondos ha seguido siendo un objetivo importante, pero en estas actividades se puso énfasis en dar a conocer las circunstancias

Al obviar los problemas estructurales del desarrollo, este enfoque permite eludir la responsabilidad del Norte.

locales del medio en el que actuaban las ONG y las comunidades beneficiarias de la ayuda. Emerge un nuevo discurso que se distancia del asistencialismo, y que insiste en la idea de “cooperación”, entendida como actividad a través de la cual “se ayuda a los que quieren ayudarse a sí mismos”.

Este enfoque ha dado paso a una visión más amplia de la realidad del Sur y ha contribuido a dignificar a los beneficiarios de la ayuda, y a deslegitimar la imaginación de la miseria en la que se apoyaban las campañas de recaudación. De hecho, esas campañas a menudo entraban en contradicción con las estrategias desarrollistas emergentes, y hay organizaciones que siguen experimentando esta tensión en la actualidad. Ahora bien, el enfoque desarrollista presuponía que los proyectos de desarrollo se inscriben en una dinámica de modernización en la que no se pone en tela de juicio el modelo dominante, ni se identifican obstáculos estructurales al desarrollo de carácter transnacional. Como ha señalado Colm Regan, la cuestión central en este enfoque a menudo era la ONG misma y el contexto inmediato de su acción (Regan 1994: 2).

Los mensajes y contenidos transmitidos por este enfoque de educación para el desarrollo tenían un carácter eurocéntrico. Por una parte, la aceptación acrítica de la experiencia del Occidente industrializado como único sendero transitable hacia el desarrollo. Por otra, la insistencia en la transferencia de las técnicas y conocimientos occidentales “modernos” en sociedades consideradas *a priori* “ignorantes” y “primitivas”. El mensaje predominante en este enfoque podría resumirse de la siguiente forma: Los países industrializados deben facilitar sus técnicas y conocimientos para que las sociedades “atrasadas” dejen atrás la guerra, la anarquía y la pobreza, se “modernicen” y alcancen por sí mismas los niveles de bienestar de los países del Norte. Aforismos y expresiones como “en los países pobres hay mucha ignorancia y atraso, para que se desarrollen hay que darles educación”; “si les das un pescado, comerán un día. Si les das la caña, comerán todos los días”; o “hay que superar la ayuda y hablar de cooperación” serían, de forma muy simplificada, algunos de los mensajes “tipo” que caracterizan a esta segunda generación de la educación para el desarrollo.

Enfoques posteriores de la educación para el desarrollo han señalado las limitaciones de este enfoque “desarrollista”. Al obviar los problemas estructurales del desarrollo, este enfoque permite eludir la responsabilidad del Norte, considerando que el desarrollo es un problema limitado a los países que no han logrado alcanzar aún ese estadio. En lo que se refiere a las ONG, a menudo se presentan los proyectos de desarrollo fuera de su contexto general, con lo que se transmite el mensaje implícito de que el desarrollo se alcanzará simplemente llevando a cabo más y mejores proyectos a nivel local o “micro”, al margen de otros factores globales o “macro”. Este argumento es el que, a su vez, justifica las campañas de petición de fondos de las ONG.

La tercera generación: una educación para el desarrollo crítica y solidaria

A finales de los sesenta se inicia un periodo caracterizado por la aceleración del proceso de descolonización y el creciente activismo internacional de los países en desarrollo. En los países industrializados, la oposición a la guerra de Vietnam y la

revolución antiautoritaria de mayo de 1968 generan un clima de gran efervescencia social e intelectual. Los nuevos movimientos sociales prestarán atención y apoyo a los Movimientos de Liberación Nacional, en cuyo entorno los países del Sur irán fraguando un nuevo paradigma sobre el desarrollo que desafió al eurocéntrico y occidental paradigma de la modernización. El nuevo paradigma de la “dependencia”, nacido en América Latina y desarrollado en otras áreas del Tercer Mundo, alegaba que el subdesarrollo no era un simple estadio de atraso, sino un rasgo estructural de las economías, las sociedades y los sistemas políticos de las sociedades del Sur, en las que el colonialismo y el neocolonialismo seguían teniendo una influencia determinante. Según este enfoque, el desarrollo de unos se lograba a costa del subdesarrollo de otros, a través de relaciones de explotación entre el “centro” y la “periferia”.

Este pensamiento, que ha tenido diferentes versiones y gradaciones, tuvo gran influencia en las estrategias internacionales de los países del Sur —organizados en el llamado “grupo de los 77”—, que desde los años sesenta optaron por políticas de industrialización acelerada y demandaron un “Nuevo Orden Económico Internacional” (NOEI) más justo, una organización más equitativa del comercio internacional a través de las Conferencias de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y mejores términos en la financiación del desarrollo, a través de préstamos concesionales y un aumento del volumen y la calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Por otra parte, cuestiones como el crecimiento demográfico, el incremento de la pobreza y la marginalidad en el Tercer Mundo, el control de los océanos, los problemas de la energía y el deterioro ambiental adquirieron una importancia creciente. Ello ponía de manifiesto los mayores niveles de interdependencia internacional, y amplió notablemente la agenda del desarrollo y las relaciones Norte-Sur. En 1972, por ejemplo, se celebró en Estocolmo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano —antecesora de la cumbre de Río de 1992— y se acuñó el término “ecodesarrollo” para definir estrategias de desarrollo compatibles con la conservación del entorno natural. En 1969 el Informe Pearson, encargado por el Banco Mundial, mostró que los enfoques y prácticas adoptados durante el “I Decenio del Desarrollo” habían sido fallidos, pues habían conducido a un patrón perverso de “crecimiento con pobreza”, en el que el crecimiento económico se vio acompañado por la pauperización de amplios sectores de la población, y por un agravamiento de la desigualdad Norte-Sur.

La teoría de la modernización, al constatar esas realidades, experimentó un giro social en el que se dio más énfasis a la lucha contra la pobreza, la redistribución de la renta y la satisfacción de las necesidades básicas. Naciones Unidas también incluyó objetivos sociales explícitos en el “II Decenio de Naciones Unidas para el Desarrollo (1969-1979)”. En los países desarrollados, las políticas de ayuda y cooperación se verán también impregnadas de un “reformismo global” impulsado, entre otros, por los partidos socialdemócratas, y que tuvo su expresión más acabada en el Informe sobre el Diálogo y la Interdependencia Norte-Sur preparado por la Comisión Brandt.

En los años setenta, en definitiva, se define un nuevo escenario para la educación para el desarrollo, caracterizado por enfoques más críticos y una creciente toma de conciencia sobre las responsabilidades históricas del Norte. Además los

movimientos de renovación pedagógica —Iván Illich, Paulo Freire— incorporan estas cuestiones y ofrecen propuestas educativas y metodológicas muy innovadoras. También aparecerán y se consolidarán nuevos actores, como los comités de solidaridad, centros de investigación, ONG críticas y organizaciones internacionales.

En este periodo la educación para el desarrollo dejó de estar centrada en actividades de carácter informativo orientadas a la recaudación de fondos y a la difusión de iniciativas locales de desarrollo comunitario de las ONG, dando paso a una concepción más crítica, compleja y diversificada. Esta nueva concepción fue impulsada por las ONGD, Naciones Unidas y los nuevos movimientos sociales. Se basó en el análisis de las causas estructurales del subdesarrollo —en particular los factores históricos y el pesado lastre del colonialismo y el neocolonialismo—. Se realizó una crítica de las políticas de desarrollo y de ayuda vigentes, en el marco de las interrelaciones entre el Norte y el Sur. También se resaltó la responsabilidad de los países del Norte en el injusto orden internacional. Asimismo, frente al eurocentrismo, se cuestionó la imposición de modelos occidentales de desarrollo. Por último, se insistió en la necesidad de la acción nacional e internacional para modificar el *statu quo*.

Como consecuencia de estos cambios, en los años setenta se producirá una verdadera explosión de iniciativas, desde las organizaciones de base hasta los organismos internacionales, orientadas a abrir los currículos escolares a los “problemas mundiales”, a reflejar en la educación las cuestiones del desarrollo y a incorporar las propuestas críticas, solidarias y emancipatorias de las corrientes de renovación pedagógica, de los movimientos sociales emergentes y de los nuevos enfoques del desarrollo. En este periodo se generaliza la denominación “educación para el desarrollo” (*development education*) en países como Holanda, Alemania, Francia, el Reino Unido o Italia.

Una de las iniciativas más importantes, por la trascendencia de su contenido y la importancia del órgano que le dio vida, fue la “Recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales, y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, promulgada por la UNESCO en noviembre de 1974. Esta Recomendación instaba a los Estados miembros a promover la educación sobre las “cuestiones mundiales”. La Recomendación, que ha sido un punto de referencia para las ONG y las organizaciones educativas especializadas en educación para el desarrollo, dio un notable impulso a la educación sobre cuestiones mundiales, sobre todo dentro de la educación formal, en el decenio 1975-85. En países como Holanda, Bélgica o Reino Unido, los Gobiernos dieron respuesta a esta Recomendación y establecieron programas educativos e instancias gubernamentales para su puesta en práctica. Mencionaremos el programa de 1977 de cofinanciación de acciones de educación para el desarrollo y “Estudios Mundiales” —*World Studies*— de la agencia estatal de cooperación del Reino Unido (ODA, ahora DFID) y de Dinamarca (DANIDA); el “día de la educación mundial” en las escuelas belgas, celebrado desde 1985; y el “día del Tercer Mundo” de las escuelas francesas, creado por el Ministerio de Educación en 1981.

En esta época se define la educación para el desarrollo, sus contenidos y

objetivos (Grasa 1990: 103):

- El “aprendizaje de la interdependencia”: la comprensión de las condiciones de vida de las naciones en desarrollo y las causas del subdesarrollo, desde una perspectiva global, que las relaciona con la situación y el papel internacional de los países industrializados.
- El fomento de actitudes favorables a la cooperación internacional y a la transformación político-económica de las relaciones internacionales.
- Un enfoque crítico con el modelo de desarrollo occidental, y la valoración del “desarrollo apropiado” para cada contexto, con dimensiones, más allá de lo económico, humanas, ambientales y culturales.
- La valoración del cambio social.
- El vínculo estrecho entre la transmisión de conocimientos (contenidos), el desarrollo de las aptitudes y la formación de actitudes y valores mediante procedimientos como el “enfoque socioafectivo”, para despertar la conciencia político-social, el compromiso y la acción transformadora.
- La coherencia entre fines y medios, desarrollando en el proceso educativo la participación y actitudes críticas. La importancia de la evaluación del proceso educativo.

La “cuarta generación”: la educación para el desarrollo humano y sostenible

La década de los ochenta estuvo dominada por el bipolarismo y la lógica de la confrontación. En 1989 se inicia un proceso de “aceleración de la historia”, en el que el sistema internacional experimenta transformaciones radicales, pasando a un nuevo orden mundial, dominado por la multipolaridad política y económica y la turbulencia e inestabilidad. En este periodo se han planteado nuevos retos, tanto conceptuales como organizativos y metodológicos, para la educación para el desarrollo. En lo que se refiere a sus contenidos, hay algunas dimensiones y contenidos de particular importancia: la crisis del desarrollo, los conflictos armados y la afirmación de la paz, la democracia y los derechos humanos, y las dimensiones no económicas —migraciones, tensiones culturales, problemática ambiental y de género—.

La crisis del desarrollo

La “crisis del desarrollo” se inició en torno a 1982, al desencadenarse la crisis de la deuda externa y se enmarca dentro de las profundas transformaciones de la economía mundial. Los años ochenta, constituyeron una “década perdida” para los países del Sur en términos de pobreza, desigualdad y retroceso de los principales indicadores socioeconómicos de desarrollo. La crisis de la deuda, los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, y los crecientes problemas alimentarios —las hambrunas del África Subsahariana— han significado una dramática reversión del proceso de desarrollo y un fuerte desgaste de sus supuestos teóricos, acabando con la idea de que en el Sur podía esperarse un crecimiento eco-

nómico *per se*, aunque fuera dependiente, desarticulado y con escaso dinamismo. El problema para los países del Sur dejó de ser cómo lograr un desarrollo auto-centrado, equilibrado y equitativo y unas relaciones justas con el Norte (el NOEI), para pasar a ser, sencillamente, la supervivencia económica. Para ello, la recuperación del crecimiento económico y la reinserción en el mercado mundial se convirtieron en factores claves para evitar el riesgo de quedar definitivamente marginados en las relaciones económicas internacionales.

En este contexto, las Naciones Unidas en 1990, propone una nueva forma de entender el desarrollo —el “desarrollo humano”—, que mide los logros del desarrollo por su efecto real en la vida de la gente, en vez de los indicadores económicos convencionales.

Diversificando la agenda: la confluencia de las educaciones “para”

La educación para el desarrollo ante la dimensión integral de los problemas del desarrollo, enfrenta el desafío de incorporar en sus contenidos las dimensiones de otras “educaciones” que le son afines, ya que sólo de esta manera podrá ser un instrumento para el análisis crítico, la comprensión y la motivación a la acción frente a los retos de un mundo cada vez más complejo e interdependiente.

La dimensión socio-económica y política de las relaciones Norte-Sur y el desarrollo eran los temas centrales y casi únicos de la educación para el desarrollo “de tercera generación”. Los problemas ambientales, la crisis del desarrollo, los conflictos armados, los crecientes flujos migratorios, el racismo y la xenofobia, la dimensión de género entre otros, se han configurado como “grandes temas” de la educación para el desarrollo en los años ochenta, ampliando notablemente la agenda del decenio de los setenta. (Macintosh 1994: 2-5, Bourn y Ohri 1996: 3-5). Como consecuencia de ello, la educación para el desarrollo ha ido convergiendo e incorporando enfoques y contenidos de las otras “educaciones” sobre problemas globales que se fueron configurando en la década de los ochenta. y la práctica de los movimientos sociales (pacifismo, ecologismo, antirracismo, defensa de los derechos humanos...): la “educación ambiental”, la “educación para los derechos humanos”, la “educación multicultural” y la “educación para la paz” (Greig et al 1991: 29, Mesa 1994: 22-26).

En la dimensión cognitiva, en definitiva, la educación para el desarrollo ha ampliado su agenda para favorecer una mejor comprensión de la interdependencia global y los nexos estructurales entre el Norte y el Sur, entre la vida cotidiana y las cuestiones “macro”. La interdependencia —que fue el concepto central de la Campaña Norte-Sur del Consejo de Europa de 1988—, y el desarrollo humano y sostenible serán las nociones claves de esta generación.

Además de diversificar la agenda temática de la educación para el desarrollo, muchas organizaciones han asumido que el cometido de la educación para el desarrollo ya no puede obviar el cuestionamiento de un modelo de desarrollo, en el norte, depredador de los recursos y no sostenible. En este sentido, se ha afirmado un nuevo discurso, en el que se sostiene que el cambio global depende tanto del Sur como del Norte. Ello supone cuestionar el modelo de desarrollo tanto en el Norte como en el Sur, que no es social ni ecológicamente sostenible. La ayuda al desarrollo “tradi-

cional” —esto es, los proyectos de desarrollo y la ayuda de urgencia en situaciones de conflicto y de desastre— es necesaria y debe mejorarse su efectividad, pero el desarrollo global exige ir más allá de la ayuda y llevar a cabo cambios estructurales en el ámbito del comercio, la inversión, la deuda, los asuntos monetarios internacionales y la gestión del medio ambiente global (Smillie 1998: 24).

La quinta generación: La educación para la ciudadanía global

A mediados de los noventa, lo más significativo es la constatación de que la crisis del desarrollo ya no es sólo un problema del Tercer Mundo. Los países del Sur han quedado endeudados y empobrecidos, pero la crisis del “Estado del bienestar” en el Occidente industrializado, por un lado, y el fracaso de los regímenes del Este, por otro, muestran que la crisis del desarrollo es global y afecta, aunque de diferente forma, al conjunto del planeta. Ya no existen “imágenes objetivo” del desarrollo válidas ni en el Tercer Mundo ni el Primero, e incluso estas categorías han quedado obsoletas con el fin de la guerra fría (Lemaresquier 1987). Este es el marco de referencia para los enfoques deconstructivistas del “post-desarrollo”, que han planteado una crítica radical al concepto de desarrollo, considerado altamente ideologizado, culturalmente occidentalizador y eurocéntrico, y económica, social y ambientalmente inviable, lo que supondría, según Pierre Pradervand, una completa revisión de lo que hasta ahora entendemos por “educación para el desarrollo” (Pradervand 1995: 109).

El principal desafío para el desarrollo, tanto en el Norte como en el Sur, es el acelerado proceso de globalización y privatización de la economía mundial, particularmente en el orden monetario y financiero. Este proceso tiene profundas implicaciones para la existencia del Estado-nación. Los Estados nacionales están perdiendo el control de importantes esferas de actividad pública, como la política monetaria y otros instrumentos esenciales de la política económica. Esto significa que el contenido de la soberanía nacional y el papel del Estado-nación como actor de las relaciones internacionales se diluye progresivamente en un vasto mercado global. La erosión de la soberanía del Estado y el proceso de desregulación de las economías nacionales se corresponde además con el creciente poder y movilidad de los actores transnacionales privados. Las corporaciones transnacionales y de fondos de inversión movilizan grandes montos de capital y desplazan de un lugar a otro las actividades productivas, lo que a menudo tiene profundos efectos desestabilizadores para la economía “real”, el empleo, el bienestar de la población y el medio ambiente, como han puesto de manifiesto las recientes crisis de México, Asia, Rusia o Brasil.

Al debilitar la soberanía nacional, los procesos de privatización y globalización económica cuestionan directamente la noción y la práctica de la democracia representativa. La paradoja es que la democracia se ha expandido y parece haber sido reconocida casi universalmente como la mejor forma de gobierno justo en el momento histórico en el que su eficacia como forma nacional de organización política comienza a ser cuestionada por las dinámicas de la globalización. Por otra parte, los procesos de exclusión social generados por la globalización atentan

*El principal
desafío para
el desarrollo
es el
acelerado
proceso de
globalización
y privati-
zación de la
economía
mundial.*

directamente contra la igualdad de derechos que está en la base de una concepción de la democracia con contenido social y económico, y no sólo político. Estos problemas afectan a todos los regímenes democráticos, pero son quizás más graves en las incipientes democracias de los países del Sur. Una década de ajuste estructural ha contribuido a debilitar al Estado que se ha mostrado incapaz de ofrecer respuesta a las necesidades y demandas de la población.

Por otra parte, el proceso de globalización también implica tendencias a la fragmentación que erosionan “desde abajo” la noción de Estado-nación: grupos sociales excluidos del mercado, grupos que reivindican su identidad nacional y su derecho a la diferencia ante dinámicas homogeneizadoras.

Estas realidades plantean la necesidad de crear nuevos marcos de gobernanación global, fortaleciendo las instituciones y regímenes internacionales existentes, o creando otros nuevos. Y dar a estas instituciones y regímenes carácter y contenido democrático, permitiendo la participación de los ciudadanos en los asuntos internacionales. La educación para el desarrollo de los noventa, como ha señalado Nora Godwin, es en este sentido una “educación para la ciudadanía global” (Godwin 1997: 15).

Desde la perspectiva de la educación para el desarrollo, estas dinámicas plantean retos formidables. En primer lugar, redefinir los contenidos de manera que permitan la comprensión crítica del fenómeno de la globalización. En segundo lugar, reafirmar el vínculo entre desarrollo, justicia y equidad, ahora a nivel global (Fien 1991). En tercer lugar, y en estrecha relación con las ONG, con los movimientos sociales y con las organizaciones de la sociedad civil que integran redes internacionales, promover una creciente conciencia de “ciudadanía global” y, a partir de ella, definir pautas de participación y acción ciudadana frente a estas dinámicas. En este sentido, la educación para el desarrollo de los noventa se ha configurado como una “educación global frente a la globalización” (Garbutcheon et al. 1997: 26).

No es fácil comprender las causas y dinámicas de los conflictos de la posguerra fría, y ello es particularmente visible en el ámbito educativo, en el que las ONG y otros movimientos sociales no logran articular objetivos y mensajes claros. Ante la perplejidad y la falta de posiciones claras, es frecuente recurrir a estrategias asistencialistas y, en el plano educativo, a un discurso y una práctica más propia de la “primera generación” de la educación para el desarrollo que de enfoques posteriores.

Un ámbito en el que los cambios han sido particularmente visibles es el de las estrategias de intervención. La educación para el desarrollo ha estado cada vez más vinculada a las grandes campañas de incidencia política, cabildeo o *lobbying* sobre temas globales de las ONGD más evolucionadas. Campañas que intentan ir “de la protesta a la propuesta” planteando cambios realizables a corto plazo y no sólo, como en el pasado, un crítica radical al orden vigente. Hay que señalar, en este marco, que se ha ido afirmando un enfoque más integral, en el que se pretenden lograr sinergias a través de la vinculación creciente entre investigación, movilización social, acción sociopolítica y educación para el desarrollo. En este ámbito han sido especialmente importantes las estrategias de trabajo en red, a través de redes locales, nacionales e internacionales (*networking*), que

internet ha hecho mucho más accesible, y el establecimiento de alianzas con otras organizaciones sociales (The Economist, 1999: 18).

En la vinculación creciente de la Educación para el Desarrollo y las actividades de incidencia política y *lobbying* han tenido un papel crucial las ONGD del Sur más evolucionadas, que han ido presionando a sus asociadas en el Norte para que abandonen paulatinamente la “cultura del proyecto” y reorienten sus actividades en ese sentido (Smilie 1993: 35). Más allá de proporcionar recursos financieros, las ONGD del Sur han demandado un papel más activo de las ONG del Norte en la acción política para modificar las estructuras y las políticas que obstaculizan el desarrollo global, en ámbitos como la deuda, el comercio o el medio ambiente (Senillosa 1998: 47). Dos acontecimientos clave en este proceso fueron la adopción de la “Declaración de Manila sobre Participación Popular y Desarrollo Sostenible” de junio de 1989, preparada por los directores de 31 importantes ONGD del Sur; y la “Carta Africana para la Participación Popular y el Desarrollo” de 1990, conocida como “Declaración de Arusha”, en la que ONGD del Norte y del Sur abogaban por una mayor implicación de las ONGD de los países industrializados en la acción política. También han sido hitos importantes en este sentido los “foros alternativos” realizados en paralelo a las Conferencias mundiales convocadas por las Naciones Unidas y las reuniones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o, más recientemente, la Organización Mundial de Comercio.

En estos foros y declaraciones se ha ido afirmando la idea de que las ONGD del Norte y del Sur deben actuar de forma concertada, a través de redes nacionales, regionales y globales con una agenda estratégica común de cambio a todos los niveles. Dentro de esta agenda común emerge, no obstante, un cierto reparto de funciones: las ONGD del Sur se orientan a la movilización y el “empoderamiento” de los grupos más pobres y excluidos, y las ONGD del Norte se centran en campañas de presión política para modificar el patrón de “maldesarrollo” del Norte y las políticas que desde los países industrializados contribuyen a gestar y perpetuar unas relaciones Norte-Sur injustas.

Esto podría entenderse como una muestra de la madurez alcanzada por una educación para el desarrollo que, en los casos más evolucionados, ya se encuentra muy alejada de las tradicionales campañas de recaudación.

También se han impulsado nuevos métodos de sensibilización y educación, que han ido desde el uso de los medios de comunicación y la cultura de masas — festivales de rock, producciones televisivas —, a las campañas institucionales. El amplio uso de internet para la educación para el desarrollo ha sido la innovación más reciente en este ámbito.

Otra de las preocupaciones centrales de este periodo ha sido el análisis de los medios de comunicación. La revolución de las tecnologías de la comunicación no parece haber contribuido a mejorar la información y la comprensión de la realidad de los países en desarrollo por parte de la opinión pública de los países industrializados. Ciertamente es que la televisión global ha acercado esa realidad en sus aspectos más dramáticos — guerra, genocidio, catástrofes naturales, hambre, crisis económicas, desastres ambientales, estados fallidos, corrupción, violaciones de los derechos humanos... — y con ello ha contribuido, a veces decisivamente, a

gestar la conciencia global y el universalismo moral de los que se nutren las actitudes solidarias, la acción de las ONGD y el apoyo social a la cooperación al desarrollo (Ignatieff 1998: 28, Smillie 1998: 26).

Pero también puede afirmarse que la avalancha informativa de la revolución tecnológica, y en particular la televisión global, ha acentuado algunos de los peores rasgos de las modernas tecnologías de la información: la desinformación por sobreinformación; la presentación de la realidad sin conexión con su contexto, en una sucesión de acontecimientos incoherentes y aparentemente aleatorios, que comienzan por sorpresa y terminan sin consecuencias visibles una vez que la atención de los medios se desplaza a otro lugar. La trivialización de las situaciones dramáticas, cada vez más entremezcladas con entretenimiento (el llamado *infotainment*) y “televisión basura”; y lo más relevante de cara a la educación para el desarrollo es que, debido a la propia lógica de los medios, los países en desarrollo sólo aparecen asociados a situaciones negativas, y en muchas de ellas la intervención de los países industrializados —sea a través de los gobiernos, las organizaciones internacionales, los “cascos azules”, o esos “héroes contemporáneos” que son los expatriados occidentales de las ONG— son presentados como solución, y en no pocas ocasiones como la única solución posible (Aguirre, 1999).

Este tipo de mensajes, que no son nuevos, pero que la revolución de las tecnologías de la comunicación ha hecho más ubicuo y omnipresente, refuerzan una serie de estereotipos negativos sobre el Sur ya muy arraigados en el imaginario colectivo occidental. El mensaje predominante es que Occidente es el único que puede salvar a un Sur incapaz de gobernarse a sí mismo, de alimentarse a sí mismo, de salvarse a sí mismo del desastre al que le condenan la naturaleza, el atraso y la ignorancia (Smillie 1998: 27). Las consecuencias políticas son evidentes: desresponsabilizar al Norte de las situaciones de crisis en el Sur —el tratamiento informativo del genocidio ruandés, por ejemplo, reveló un asombroso grado de amnesia colectiva respecto a la historia colonial, a los permanentes intereses económicos y políticos de Occidente, y a su papel como suministrador de armas— y, en su caso, ayuda a legitimar nuevas intervenciones, a menudo revestidas de retórica humanitaria (Furedi 1994).

Estos procesos tienen importantes implicaciones éticas, teóricas y prácticas para la educación en general, y para la educación para el desarrollo, en particular. En el terreno de los valores y las actitudes, ¿cómo combinar el universalismo ético y el valor de la solidaridad con la capacidad crítica necesaria para hacer frente a los estereotipos negativos?; en el ámbito cognitivo, ¿cómo facilitar los conocimientos necesarios para que los acontecimientos transmitidos por los medios puedan ser situados en su contexto social e histórico, y ser interpretados correctamente?. Lo más importante, ¿cómo lograr que los valores, las actitudes y los conocimientos contribuyan al compromiso, a la participación y al cambio?.

Estas no son, desde luego, preguntas nuevas para la educación para el desarrollo. Esos interrogantes son, como se indicó, los mismos que animaron su aparición hace ya más de cuatro décadas. Lo que sí es nuevo es el contexto internacional, que hace más difícil, y a la vez más perentorio, encontrar respuestas.

Referencias bibliográficas

- Mariano AGUIRRE (1999), “Los medios periodísticos y el espectáculo humanitario” en *Los desafíos de la acción humanitaria*, Barcelona, Icaria.
- Shahidul ALAM (1995), “The visual representation of Developing Countries by Development Agencies and the Media”, *The Development Education Journal* nº 3, junio, pp. 8-11
- Miguel ARGIBAY, Gema Celorio y Juan José Celorio (1996), *Juntamundos. Pedagogía urgente para el próximo milenio. Guía didáctica de educación para el desarrollo*, Bilbao, Hegoa. (1998), *De Sur a Norte. Vidas paralelas de las mujeres*, Bilbao, Hegoa.
- Asamblea General del Comité de Enlace de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo europeas ante la CE. (1989), *Código de conducta: imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo*, Bruselas
- Douglas BOURN y Ashok Ohri (1996), “Race, culture and education. Development Education in the context of a multiracial society”, *The Development Education Journal* nº 6, invierno, pp. 3-5
- Juan José CELORIO (1995), “La educación para el desarrollo”, *Cuadernos Bakeaz* nº 9, junio
- John FIEN (1991), “Commitment to justice: a defence of a rationale for development education”, en *Peace, Environment and Education.*, Vol. 2 (4)
- Michael GARBUTCHEON, John Fien y Jane Williamson-Fien (1997), “Processes of globalisation and (re)new(ed) emphases for global education”, *The Development Education Journal* nº 7, verano, pp. 31-33
- Nora GODWIN (1997), “Educatin for Development’ a framework for global citizenship”, *The Development Education Journal* nº 7, verano, pp. 15-18
- Manuel GÓMEZ-GALÁN y José Antonio Sanahuja (1999), *El sistema internacional de cooperación al desarrollo. Una aproximación a sus actores e instrumentos*, Madrid, CIDEAL
- Rafael GRASA (1990), “Aprender la interdependencia: educar para el desarrollo”, en José A. Sanahuja (coord.), *Juventud, desarrollo y cooperación*, Madrid: Cruz Roja Española, pp. 97-107
- Michael IGNATIEFF (1998), *El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna*, Madrid, Taurus
- Jesús JARES (1999), *Educación para la paz. Su teoría y su práctica*, Madrid, Popular.
- David C. KORTEN (1987), “Third Generation NGO strategies; a key to people-centred development”, *World Development* (supplement), vol. 15
- David C. KORTEN (1990), *Getting to the 21th century: Voluntary action and the global agenda*, West Hartford (CO), Kumarian Press
- Thierry LEMARESQUIER (1987), “Prospects for Development Education: some strategic issues facing European NGOs”, en *World Development* vol. 15 supplement, pp. 201-211
- Margaret MACINTOSH (1994), “Development education and Environmental Education: Working together towards a common goal”, *The Development Education Journal* nº 2, diciembre
- Manuela MESA (ed.) (1994), *Educación para el desarrollo y la paz. Experiencias*

- y propuestas en Europa*, Madrid, Editorial Popular
- Manuela MESA (1995), "Otras formas de cooperar: presión política y educación", en *Papeles. Cuestiones internacionales de paz, ecología y desarrollo* nº 55, verano, pp. 45-55
 - Don MOXON (s.f.), "Conceptos, enfoques e historia de la educación para el desarrollo", Miguel Argibay et al., *Actas. I Congreso de Educación para el Desarrollo*, Bilbao: Hegoa, pp. 7-16
 - María Luz ORTEGA (1994), *Las ONGD y la crisis del desarrollo*, Madrid, IEPA-LA/ETEA
 - Pierre PRADERVAND (1995), "The wings of defeat: towards a new development education paradigm", en Colm Foy y Henny Helmich, *Public Support for International Development*, París, OCDE, pp. 109-121
 - Colm REGAN (1994), "Non-Governmental Organisations and Development Education: Natural Allies?", *The Development Education Journal* nº 1, junio, pp. 2-5
 - Jo ROWLANDS (1998), "El empoderamiento a examen", *Desarrollo y Diversidad Social*, pp.88-93.
 - Ignasi SENILLOSA (1998), "A new age of social movements: a fifth generation of non-governmental development organizations in the making?", *Development in Practice* vol. 8 (1), febrero, pp. 40-53
 - Ian SMILLIE y Henny Helmich (1993), "Non-Governmental organizations and governments: stakeholders for the development", OCDE, pp.22
 - Ian SMILLIE (1998), "Optical and Other Illussions. Trends and Issues in Public Thinking About Development Co-Operation", en Ian Smillie y Henny Helmich (eds.), *Public Attitudes and International Development Co-operation*, París, OCDE, Consejo de Europa, pp. 21-40
 - *The Economist* (1999), "The non-governmental order", 11 de diciembre, pp. 18-19
 - UNESCO (1979), *Los problemas mundiales en la escuela. El papel de las Naciones Unidas*. Madrid: Atenas/UNESCO
 - UNESCO (1983), *La educación para la cooperación internacional y la paz en la escuela primaria*. París: UNESCO
 - UNESCO (1987), *Didáctica sobre las cuestiones universales de hoy*. Madrid: Teide/UNESCO
 - Lennart VRIENS (1990), "Peace education in the nineties: a reappraisal of values and options", en *Peace, Environment and Education*, (1), otoño

Colombia en la encrucijada:	28
– Un horizonte vacío	29
– El placer y la guerra digital	35
– Desterrados	41
– En el batallón	47
– Los señores de las esmeraldas	57

Colombia en la encrucijada

Este dossier es un homenaje a Jaime Garzón, actor, periodista y mediador de paz. El asesinato de Garzón fue el más espeluznante de toda una serie que ha obligado a huir de sus casas a más de un millón de personas aterrorizadas. Colombia es un país donde la antigua enemistad entre la izquierda y la derecha se cruza con la violencia monetarizada de una economía política basada en la cocaína.

Los artículos han sido recopilados por Michael Griffin, con Dolores Cortés y publicados en la revista británica *INDEX on Censorship*, nº 1, 2000 (www.indexoncensorship.org – contact@indexoncensorship.org)

MALCOM DEAS

Un horizonte vacío

Dividida por los rebeldes, y ahora por las drogas, la democracia más antigua de Suramérica parece estar al borde de la fragmentación.

“La causa más común de la guerra es la guerra”. Alex de Waal, Index 5/1999

“Nuestros compromisos morales con lugares lejanos son notoriamente selectivos y parciales”. Michael Ignatieff, The Warrior's Honour. Ethnic War and the Modern Conscience.

Tengo ante mí la etiqueta de un tarro de café: *Waitrose's Colombian Instant*. Frente a un bosquecillo botánicamente dudoso en el que el artista ha repartido a algunos recolectores con sombreros mexicanos, aparece su idea del propietario, un hombre con barba y bigote. Viste una extravagante chaqueta con botones de latón y bordados en oro con charreteras escarlata, una especie de batín militarizado, y lleva una taza y un platillo floreados. Naturalmente, nada de esto se parece remotamente a la realidad, incluso es aún menos real de lo que aparece en las etiquetas más corrientes.

He hecho una lista (no exhaustiva) de seis personalidades colombianas que saben expresar sus ideas, a las que he conocido y que han sido asesinadas en el último decenio: tres políticos, dos profesores de universidad y un humorista. Los políticos son Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez y Bernardo Jaramillo; los profesores, Jesús Antonio Bejarano y Darío Betancourt; y el humorista, Jaime Garzón, el Cantinflas más intelectual de Colombia. Todos ellos tenían trayectorias, filiaciones políticas y antecedentes muy distintos, y todos ellos están censurados ahora por el supremo censor. En dos casos, quizá tres, hay indicios que señalan al narcotráfico, pero ni en uno sólo se puede estar totalmente seguro de quiénes fueron los autores de su muerte. En dos de los últimos tres asesinatos pudieron haber sido los paramilitares o la guerrilla, y uno pudo ser simplemente un delito común. Cabe pensar en más de una versión verosímil. Hay que tener en cuenta que a menudo es imposible que una imaginación “normal” conciba los procesos de razonamiento de unos grupos pequeños, armados, clandestinos y violentos. Las amenazas y las

Malcom Deas es miembro del Colegio de St. Anthony, de la Universidad de Oxford, y cofundador del Centro Latinoamericano de dicha Universidad. Sus trabajos se han publicado en *Del poder y la gramática* (Taurus), *Intercambios violentos* (Alfaguara) y *The Legitimation of Violence* (Macmillan, 1997). Visitó Colombia por primera vez en 1963.

Traducción: Berna Wang

acciones que silencian a la gente en Colombia proceden de muchas direcciones diferentes y podría haber motivos que uno no puede adivinar.

El pasado mes de noviembre, alrededor de dos millones y medio de personas se manifestaron en las calles de Bogotá contra la violencia; digamos que un tercio de los habitantes de la ciudad. En otras ciudades se organizaron manifestaciones de proporciones similares. Sus efectos inmediatos sobre los diversos autores de actos violentos contra los que estaban dirigidos no son tan evidentes: puede que a largo plazo tengan alguna repercusión sobre los elementos más políticos de la dirección de la guerrilla, pero no ablandarán los corazones más duros, los de los criminales que a menudo contratan los elementos políticos, o los comprometidos con la lucha armada. Quizá por ese motivo —su misma carencia de un objetivo fácilmente definible—, las manifestaciones apenas han tenido eco en el extranjero; en este país, las noticias sobre ellas sólo llegaron a los insomnes que escuchaban el Servicio Mundial de la BBC. Pero son significativas. Son protestas monumentales contra la violencia: no a favor del Gobierno, al que las encuestas dan pocos puntos; ni contra el ejército ni a favor de él, aunque ocupa un puesto algo más alto; ni a favor de la guerrilla ni de los paramilitares, ambos en puestos más bajos aún que los políticos; ni a favor de la paz a cualquier precio; ni a favor de ésta o aquella reforma; sino contra las matanzas, los homicidios, los secuestros, las desapariciones, el desarraigo y todas las expresiones de violencia que sufre el país desde hace tanto tiempo.

La etiqueta del tarro de café, la confusa lista de muertos, las enormes multitudes que no aparecen en los medios... Colombia no está tan lejos de Europa o de EE UU, pero nuestro “compromiso moral” —o, de hecho, nuestro compromiso intelectual— es como el que tendríamos con un lugar realmente muy lejano. Es como si hubiera una especie de censura. Para ciertas mentalidades, uno de los atractivos del país es que es poco conocido y poco visitado. No es un país que posea el interés estratégico que atrae a periodistas y estudiosos, por lo tanto, la cobertura informativa que recibe suele ser selectiva y parcial: drogas, homicidios, matanzas, paramilitares y guerrillas, por lo general sin contexto y con escaso reconocimiento del enorme daño que las drogas están haciendo al país, componen casi toda la errática atención que obtiene en la prensa y en los medios de comunicación británicos, con las honrosas excepciones del *Economist* y del *Financial Times*. Es totalmente imposible saber quién hace qué a quién, y por qué, o cuáles son las perspectivas del país. He aquí el panorama, la versión más desapasionada que puedo ofrecer.

Colombia es una democracia que aspira a ser reconocida como tal y lo viene siendo, con la excepción de unos años, a lo largo de sus 170 años de historia como país independiente. Por lo general, resulta fácil que quienes adoptan la retórica de los críticos locales tachen su historia democrática de fachada y de meramente formal, pero es algo más que eso. El electorado es en parte clientelístico, en parte opinión, como en tantísimas otras democracias más conocidas. Los políticos sí responden ante la opinión pública, y el sistema es capaz de producir de hecho algunas personalidades capaces y valientes: Antanas Mockus, recientemente elegido alcalde de Bogotá, es un político más interesante que cualquiera de los candidatos actualmente en liza en Londres, y sus logros no han sido desdeña-

bles. Algunas zonas del país son más democráticas que otras, pero para gobernar hay que obtener votos, y las elecciones son auténticas y competitivas. En las zonas sometidas a su influencia, la guerrilla ha aprendido a no oponerse a ellas, sino que impone promesas a los candidatos, que deben hacer campaña para sobrevivir, y manipula a los que resultan elegidos.

Los problemas del país no se derivan de la inexistencia de elecciones, de limitaciones a la libertad y a la participación impuestas desde arriba ni de la restricción por el Gobierno de las libertades políticas convencionales. Todos los protagonistas de los conflictos de Colombia aprovechan al máximo los medios de comunicación locales, tolerantes y a menudo sensacionalistas, incluso desde la cárcel. Hace poco, un equipo de televisión de Reuters filmó atentamente a los guerrilleros que hacían ejercicios de instrucción en una prisión de Bogotá, a la que es más fácil acceder que a la prisión de Maze de Irlanda del Norte. Los límites a la expresión y a la actividad política son los que impone la prudencia ante las amenazas, límites lo bastante reales.

En los años cuarenta y cincuenta, la competencia por el poder entre los dos partidos tradicionales del país, liberales y conservadores, se hizo sectaria y violenta, y surgió la primera guerrilla rural, integrada en su mayor parte por liberales. En 1957, cuando liberales y conservadores llegaron a un acuerdo para repartirse el poder para poner fin a las luchas sectarias y derrocar un efímero gobierno militar, la mayoría de los guerrilleros liberales, cuyas motivaciones eran fundamentalmente partidistas, había dejado de combatir, aunque algunos continuaron luchando bajo la influencia comunista. Éstos, que formaron el núcleo original del principal movimiento guerrillero del país, las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC), fueron alentados por la victoria de Fidel Castro en Cuba, que también inspiró al Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente la segunda organización guerrillera de Colombia. Su actividad, y la violencia en general, pareció disminuir a mediados de los años setenta, cuando los homicidios se redujeron hasta un índice de unos 20 por cada 100.000 habitantes, cifra bastante elevada, pero muy alejada de los 70 y 80 de los últimos años.

Después, la violencia comenzó a aumentar de nuevo. Los nuevos recursos para los movimientos armados llegaron de las drogas y de la intensificación de la extorsión, especialmente a la industria petrolera, y de los secuestros. También recibieron alguna nueva inspiración de los acontecimientos revolucionarios de Centroamérica. El apoyo popular era irrelevante. Los frentes se multiplicaron, la “presencia” en los municipios se extendió más, aunque las cifras habituales —“un tercio del país”, o más, según el gusto de cada uno— no transmiten que la presencia de la guerrilla se concentra en las zonas menos pobladas del país. Las FARC podrían contar con alrededor de 20.000 guerrilleros, algunos más militantes que otros, y el ELN con unos 7.000. En los años ochenta, surgieron varios grupos paramilitares antiguerrilla, cuyos elementos se calculan actualmente en unos 5.000. Colombia tiene una población de más de 41 millones de habitantes.

Con unas cifras más reducidas, se habría podido hacer una reseña similar hace diez o incluso veinte años. Los intentos de lograr la paz llevan también mucho tiempo en marcha: la serie actual, iniciada, frustrada y rota, dado que los gobiernos elegidos por las urnas cambian cada cuatro años, debe remontarse

hasta la administración del presidente Julio César Turbay, que ocupó el cargo desde 1978 hasta 1982. Los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana, novedosos en algunos de sus aspectos, son sólo los más recientes de una larga línea de negociaciones intermitentes. Con algunos grupos más pequeños incluso han tenido éxito.

La historia es esencial, tan esencial para comprender a la guerrilla y a los paramilitares colombianos como para comprender Irlanda del Norte, otro conflicto de difícil solución con el que estamos más familiarizados y que, en algunos aspectos, es similar. La dirección de la guerrilla está tan obsesionada con la historia como cualquier aplicado paramilitar del Ulster o miembro del IRA provisional encarcelado. Una obra de reciente publicación en Bogotá tiene el atractivo título de *Las verdaderas intenciones de las FARC*. Hay que comprarla, sólo por si cumple su promesa, pero resulta que es casi todo historia: los orígenes de la lucha, la versión oficial del grupo guerrillero sobre quién hizo qué en los años cincuenta y sesenta. No expone gran cosa de su programa, su proyecto, su política. El conflicto que contiene trata del conflicto; la causa de esta guerra es la guerra.

El logro de las FARC es su historia, su supervivencia, su crecimiento y su organización, que ahora es fundamentalmente militar y logística, y sigue representada en buena parte por su veterano líder Manuel Marulanda, activo desde los años cincuenta. Obviamente, necesita muchos ingresos y, en consecuencia, ha adquirido grandes participaciones. Las cifras sobre el porcentaje de dinero que recauda a través de los impuestos, el fomento y la protección del negocio de la droga varían; el 38% es el cálculo más bajo que he visto, pero esta precisión no debe tomarse al pie de la letra ya que existen otros cálculos muy superiores. Las FARC siempre señalan que no son los únicos que ganan dinero con este negocio. Las declaraciones políticas del movimiento son escasas y poco interesantes. Tiene un programa de diez puntos, revisado por última vez en 1992, pero está lleno de clichés y poco inspirado al que nadie, dentro y fuera de la organización, dentro y fuera del país, presta mucha atención. La opinión pública colombiana siempre está dispuesta a criticar y, por tanto, hay muchas razones por las que bien vale la pena no tener un gran programa: si no hay programa, no pueden criticarlo.

Así pues, como dicen en el librito: “No tenemos mucho que negociar”. La postura del movimiento en las actuales negociaciones de paz —y la del ELN es similar— es presionar con la violencia y supervisar y aprobar mientras va surgiendo de alguna forma la “nueva Colombia” mediante un proceso de consulta popular. Cuando el 90% —el porcentaje es suyo— de la indefinida nueva Colombia esté en marcha, considerarán la posibilidad de dejar de combatir. El desmantelamiento no está siquiera en el horizonte lejano.

Son muchos los problemas y muchas las razones ocultas. La guerrilla no tiene la autoridad moral ni el apoyo popular suficientes para respaldar el papel que se adjudican a sí mismos; algunos dan la explicación revolucionaria de que la popularidad llega después de tomar el poder, no antes. Los paramilitares contestan a sus pretensiones con violencia, aterrorizando y expulsando a la población en las zonas que consideran que están bajo la influencia de la guerrilla, y el Gobierno, que hace demasiadas concesiones a la guerrilla, provoca el aumento de activi-

dad por parte del bando paramilitar. Dejando aparte la cuestión de cuántos dirigentes de la guerrilla desean convertir el capital militar adquirido, en capital político, los líderes que así lo desean se enfrentan a la dificultad de imaginar cómo hacerlo, y a las graves tensiones que sufre todo movimiento armado cuando realiza un cambio de esta clase, o incluso cuando acuerda una tregua.

Si alguien avanza demasiado rápido, será acusado de traicionar al movimiento, su historia, su legado, sus muertos. La disciplina y la moral dependen en cierta medida de los combates, o al menos de la perspectiva de combatir —como en muchas guerras de este tipo, durante largos periodos, en la mayoría de los lugares no pasa gran cosa— y es difícil mantener la disciplina y la moral mientras durante una tregua se espera a ver qué ocurre. Los recursos provienen de las drogas, de la extorsión y de los secuestros. No son actividades para realizar en tiempo de paz; ¿de dónde vendrán, en la paz, recursos similares? Algunos dirigentes tienen más talento y perspectivas políticas que otros, aunque, en general, el talento político es más bien escaso. Después de tantos años y de tanta historia, la desconfianza en el ejército es visceral y cualquier cambio en la modalidad de actividad política exigirá, obviamente, unas garantías minuciosas y costosas.

Las FARC nos recordarán lo que sucedió con su rama política, la Unión Patriótica (UP), cuando a mediados de los años ochenta siguió la doctrina imposible de “la combinación de todas las formas de lucha”, las pacíficas y las violentas, hasta la arena electoral: muchos de sus miembros fueron asesinados. (Las FARC no nos recordarán los aspectos más turbios de ese episodio, que incluyeron la rivalidad y la enemistad con los intereses de la droga, ni que entre los políticos muertos en aquellas fechas también había muchos representantes de otros partidos). Los guerrilleros tienen muchísimos enemigos, y buena parte de ellos son merecidos.

Aunque los guerrilleros, como el ejército, exageran continuamente sus victorias militares, no se sienten actualmente muy presionados para negociar, y obviamente muchos están encantados de que las cosas continúen tal como están.

¿Cómo puede ser desapasionado el relato de esta situación? La mayoría de los escritores, con independencia de lo que crean que están haciendo, intentan despertar simpatías —en su mayor parte para las víctimas no combatientes y los desplazados, algunos para la guerrilla, otros contra los paramilitares, otros contra la intervención y la presión externas— criticando la nefanda política estadounidense sobre la droga —algunos a favor de ella—, afirmando que “hay que hacer algo”, buscando la atención benévola de la “comunidad internacional”.

Lo que hay que hacer es crear un Estado más eficaz, y eso significa mejorar la justicia —en el sentido más básico y antiguo, y no en el social— y hacer que las fuerzas del orden sean más eficaces, y eso significa fuerzas armadas y policía: en última instancia, lo que reduce a los señores de paramilitares la guerra y a la guerrilla es la fuerza del Estado.

Colombia no cuenta con una tradición autoritaria, e históricamente ha tenido gobiernos débiles y unas estructuras administrativas muy escuetas. La tendencia nacional es a buscar soluciones en acuerdos políticos, no a crear instituciones más fuertes, para las cuales no existieron recursos durante buena parte de la historia del país. Esta tradición de gobiernos débiles persistió incluso cuando hubo

*Lo que hay
que hacer es
crear un
Estado más
eficaz, y eso
significa
mejorar la
justicia*

más recursos, siguiendo de algún modo la línea italiana: la pobreza ya no es la explicación que justifica las peculiaridades del gobierno italiano.

Ha habido algunas señales de progreso y de mayor lucidez en este sentido. Hay que crear un Estado más eficaz, se llegue o no a acuerdos entre los combatientes, dado que los acuerdos por sí solos no proporcionarán las garantías necesarias. Un Estado más eficaz podría facilitar esos acuerdos. Una política de derechos humanos para Colombia, en EE UU o en la Unión Europea, debería tener alguna posibilidad de mejorar las oportunidades para estos derechos, y es dudoso que la mejor forma de alcanzar ese fin sea el tratamiento de paria que algunos recomiendan y que bien podría empeorar la situación. Sin un Estado más eficaz, todos los que intentan hacer algo, como hicieron, en sus diferentes estilos, las seis personas de mi lista, seguirán jugándose la vida.

ROBIN KIRK

El placer y la guerra digital

Colombia se enfrenta a una paradoja mortal. Los únicos productos que los países desarrollados pagan bien son la cocaína y la heroína, pero su mejor cliente le castiga por suministrar precisamente lo que demandan sus consumidores.

Un amigo me dijo una vez que la política colombiana era complicada, pero no confusa. Cabría decir lo contrario de la política estadounidense en Colombia, que es confusa, pero terriblemente sencilla.

Lo que está en juego es el placer, no la política. Los estadounidenses compramos narcóticos en cantidades ingentes, pero nos avergonzamos de lo que consideramos la parte podrida en el corazón de nuestra cultura. Se puede culpar a la ética del trabajo, cuya recompensa es el placer sin límites. O a nuestro legado puritano, a la televisión, al aburrimiento. Esa es la parte confusa.

El resultado es que, aun cuando compramos drogas, las declaramos ilegales. El presidente Richard Nixon fue el primero en declararles la guerra. En los tres decenios que siguieron, los ciudadanos estadounidenses gastaron miles de millones de dólares en comprarlas y después más miles de millones de dólares en castigar a quienes las vendían. La delincuencia resultante ha hecho que nos armenos como nunca se había armado ninguna otra nación en tiempo de paz. Y no obstante, hoy las drogas ilegales son más baratas, más potentes, más fáciles de conseguir y más populares que nunca.

Se avecinan las elecciones y la guerra contra las drogas reaparece en los discursos. Ningún candidato reconoce el asombroso fracaso de esta guerra. Ser duro con las drogas es una necesidad política, como besar bebés. Republicanos y demócratas comparten la opinión resumida por Al Gore: la cocaína y la heroína están en el lado erróneo de la "línea fundamental que divide lo correcto y lo erróneo en nuestras mentes y en nuestros corazones".

Quienes visitan por primera vez Washington suelen sorprenderse al ver que el Congreso funciona gracias a una veintena de "no-se-sabe-quié". Mientras los miembros electos se pronuncian sobre la televisión por cable, sus ayudantes discuten de política en despachos el doble de grandes que los dormitorios colectivos de las residencias universitarias. La guerra contra las drogas fue diseñada en estas salas. Al igual que yo, estos ayudantes crecieron en un caldo de estimulan-

Robin Kirk es autora de *The Monkey's Paw: New Chronicles from Peru*, coeditora de *The Peru Reader: History, Culture, Politics*, y responsable para Colombia de Human Rights Watch. Las opiniones aquí expresadas son de la autora y no reflejan los puntos de vista de esta organización.

Traducción: Berna Wang

tes recreativos. Sin embargo, al igual que Nixon y sus sucesores, no culpan de las drogas a los consumidores sino a los sitios donde causa menos agitación nacional: "por allí".

El "por allí" más relevante ahora es Colombia, que produce la mayor parte de la cocaína y la heroína que se vende en EE UU. Los traficantes colombianos dominan las redes de distribución y son unos exportadores imaginativos, pero Colombia tiene pocas opciones. El mercado global ya no quiere su café, su ganado ni sus plátanos. Como ha escrito el sociólogo español Manuel Castells, los "imperios cibernéticos" necesitan poco a Colombia y similares. Una de las pocas formas que quedan de participar es a través de la delincuencia: Castells lo llama la "conexión perversa". Las mafias rusas han establecido nuevos lazos con Colombia porque Rusia hace frente al mismo muro digital. El puerto de Turbo, que desde Florida domina el Caribe, es el escogido por los barcos rusos, que descargan AK-47 a cambio de drogas.

El eje de la política estadounidense contra las drogas es la erradicación aérea. Entre 1990 y 1998, más de mil millones de dólares de la ayuda se destinaron a apoyar a la policía en la fumigación del sur del país. La erradicación aérea es maravillosamente moderna. Se hace con máquinas y evita molestos enfrentamientos humanos, a diferencia de lo que ocurrió en los años ochenta, cuando los peruanos pagados por EE UU para arrancar los arbustos de coca fueron recibidos a tiros por los airados vecinos y amigos que los cultivaban. En Colombia, los pilotos del Departamento de Estado fumigan con pesticida de marca Round Up por la mañana y pueden estar de regreso por la tarde, a tiempo para tomar unas copas, sin poner los pies en tierra. Es Kosovo: los únicos daños colaterales son el maíz y las judías. Visité San José del Gaviare, desde donde salen estos vuelos. Los instructores estadounidenses parecían más unos locos de la informática que guerreros. Sus pantallas parpadeaban con las trayectorias en arco de los Turbo Trush que se dirigían a los campos cuya destrucción estaba prevista ese día.

La erradicación tiene desde hace tiempo el apoyo de los dos partidos: Clinton autorizó el primer vuelo en 1994. Cuando los republicanos ganaron la Cámara de Representantes, media docena de congresistas se apropiaron de la cuestión como una forma de despotricar contra la administración Clinton (como dijo un ayudante, "los *clintonistas* que fuman hierba, esnifan cocaína e inhalan heroína"). Entre los más poderosos está Dennis Hastert, republicano por Illinois y ex entrenador de lucha, que se convirtió en presidente de la Cámara tras la caída de Newt Gingrich y de Bob Livingston por sus pecadillos económicos y sexuales. Sin embargo, quien tiene más peso real es Benjamin Gilman (republicano por Nueva York), con 27 años de experiencia y presidente del poderoso Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara. Gilman ha citado reiteradamente a funcionarios de la administración ante el comité que preside para arremeter contra ellos por la "blandura" de la política de Clinton sobre las drogas. Los funcionarios respondían diligentemente con sus montañas de estadísticas. A veces parecía que el producto más importante de la guerra contra las drogas eran esas estadísticas, compiladas y ordenadas en un agobiante informe tras otro. En 1999, cualquier persona con lápiz y papel podía ver que EE UU iba perdiendo esa guerra, y de forma espectacular.

El día que visité San José del Guaviare, los pilotos permanecían inactivos por la lluvia. Se habían fumigado reiteradamente los campos, pero las “malditas plantas se negaban a morir”, dijo Pete, el jefe. Pete quería ir más allá, pero era demasiado lejos para los helicópteros: los traficantes saben que los escoltas de los helicópteros tienen una autonomía de vuelo de dos horas, por lo que se limitan a planear fuera de ese límite. Cuando los Turbo Trush vuelan solos, los pilotos corren el riesgo de ser derribados.

Pero la erradicación está condenada al fracaso por algo más que la simple logística. Desde que EE UU comenzó a fumigar, el cultivo de coca casi se ha duplicado, pasando de 67.200 hectáreas en 1996 a 101.800 en 1999, y sigue aumentando. Esto podría ser consecuencia directa de la política estadounidense. A finales de los años ochenta, Washington cortó las rutas aéreas que abastecían de coca peruana y boliviana a los laboratorios de refinado colombianos. En lugar de rendirse, los traficantes plantaron coca en los estados de Caquetá y Putumayo y abrieron nuevas áreas junto a la frontera con Venezuela.

Pero ¿y las detenciones de los cerebros, la espectacular muerte de Pablo Escobar y el encarcelamiento de los jefes del cartel de Cali? La eliminación de un traficante supone, una y otra vez, la llegada de otro. En 1997, la Agencia Antidroga estadounidense (la DEA) informó de que un grupo de hombres del Valle del Cauca había sustituido a los líderes del cartel de Cali encarcelados, que a su vez habían sustituido a Escobar. El negocio florece. El Ministerio de Economía calcula que, en 1998, los narcóticos reportaron entre 3.000 y 5.000 millones de dólares al año, constituyendo el principal ingreso del país.

El cambio de la coca a los cultivos locales hizo surgir otra novedad: la relación entre el narcotráfico y los ejércitos irregulares colombianos. Cuando visité el país en 1992, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Putumayo hacían cumplir la ley e imponían castigos. Del mismo modo que la guerrilla había recaudado “impuestos” entre los ganaderos y los perforadores de petróleo, en cuanto se introdujo la coca, la gravaron. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) obtuvieron millones gracias a las drogas, pero es evidente que invierten las ganancias en la guerra. De forma análoga, los paramilitares también se benefician. Con la aquiescencia del ejército, y a veces con su apoyo abierto, controlan gran parte del norte del país, donde se refinan las drogas y se preparan para su envío. Venden protección a los empresarios, ganaderos y dueños de tierras, que a menudo son traficantes que han invertido sus fortunas en bienes inmobiliarios. El año pasado, la DEA citó el nombre de Carlos Castaño, principal líder paramilitar colombiano, como traficante por derecho propio.

La guerra derivada de ello ha convertido a Colombia en lo que un observador denomina un “archipiélago de sangrientas pequeñas repúblicas independientes”. Sólo en 1998, las autoridades registraron 194 matanzas cometidas por motivos políticos, lo que sobrepasa incluso las cifras de Argelia. Más de millón y medio de personas son refugiados internos, número que duplica el de albanokosovares que huyeron de los serbios en el punto culminante de su terror. La lucha contra las drogas no sólo ha fracasado contra los narcóticos, sino que ha empujado a Colombia al borde de la disolución.

La lucha contra las drogas no sólo ha fracasado contra los narcóticos, sino que ha empujado a Colombia al borde de la disolución.

No fue difícil hacer que Washington saliera del punto muerto. El general retirado Barry McCaffrey, asesor de política sobre drogas de Clinton, regresó de Colombia en 1999 como un profeta milenarista. “Colombia —exclamó— está en una situación próxima a la crisis”. Propuso un paquete de ayuda de mil millones de dólares para “apoyar al Gobierno colombiano en sus esfuerzos para reafirmar el control democrático”. Una ojeada al plan de McCaffrey muestra que, lejos de fortalecer la democracia, lo que propone es más erradicación. Será “aumentada”, en la jerga de Washington, lo que significa abrir las compuertas de la ayuda militar. Desgraciadamente para Colombia, eso es lo que quiere la mayoría de los estadounidenses. Una encuesta realizada en 1998 por la Escuela de Salud Pública de Harvard halló que, aunque la mayoría de la población estaba de acuerdo en que los esfuerzos de EE UU en la guerra contra las drogas habían sido infructuosos, apoyaban dedicar más recursos a estos mismos esfuerzos. El 86% creía que había que invertir más dinero para atacar las drogas “en su origen”.

La otra innovación del programa es que por primera vez arrastra al ejército colombiano, autor de múltiples abusos, a la guerra contra las drogas. McCaffrey alega que su pasado criminal es historia, conclusión que discuten los grupos de derechos humanos. Recién entrenado por EE UU y equipado con el armamento más moderno, prosigue esta teoría, el ejército derrotará la amenaza de la “narco-guerrilla”. Los encargados de formular la política estadounidense parecen haberse tragado toda la lógica criminal del ejército colombiano. Aunque los paramilitares son considerados responsables del 78% de las violaciones de derechos humanos, el ejército evita perseguirlos.

Sin duda, la pócima cuenta con la ayuda del olor a podrido de la retórica de la Guerra Fría, que los mandamases de Colombia siguen adoptando. En la mayor parte de los textos oficiales sobre la guerra contra las drogas, se pueden sustituir las palabras “guerra contra las drogas”, “cocaína” y “heroína” por “guerra contra el comunismo”, “comunistas” y “subversivos”, lo que permite que los veteranos gestores de Washington sigan justificando sus salarios con augurios sobre la próxima batalla. No estoy de acuerdo con la teoría de que existe una oscura conspiración, un complot de EE UU para invadir y gobernar Colombia desde el distrito federal imperial. Por el contrario, creo que la causa de esta situación es la falta de imaginación, la incapacidad somática para aceptar la caída del Muro y las nuevas realidades que ello ha creado.

Los estadounidenses no se atreven a una intervención directa, porque prefieren guerras cibernéticas como la de Kosovo. El accidente sufrido en julio por el avión espía RC-7B DeHavilland del ejército estadounidense en el departamento de Putumayo puso de relieve la creciente implicación de EE UU en la guerra de Colombia, pero también envió un estremecimiento al Capitolio: uno de los cinco militares que perdieron la vida fue una piloto de 29 años, capitán Jennifer Odom. Su marido, también oficial del ejército, dijo a los periodistas: “Los ciudadanos no apoyarían ninguna implicación en ningún país que vaya a costar vidas estadounidenses”.

Pese a los tambores de guerra y a la retórica de la Guerra Fría, el 106º periodo de sesiones del Congreso se suspendió en noviembre sin que hubiera aprobado ni un centavo más para Colombia. La administración Clinton dijo que ese asun-

to era menos importante que los Acuerdos de Wye Plantation, las cuotas pendientes de pago a la ONU y mil y un proyectos locales más. El dinero sigue estando sobre la mesa. Pero ahora que empieza en serio el año de las elecciones, Colombia podría quedar una vez más apartada. El gobernador George W. Bush y el vicepresidente Al Gore están tratando de encontrar la forma más *mediogénica* de culparse mutuamente de haber “perdido” Colombia. Lo crucial es que, si se pierde Colombia, hay que culpar contundentemente a un enemigo político.

Colombia se enfrenta a una paradoja mortal. Los únicos productos que los países desarrollados pagan bien son la cocaína y la heroína, pero los mejores clientes de Colombia la castigan por suministrar exactamente lo que se demanda. Mientras tanto, los beneficios de la droga van a parar a los fondos especiales de sus ejércitos, lo que es igual a decir que, lejos de remitir, es probable que esta guerra se intensifique. Los demócratas y los republicanos coinciden en que el proceso de paz está lleno de irregularidades sin solución y la opinión pública estadounidense quiere ver acción —aunque no necesariamente resultados— contra las drogas. “La mejor forma de hacerlo es decir que vamos a enviar dinero, un montón de dinero”.

Puede que lo que ocurra con el dinero no venga al caso.

ALFREDO MOLANO

Desterrados

En Colombia, un millón de desplazados está atrapado por una política de expulsiones que se remonta a varios siglos atrás. Casi nunca vuelven a sus casas.

El desplazamiento de población en Colombia ha querido ser visto por el *establishment* como un fenómeno físico. Un cuerpo —en este caso una población— cambia de sitio; en el mejor de los casos es un hecho geográfico: cambia su lugar de residencia. La mera voz “desplazados” denuncia la tentativa de ocultar una de las historias más dramáticas y sangrientas de nuestro tiempo. La verdad es que la gente no se “desplaza”, la destierran, la expulsan, la obligan a huir y a esconderse. En este artículo se quiere llamar las cosas por su nombre, y además, hacerlo desde una perspectiva histórica. Porque otro manido recurso para escamotear el hecho, es verlo como si se tratara del resultado de los enfrentamientos entre dos actores recientes de la violencia: la guerrilla y los paramilitares. Se olvida que la expulsión de pueblos y de ciudadanos es un antiguo recurso del sistema y que al situar el origen del problema en los grupos armados ilegales, se exculpa al régimen y, en particular, a las Fuerzas Armadas, de toda responsabilidad.

Una mirada hacia atrás

Eric Hosbawm afirma que la historia de Colombia puede interpretarse basándose en la recurrencia de dos hechos: la colonización permanente y la violencia incesante. No es necesario remontarse a la Conquista de América, realizada a sangre y fuego, ni a la época del poblamiento colonial para constatar la observación del profesor. Pero es durante el siglo XIX cuando esas constantes comienzan a perfilarse con mayor nitidez.

La lucha por la independencia de España fue una guerra civil que condujo a una secesión relativamente fácil, gracias a las distancias geográficas y al papel de Inglaterra. Durante el resto del siglo hubo en Colombia 52 guerras civiles y más elecciones que en ningún otro país hispanoamericano. La guerra civil fue un verdadero deporte de las clases dominantes. En el trasfondo había, ciertamente, un conflicto entre proteccionismo y librecambio, que se expresaba ideológicamente en tendencias políticas —conservadurismo y liberalismo— pero en la práctica la pendencia versaba sobre el control de las palancas del poder político como herramienta de acumulación de riqueza.

Las guerras civiles, que tenían como objeto el control del incipiente Estado, eran en realidad grandes operaciones de expropiación del contrario y de apropiación

Alfredo Molano es columnista en *El Espectador* y autor de numerosos relatos sobre la violencia en Colombia.

Se sabe que en los últimos cinco años el desplazamiento se ha incrementado año tras año

ción de la mano de obra. Primero se reclutaba a la fuerza a los peones y aparceros de las haciendas —todo gran hacendado era General— y luego, si se triunfaba, los peones de los perdedores pasaban a trabajar en las haciendas del ganador. Estos procedimientos bélicos suponían grandes desplazamientos económicos y demográficos. A decir del ex presidente Alfonso López Michelsen —agudo observador de nuestra historia— las guerras civiles contribuyeron a formar una conciencia nacional y territorial a partir de los conflictos domésticos. Las guerras civiles suponían despoblamientos, pero también repoblamientos, movimientos ambos que expresaban el pulso político de las diferencias de los sectores dominantes. Tanto el desplazamiento de campesinos como su adscripción a las haciendas se ejercía mediante la coerción extra económica, es decir mediante el uso —o amenaza— de la fuerza.

La violencia de los años cincuenta fue, bien vistas las cosas, un proceso de “desplazamiento” acelerado e intenso. Son innumerables los testimonios de este proceso y hay una abundante literatura sobre los hechos. Paul Oquist reporta que 200.000 personas cayeron víctimas del sectarismo y de la represión oficial, cerca de 400.000 parcelas fueron abandonadas y 2 millones de colombianos dejaron sus tierras. Son bien conocidos los casos del Valle, del Tolima y del Cauca, donde tierras que antes de la violencia eran campesinas, terminaron en manos de hacendados y empresarios. Los pequeños pueblos y muchas ciudades —sobre todo en la zona cafetera— crecieron notablemente, y en 1964 eran ya grandes ciudades. Entre 1938 y 1964 Colombia dejó de ser predominantemente rural para ser un país en acelerado proceso de urbanización, sin que hubiera cambios económicos drásticos ni en el campo ni en las ciudades. La industrialización —excepción hecha del período pre violencia— no mostró ritmos altos para explicar la migración hacia las ciudades. Habría por tanto que concluir que el mecanismo de estos cambios demográficos se originó políticamente y que su herramienta fue la violencia.

Desplazamientos recientes

Toda esta historia parece repetirse hoy, potenciada. Entre 1985 y 1996, según el reciente estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), han sido desplazados 850.000 colombianos, de los cuales casi 200.000 en el último año. Se sabe que en los últimos cinco años el desplazamiento se ha incrementado año tras año, por tanto, si tomamos como base el promedio de los dos últimos períodos, para el año 2000 podría haber más de un millón. Es de todas maneras sorprendente que el Estado no haya realizado un censo de los habitantes en esta desgraciada condición.

Aproximadamente el 50% de los desplazados llegan a las ciudades desde dos de las regiones donde el paramilitarismo se ha hecho fuerte: Urabá y el Magdalena Medio. La primera es una zona bananera donde las empresas comercializadoras de fruta y las compañías agropecuarias tienen grandes inversiones, pero es también una zona donde están previstos dos macroproyectos: el tramo que falta por hacer de la carretera Panamericana, que comunicará a la Tierra del Fuego con Alaska, y un canal interoceánico que una las aguas de los ríos Atrato y Truan-

dó, es decir un nuevo canal que comunique los océanos Atlántico y Pacífico. Se sabe que la frontera con Panamá es un corredor de contrabando importante por donde sale cocaína y entran armas. El Magdalena Medio es un centro vital de comunicaciones terrestres y de producción, transporte de petróleo y gas. La mayoría del crudo exportado pasa por allí y la mayoría de los refinados se hacen en Barrancabermeja, donde a su vez tiene sede el sindicato más fuerte del país. Es una zona de extensas ganaderías y de plantaciones enormes de palma africana. Los intereses de las compañías extranjeras y los de los gobiernos y del sector privado, convergen geográficamente en estos dos espacios como quizás en ninguna otra parte del territorio nacional.

Los desplazados huyen hacia las ciudades y principalmente hacia Bogotá. Parecería como si la gente buscara los sitios más alejados respecto a su lugar de origen, donde su anonimato fuera mayor. El miedo salta a la vista. Solo un 8% sigue viviendo en áreas rurales. El 35% acusa a los paramilitares del desplazamiento, el 15% lo hacen atribuyendo la razón de su expulsión a la fuerza pública, a la guerrilla la señalan responsable un 28%. La guerra, pero sobre todo la estrategia de despoblamiento como recurso militar, es evidente. El 50% de los desplazados lo son por causa de amenazas y un 15% por los asesinatos. El terror y el miedo son la herramienta del mecanismo. La lógica del aforismo de las guerras romanas se invierte: despoblar para gobernar. El 45% de la población es mayor de 18 años, pero hay un 33% de niños menores de 10 años. La mitad de los desplazados tenían alguna forma de organización comunitaria en su lugar de origen. El río Atrato y el Magdalena Medio, los sindicatos y la iglesia tienen una larga tradición organizativa y no hay duda de que destruir esos lazos es uno de los objetivos principales de las acciones de los paramilitares. Sorprende que el 40% de la gente no haya recibido atención de ninguna clase. La gran mayoría de desplazados son campesinos con ingresos muy bajos, casi sin educación primaria, y llegan buscando ante todo vivienda y trabajo. Quieren reinsertarse como asalariados o mediante la organización de una microempresa. El grado de confianza en el Estado es tan bajo que sólo un 17% quiere retornar a su tierra. Estas cifras, aunque contribuyen a describir un aspecto del drama, son insuficientes para explicar el proceso.

En años pasados la mayor fuerza que desplazaba campesinos era el ejército y la policía. La estrategia consistía en obligarlos a huir para poder atacar más fácilmente a la guerrilla, debido a la ayuda que prestaban a los alzados y que consistía básicamente en información y alimentación. La guerrilla por su lado reemplazaba al Estado en algunos servicios elementales como salud, educación y arbitraje de conflictos. El desplazamiento se hacía a partir del hecho de que aparecían muertos algunos líderes, otros desaparecían, y no pocos eran cogidos presos y torturados. Una manera brutal y regular fue también el bombardeo aéreo indiscriminado. Eran procedimientos habituales sobre los que hay un sinnúmero de testimonios. En algunas partes se apeló a la táctica usada por EE UU en Vietnam, consistente en reunir a la gente en aldeas estratégicas a las que sólo podían entrar o salir de manera controlada. El resto del área era considerada tierra de nadie y, frecuentemente arrasada.

La guerrilla, por su parte, hacía operativos de "limpieza" para expulsar informantes del Estado o personas que les eran desleales. Los casos se multiplicaban

a medida que la fuerza pública intensificaba sus acciones de inteligencia militar y de infiltración. Muchos fusilamientos y expulsiones se podrían sumar como producto de estas medidas, y no pocas veces se hacían —y se hacen— sobre bases muy endebles o absolutamente injustificadas. Se daba también el caso de usar la autoridad guerrillera para saldar conflictos personales de un comandante o de un subversivo. Estas conductas no han cesado y se ha hecho muy poco por corregirlas.

Con el desarrollo del paramilitarismo, llamémoslo orgánico, el desplazamiento de población se ha convertido en una estrategia militar recurrente. Los campesinos son considerados por la guerrilla como la condición de su existencia militar y su movilización como su objetivo político. Mao Tse-Tung lo consideraba el agua del pez. Los enemigos de la guerrilla toman al pie de la letra la sentencia y proceden en consecuencia; es decir, tratan de sacar el agua de la pecera y de asfixiar a los insurrectos. La táctica es tan sencilla como brutal: asesinan delante de la comunidad a los líderes más estimados, a sus cabezas visibles, usualmente de manera brutal para ejemplarizar, queman varias casas, asaltan otras y amenazan con regresar a matar a todos los que —según ellos— apoyan a la guerrilla. Así han sido asesinados líderes sindicales, maestros de escuela, médicos y enfermeras, curas y alcaldes, miembros directivos de las juntas de acción comunal y parientes de los guerrilleros y claro, todos aquellos considerados por los mandos paramilitares como colaboradores activos o potenciales de la guerrilla. El objetivo es cortar los vínculos entre los rebeldes y las comunidades. En realidad lo logran porque la gente queda paralizada y huye. El terror trae múltiples consecuencias de orden social. La más importante es el derrumbe de los vínculos sociales de solidaridad y mutua cooperación basados en el vecinazgo, los lazos familiares, las afinidades ocupacionales o las simpatías ideológicas. Es un objetivo manifiesto del paramilitarismo destrozando estas redes porque saben que son la fuerza social que permite la protesta y la denuncia. La gente comienza a desconfiar, se acusan unos a otros, se señalan como culpables. La vida en comunidad se vuelve un infierno. El efecto más evidente de la ruptura de los lazos comunales es la explosión de la familia extensa, primero, y de la familia nuclear después. La desconfianza y el miedo son tales que la vida en común se hace imposible. Cada cual se siente seguro solamente cuando está solo. Las consecuencias psíquicas de tales destrozos están por estudiar.

Los paramilitares, que se hacen llamar Autodefensas Campesinas, quieren precisamente impedir toda forma de defensa de los campesinos. Saben que en la solidaridad reside su fuerza y actúan para destrozarla. La justificación es la colaboración con la guerrilla, con el comunismo internacional o incluso con el narcotráfico. Es la protesta, la insubordinación y la rebeldía lo que buscan liquidar y por esa razón encuentran tanta acogida entre los grandes propietarios, los ganaderos, los comerciantes, las compañías extranjeras y los políticos. Cierto es que este sector social se defiende de la extorsión y el secuestro atacando a las bases de las guerrillas como una manera de debilitarlas y de obligarlas a salir de las regiones, pero no es menos cierto que, dado que los paramilitares están en parte apoyados económica y políticamente por ese sector, sus acciones deben redundar en beneficio de los intereses inmediatos de los financiadores. La guerrilla también

puede darles seguridad liquidando abigeos, ladrones, malandrines y viciosos que de una manera u otra asolan a las regiones y ponen en peligro los bienes. Estas funciones son reconocidas económicamente por los patrones; pero, la guerrilla lo que no hace es impedir la protesta social, la lucha sindical, la demanda por mejores ingresos y mayor calidad de vida, lo que en cambio hacen los paramilitares de manera regular y a destajo. Los paramilitares ejecutan con saña a los líderes de la inconformidad, definen niveles de salarios y formas de contratación de mano de obra, precios de compra de los productos campesinos y, obviamente, en todo litigio fallan a favor de los hacendados. Un rico empresario de la zona bananera me confesó que los paramilitares eran superiores a la guerrilla sólo porque le obedecían. Este es el secreto del vínculo entre paramilitares y *establishment*. El paramilitarismo representa a un sector que se ha alzado en armas contra la Constitución Nacional. No es por tanto un grupo rebelde contra el *establishment*, sino contra las leyes que lo han regido.

El Ejército reacciona airadamente cuando se habla de paramilitares, por razones evidentes. Tampoco les agrada que los llamen Autodefensas porque de alguna manera implica una acusación de inoperancia de la fuerza pública. Gustan de llamarlos Justicia Privada, en contraste con la Justicia Pública que para ellos es inoperante, parcializada y corrompida. Intentan justificar al paramilitarismo presentándolo como una reacción a la ineficacia de los jueces y asumiendo que lo que aplican es Justicia. El viejo principio de los conservadores de los años cincuenta, el derecho a la legítima defensa, vuelve por sus fueros. En la realidad los criterios de recta justicia que aplican están dictados por sus financiadores y es evidente que se trata de una defensa a ultranza de los intereses de las clases superiores. Lo que no se explica es por qué la fuerza pública es tan ineficaz en la reducción y control de la guerrilla.

El desplazamiento de campesinos tiene otra razón, además de las razones militares y económicas ya señaladas. Es la apropiación de tierras. Se dan dos casos. El primero es llamado "TRASVASE". Los paramilitares desocupan una región y a renglón seguido traen campesinos fieles a su causa y les permiten adueñarse de los bienes y enseres dejados por los expulsados. Como antaño, los servicios de guerra se pagan con tierra, tal como sucedía en la España de la Reconquista sucedía con las tierras dejadas por los moros, ocupadas por vasallos castellanos. Se aseguran así las retaguardias, y no es excepcional el caso de que se hagan pequeños remedos de reforma agraria. El otro caso es el de la apropiación de tierras campesinas por parte de los terratenientes que han financiado las operaciones paramilitares. Es la modalidad más frecuente, sobre todo cuando las tierras son de buena calidad o bien situadas; o cuando se proyecta una obra que valorizará la propiedad rural. De ahí que en muchos casos el desplazamiento debe ser entendido como una forma de apropiación latifundista de tierras. Se puede añadir otro caso distinto de funcionalidad del desplazamiento, que en parte es una combinación de los anteriores, pero que está invariablemente vinculado a los grandes proyectos hidroeléctricos o viales: la limpieza de zonas para evitar reclamos, alzamientos y protestas de los afectados y al mismo tiempo brindar seguridad a los intereses que intervienen en la obra.

La relación con el narcotráfico ha sido puesta en evidencia por las autoridades

*Como antaño,
los servicios
de guerra se
pagan con
tierra*

más respetadas y dignas de crédito. Hay que tener en cuenta que los narcotraficantes son propietarios legítimos de más de 5 millones de hectáreas de tierras de la mejor calidad y mejor ubicación. Es uno de los productos de sus actividades ilícitas y criminales. Puede decirse que estas tierras son la "alcancía" del narcotráfico, el capital que han puesto bajo la protección del sagrado derecho a la propiedad. Dado que la ley colombiana está obligada a perseguirlos y dado que la guerrilla por sus banderas agraristas es enemiga jurada de la gran propiedad, los narcotraficantes sólo pueden defenderse por medio de los paramilitares. Cuentan desde luego con la impunidad, o mejor, con la tolerancia institucional del Ejército, sombrilla bajo la cual sus intereses quedan a salvo. Más aún, los paramilitares son un conducto a través del cual el narcotráfico logra corromper a la fuerza pública y, de alguna manera también, ponerla a su servicio. Este es otro motivo por el que el fortalecimiento del paramilitarismo es la causa directa de gran parte del cruel y creciente proceso de expulsión masiva de población.

La ausencia de una política de sometimiento del paramilitarismo equivale a la más vergonzosa impunidad. A esta modalidad de convivencia corresponde, en el plano de la expulsión, una política de legitimación del desplazamiento al formular programas que intentan poner remedio al problema, pero sin afrontar las causas que lo originan. El Estado colombiano se ha propuesto programas asistenciales en lugar de políticas de reversión y control del proceso del desplazamiento, que dé a sus víctimas garantías para retornar, recuperar sus tierras y trabajarlas.

ANÓNIMO

En el batallón

Reynaldo es de extracción campesina. Lleva viviendo siete años en la ciudad, a donde llegó con su familia huyéndole a la violencia, que los ha desplazado en cuatro ocasiones diferentes. Acosado por la difícil situación económica decidió prestar el servicio militar. Su experiencia en el departamento del Cesar, refleja la crudeza de uno de los graves problemas que se vive en Colombia: la violencia.

Pregunta: ¿Cómo recuerda los primeros días en el Ejército?

Respuesta: Apenas entramos recibimos instrucción y nos pasaron a un centro de entrenamiento. Ahí hicimos la fase de contraguerrilla. Es donde se tiene que hacer el combate pero con balas de salva. Allí mismo nos dieron la instrucción que cada integrante de derechos humanos para ellos era guerrillero. Siempre había que verlo como objetivo militar. Segundo, para entrar al monte le enseñan a uno cómo sacar información. Todo aquel que es campesino para nosotros tiene que ser un guerrillero. También le enseñan a uno a tener coraje y a matar. Siempre que se entra al monte uno va con la idea de matar. Si hay forma, si hay un campesino para legalizar, uno lo legaliza. Cuando uno va al monte uno lleva un fusil de cuadro.

P: ¿Qué es eso?

R: Quiere decir que es un fusil que va sobrando. En caso de operaciones uno entra. Si no hay nada, pues uno mata a un campesino y le pone el fusil y le pone un camuflado. Nosotros siempre cargamos de a dos camuflados. Cuando hay un objetivo militar y no se le da de baja, entonces uno tiene que llevar un muerto. Y así se ha hecho. Lo hicimos varias veces.

P: ¿A quién mataban?

R: A cualquiera, para justificar. Me tocó verlo. Nosotros cerrábamos operaciones, cerrábamos la salida de la guerrilla. Cuando había contactos nosotros teníamos que apoyar y fuera de eso, cuando ya pasaba todo, seguíamos en el monte infiltrados, o sea emboscados. El comandante de nosotros, el de contraguerrilla lo que quería era ganar elogios con el coronel. Y siempre se hizo así. La vez pasada matamos un viejo, que estaba cucho. Nosotros íbamos por un comandante de los Elenos (del Ejército de Liberación Nacional). No lo encontramos pero cogimos al viejito porque la cédula de él era con el mismo apellido del comandante. Lo tuvimos amarrado. Tenía dos nietos y se vinieron con él. Duraron dos noches. Y los

El entrevistador anónimo es un reputado periodista de guerra colombiano. *Index On Censorship* ha comprobado su *bona fides*, posee la cinta de la entrevista y ha sometido el texto a Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Christian Aid para confirmar su autenticidad. Publicar este tipo de información en la prensa colombiana supone la ejecución inmediata: 50 periodistas colombianos han sido asesinados en los últimos 10 años.

peladitos al ver que íbamos a matar al viejito, se fueron, nosotros los hicimos ir. A mí, me dijo mi teniente que lo matara, que si era capaz de matarlo. Yo le dije, si me toca, me toca. Pero llegó y le dio la orden a un soldado vicioso, mariguanero que iba con nosotros. Al viejito lo cogieron a media noche, lo subieron a un cerro, lo vistieron y lo dieron de baja.

P: ¿Y presentaron el informe como si lo hubieran dado de baja?

R: Claro, en combate. Uno llega y pran, lo mata. Se forma una balacera pero disimulada porque en caso de que llegue a haber una investigación van a ver cartuchos por lado y lado. Se hace una alarma de a cinco tiros cada soldado. Ese es el simulacro, se lleva al batallón y el teniente va ganando ascenso.

P: ¿O sea va ascendiendo por muerto?

R: Por muerto. Yo tenía problemas con el teniente. Tenía ganas de matarlo, con ese man yo no la iba. Siempre me tenía aislado de todo, me tenía mucha desconfianza. La primera experiencia fue cuando estuvimos nosotros en una operación con el Batallón Tayrona, ese batallón me parece que es del Magdalena. Había combates en la Sierra Nevada, combates berracos, bravos con la guerrilla. Le bloquearon la subida de víveres a la guerrilla, todo eso junto con los paracos (*los paramilitares*). Estábamos nosotros (*la contraguerrilla*), estaban los paracos y estaba el Batallón Tayrona que eran los que estaban combatiendo. Como fueron quince días que no se le permitieron la entrada de víveres, hubieron guerrilleros que comenzaron a morir. Estaban aguantando hambre y había mucho acoso militar. Subimos y cuando pasaron los combates, cuando veníamos replegando, bajando, se metieron los paracos al Batallón Tayrona. Hicieron una masacre de campesinos ni la berraca. Campesinos de la Sierra. Aproximadamente unos 15 campesinos. Lo justificaron como colaboradores de la guerrilla.

P: ¿Cómo funcionan los paracos?

R: Los paracos en el Batallón compran la munición.

P: ¿El Ejército sabe exactamente quiénes son?

R: Claro. Hacen polígono también en el Batallón. Les prestan los carros del Batallón para hacer traslados de paracos a otra región. Ese Batallón es el de Valledupar.

P: ¿Allí funciona alguna base paramilitar?

R: La de Lucas Gneco, el gobernador (del Cesar). Él es el que paga a los paracos, el que financia.

P: ¿Y por qué sabe que es él?

R: Porque yo me gané la confianza de un sargento primero que tenía muchos papeles y yo vi mucha información. Ahí había muchas cosas. Él está involucrado en la muerte de una muchacha que mataron, de la periodista de derechos humanos, Lucas Gneco. Él fue el que pagó para que mataran a la muchacha, porque

ella estaba haciendo unos destapes de derechos humanos. Y a él no le servía porque ella tenía como que la información de que él era el que estaba financiando a los paramilitares en Valledupar. Y esa información la saqué porque un día estaban hablando los dos coroneles ahí en el Batallón y alcancé a escuchar algo así, que había que tapar lo que él estaba haciendo. Los coroneles eran Coronado y Pico. Que había que colaborarle a Lucas Gnneco por la muerte de la periodista. O sea, los dos paracos llegaron al Batallón, cogieron unas pistolas que teníamos que eran de la guerrilla, que se habían recuperado. Ellos necesitaban el armamento que no fuera a comprometer a nadie porque la investigación era muy berraca. Entonces los manes duraron como siete días en el Batallón comiendo y estaban haciendo un entrenamiento y nos estaban lavando el cerebro a nosotros. Yo llegué y le pregunté a un cabo que esos manes quiénes eran. Y me dijo, esos son paramilitares. Dijo, tienen que relacionarse bien con ellos porque tienen mucho talento para que ustedes sepan explotar eso. Nosotros siempre hablábamos con ellos, que qué habían hecho. Para llenarse uno de coraje, ¿si me entiende? Para que a uno le diera berraquera. Nos ofrecían plata. Que apenas saliéramos nos daban la libreta.

P: ¿Cómo están organizados los paracos allá?

R: Por barrios. Lo que es todo el Cesar, Valledupar, lo maneja Lucas Gnneco. Él es el que aporta el billete, es el que consigue los uniformes para el Batallón y se lo distribuye a los demás paramilitares.

P: ¿Y les paga también?

R: Claro.

P: ¿Cuánto gana un paraco?

R: De primera vez está ganando como trescientos cuarenta mil pesos. Y va subiendo. Cuando el man es un matón bravo, bravo, bravo, le dan mando y le suben el sueldo. Ellos tienen familia ahí mismo en Valledupar. Si hay información, de una vez salen ellos con los carros del Batallón. Por un lado va el ejército y por el otro van ellos.

El paraco con el que hablaba me decía que porqué no trabajaba con ellos. Él sabía que yo era de estos barrios (*las comunas de Barranca*) y que yo debía saber dónde vivían los comandantes, los colaboradores de la guerrilla. Me decía: gánese un billete bueno, huevón. Vaya aquí a la Nueva Granada (en Barranca) y hace el trabajo con los paracos de aquí. Un compañero de nosotros, un soldado, le iban a dar de baja porque estaba herniado. Y al ver que le iban a dar la baja, dio una información y de Valledupar lo trasladaron aquí al Nueva Granada. Y ahí lo unieron con los paracos, que fue la masacre que hicieron aquí ahora hace como un año, como que fueron veintitantos. Como que fue en febrero. Él se vino aquí de sapo. Él era de estos barrios, y estaba con nosotros. Él como que fue guerrillero. Andaba con ellos entonces sabía la movida. Lo zamparon al Nueva Granada y se fue y dio dedo, tan, tan, ese y ese son guerrilleros y fue cuando mataron a los pelados que no aparecen.

P: ¿Él era amigo de ellos?

R: Claro. A él de una vez lo cogieron y lo mandaron pa'l Sinaí. Él vive por los lados del Yarima (*barrio de suroriente*) tenía todo el conocimiento y le dieron una plata buena. Le dieron como que tres millones de pesos por la masacre, porque ahí también se recuperó un armamento que tenía la guerrilla.

P: ¿La mayoría son jóvenes?

R: Sí, mas que todo son reservistas. 20, 23, 24 años.

P: ¿Y luego cómo sigue el entrenamiento de ellos? ¿Les dicen que son paracos?

R: El entrenamiento de ellos no sé donde queda, eso si es muy reservado. Por eso es que siempre llevan reservistas porque ya uno sale entrenado, ya uno sabe manejar armas. Y los que van así que no son soldados, que no han prestado servicio, ellos si tienen un entrenamiento fuerte. Es cuando les enseñan a matar. Le dicen a uno que apenas entre lo primero que tiene que hacer usted es dar una baja a sangre fría. Todo eso se lo inculcan a uno. Ellos mismos nos dicen a nosotros cómo había que torturar a una persona.

P: Descríbalo, ¿cómo le decían?

R: Para torturar a una persona la amarraban y le ponían corriente en la lengua para que la persona hablara. Cuando la persona se negaba a dar información, cargaban como unas agujas así de largas (*señala el tamaño del dedo índice*) que eran introducidas por las uñas. Luego lo desnudaban y lo sentaban en un bloque de hielo. Y cuando ya veían que no daba información entonces lo castraban y le echaban ácido para que quedara completamente desfigurado para no comprometer a ninguno, para que no se dieran cuenta. Siempre lo han hecho así, porque últimamente lo que pasó allá en el Cesar toda una familia la calcinaron de esa manera, por los lados de Media Luna. Yo estaba en el Batallón que estuvo allá y me contó un soldado. Dijo que era toda una familia completa, que el hijo del viejo de la casa era un guerrillero y los paracos estaban muy arcidos porque el man ese como que les había pelado un comando de ellos. Entonces entraron a la casa y sacaron a la familia. Había como que tres peladitos y los calcinaron a todos, les echaron ácido. Un ácido que a la persona como que la arruga, la quema, la vuelve negra. Eso fueron paramilitares pero el ejército estaba metido por esa zona. Así es como operan. El ejército opera con los paramilitares. Ellos cargan radios de comunicación y se intercomunican.

P: ¿Quiénes son los informantes?

R: Siempre son gente voluntaria. Si usted lleva una información buena usted va al Batallón, ahí lo visten de camuflado, lo echan a dirigir la operación. Si da resultado al man se le da un plata y sigue libre. Allá en el Batallón había un soldado que era el que hacía el contacto. El soldado Silva, soldado voluntario. El era el que le decía a uno, apenas salga váyase para donde los paracos. Si uno aceptaba le pagaban por primera vez los 700 mil. Pero al cabo de dos meses ya se lo bajaban a 300 y pico. Y ya usted no se podía salir, ya uno estaba comprometido.

P: ¿Hay gente muy indiferente ante la muerte, que no les importa cómo ni a quién matan?

R: Eso es como una costumbre. A veces uno de soldado raso, uno anda muy aburrido en el monte, corra pa'quí, corra pa'llá, uno anda rejarado. Y esa misma aburrición lo hace a uno como con ganas de matar, uno anda desesperado. Tiene trato psicológico fuerte, lo presionan a uno. Yo estuve a punto de desertarme porque tenía problemas con el teniente. Me tenía aislado de todo y los trabajos fuertes me los ponía a mí. Como a nosotros nos dan una bonificación, a mi siempre me descontaba que una cosa, que otra. Entonces yo mantenía muy aburrido. A ese tipo yo tenía ganas de pelarlo. Pero a lo último me arrepentí, porque un cabo se dio cuenta cómo estaba yo de mal y me dio consejos y todo. Yo le decía yo mato a ese man y me embalo. Entonces me dio consejo que manejara el mal genio mío que no le parara bolas y superé eso y cuando al man lo trasladaron, trajeron a un comandante que lo traían del Caguán, que estaba involucrado en una masacre que hizo desaparecer dos lanchas. Ese es el teniente Franco.

P: ¿Y cómo saben que mandó desaparecer dos lanchas?

R: Porque él mismo nos contó. Que una noche, había un horario restringido que no podían pasar chalupas ni nada. Entonces venían dos lanchas grandes llenas de campesinos y como él era el comandante de la contraguerrilla, dio la orden de darles plomo. La embarcación se perdió y el personal se ahogó. A él como que lo está investigando la Fiscalía pero a él lo está apoyando es el coronel en el Batallón. A ellos, como le dijera, le tapan, lo ayudan para que no... Y él iba a pedir la baja y el coronel lo apoyó. No sé quien lo ayudaría y todavía está en el Batallón.

P: ¿Qué oía de sitios como Barranca, por ejemplo?

R: Hombre que sería bueno que volaran Ecopetrol para que todos esos, lo voy a decir como ellos decían, "para que toda esa parranda de hijueputas se muera". O sea, para ellos todo barranqueño es guerrillero.

P: Cuando se refieren a los campesinos, ¿cómo lo describen?

R: Sindicalistas, guerrilleros. Siempre es el tema de ellos. Siempre nos dijeron que los de derechos humanos son guerrilleros, los de la USO son guerrilleros. Para ellos toda esa gente es guerrillera, son colaboradores y son objetivo militar para ellos, para el ejército. Siempre es así.

P: ¿Qué dicen de las actuales negociaciones con las FARC?

R: No están a gusto. O sea, ellos se están dando cuenta que la guerrilla está ganando mucho terreno y los militares no gustan del Presidente por lo que se ha metido a lo del proceso de paz. Ellos están inconformes con él. Pero uno no puede saber mayor cosa porque por ejemplo, para ellos yo era guerrillero porque venía de Barranca, me tenían aislado. Las condiciones mías eran ni la berraca. Como les dije, si yo fuera guerrillero ya hubiera hecho una cagada acá, me hubiera llevado un fusil o hubiera dado una información buena pa' que les dieran a todos en la mula. Por eso tenía muchos roces con los cabos, porque me veían como guerrillero.

Y esa misma aburrición lo hace a uno como con ganas de matar, uno anda desesperado.

Yo duré 18 meses prestando el servicio. quince en el monte. Llegábamos a Valledupar y volvíamos y salíamos. Eso era de un día para otro. Fueron 15 meses patrullando.

P: ¿Hubo muchas confrontaciones?

R: Tres veces tuvimos contacto, o sea, candeleo. Afortunadamente ninguno de la contra guerrilla fue dado de baja. Eramos 37, dependíamos del Batallón de Artillería #2, La Popa, que queda en Barranquilla.

P: ¿Qué oían hablar de (líder de los paramilitares) Carlos Castaño?

R: Eso es negocio para ellos, porque es el brazo derecho. Ellos siempre han dicho que los paracos han sido una ventaja muy buena y ellos dicen que en caso de que el ejército se quede sin trabajo ellos cogen pa'lla. En caso de que le den la baja a algún Cabo o algún Teniente, la salida de ellos es irse para los paracos.

P: ¿Hay muchos militares retirados?

R: Huy, casi todos, casi todos los mandos que tienen los paracos son Tenientes, Sargentos retirados, Cabos. Por eso tienen tan buen entrenamiento militar. Por eso es una ventaja tener una persona que sepa de combates, que sepa patrullar y tienen el sueldo normal como estaban ganando allá.

P: ¿Qué saben de una masacre que se está preparando por los lados de Barranca?

R: Vea, hay unos soldados que se incorporaron, soldados voluntarios. Ellos tienen planeado volver a Barranca, infiltrarse, trabajar un tiempo con la guerrilla y saber cómo es el manejo para poder dar un golpe. Pero eso lo van a hacer con los paracos, para que ellos entren y le den al que se atravesase, para no involucrar el ejército.

P: ¿Y hay mucho infiltrado?

R: Si. Eso es una vaina, porque cualquier man que pide ingreso a la guerrilla le van dando el ingreso y eso es fatal. Ese es el pensado. El objetivo de ellos ahora son todos los colaboradores que hay ahí de la guerrilla, pero no le van a dar al que colabore. Le van a dar al que esté en la casa, viejito, lo que haya. Dijeron que tenían que erradicar con la guerrilla. Y lo más lógico era darle a las masas, que son los colaboradores. Entonces a mí siempre me decían quédese, dé información. Los Capitanes me decían, vea hombre, no sea bobo, dé información, nosotros le sacamos su familia de allá, yo sé que usted sabe muchas cosas. Siempre me negué.

P: ¿Cómo hacía para que no se dieran cuenta que estaba en contra de eso?

R: Siempre les demostraba mucha berraquera. Mi comportamiento fue excelente ante ellos. Por eso me gané su confianza, una persona muy seria, cumplida en sus cosas. Por eso me decían, trabaje con nosotros, dé información, gánese un billete, saque su familia de allá de ese hueco... Yo les decía, no, yo no puedo

hacer eso porque mi familia corre peligro, yo doy una información de esas y me pelan la familia. Y yo no estoy de acuerdo con eso.

P: ¿Ellos sienten que están perdiendo o ganando la guerra?

R: Si. Como ejército, están perdidos. Ellos mismos lo comentan, mi Mayor nos decía, en esto estaré yo aquí dando parte al Mono Jojoy. Como ejército, han perdido mucho. Ellos se han dado cuenta que la guerrilla ha cogido mucho auge y que están perdiendo la guerra, prácticamente. Ha habido mucho descalabro, han fallado prácticamente. Ahora lo que pasa es que el militar se ha dedicado a ganarse su sueldo nada más. Ya no sienten como era antes que sentían que era el ejército, que querían su país. Para ellos lo más importante es el sueldo.

P: ¿Para cuándo calcula que va a ser las masacres que están planeando?

R: Eso es como para finales de diciembre. Pero una masacre grande que se sienta en todo Colombia. Esa es la que van a hacer acá en Barranca. Calculando, calculando, la masacre va entre unas cien personas porque le van a entrar a todos los barrios.

P: ¿La gente está preparada? ¿Sabe algo de eso?

R: No. La gente no sabe nada de eso. La información sólo la tengo yo. Esto es muy berraco, porque uno no le puede comentar a cualquiera esto. Si yo llego a comentar, es rapidito que me mandan a quebrar. No por parte de la guerrilla sino por parte de los paracos. Para ellos, los paracos, como me decía mi mayor, toda persona que mate uno en Barranca es una ventaja, es un guerrillero más. Uno le decía, ¿pero cómo se le ocurre mi mayor? Si todos no somos guerrilleros. El decía, no, desde que estén en Barranca no. Y ojalá desaparezca esa Barranca. Ese era el mayor Gil.

P: ¿El ejército está al tanto de todo esto que sucede?

R: Si. Ellos están financiando con plata, víveres, munición, les prestan el armamento para que hagan masacres, la misma tropa.

P: ¿Y cómo hacen para evitar que los soldados que están un tiempo transitorio, después no vayan a decir nada?

R: Ellos creen que el soldado sale preparado para seguir siendo militar o la vía de paracos. A ellos no les interesa eso ni que uno venga y suelte la boca porque ellos saben que el que suelta la boca le dan rapidito.

P: ¿Ahora qué piensa hacer?

R: Conseguir un trabajito y ayudarle a los viejos. Estaba tan aburrido que yo dije voy a pedir de soldado voluntario. Decidí no, porque de pronto me llevo es a mi papá o a mi mamá. Y tampoco quería, porque uno de voluntario le toca estar en combate, hacer inteligencia y entonces eso no. Para que se va a estar uno la vida ahí. Además yo me considero muy revolucionario. Porque es que uno se desengaña en el ejército de muchas cosas.

*Siempre
arroz, papa,
sardinas era
la comida
todos los
días.*

P: ¿Qué concepción tenía antes de entrar al ejército?

R: Yo le tenía un temor al ejército ni el berraco. Siempre que veía un soldado me asustaba. Yo creía que me iban a coger y a desaparecer. Ahora, que va. Allá fue otra cosa. Los primeros meses si fueron duros, mucho maltrato. Nos daban garrote. Nos lavaron el cerebro de una manera que eso...

P: ¿Qué les decían?

R: Matar, matar, matar. Que ojalá tuviéramos el coraje de matar un guerrillero y tomárnosle la sangre, para volverse uno un casi psicópata, un suicida. Hubieron soldados que lo hicieron, que tomaron sangre, que para ser berracos en el combate. Es decir, el que se deja inculcar eso, se deja llevar y hace las cosas. Siempre nos decían, metan mariguana para que les vaya bien en el combate, los Comandantes. En el momento uno no siente nervios, pero la mariguana en un combate es fatal para la persona porque uno trabado es prácticamente borracho. Uno la embarra. Pero ellos decían metan mariguana.

P: ¿Como es la vida allá en el monte? ¿Pasaban hambre, trabajos?

R: Si. Hambre. Los cabos se robaban la plata de los víveres, víveres frescos. Siempre arroz, papa, sardinas era la comida todos los días. Había veces en que era arroz solo porque no había con qué comprar, los víveres se retrasaban. Lo bueno del Ejército es que uno cambia, me refiero a lo moral. Yo me fui al Ejército no porque quería mi libreta sino porque yo estaba perdido en el licor. Fui a Alcohólicos Anónimos y tampoco fui capaz de aguantarme nada. Me fui pa'l Ejército y si me toca quedarme me quedo. Si no cambio. Y me sirvió berracamente. Aprendí a madurar y a ser responsable y a valorar lo que tenía que es mi familia. Cosa que no tenía cuando estaba todo desordenado. También tenía esa idea de matar porque me mantenía muy aburrido por los problemas, la situación de la casa, que a veces no había con qué pagar el agua, en fin, psicológicamente me sentía mal y andaba rejarido, yo quería que la gente me pagara eso con muerte, entonces yo dije, me voy a meter aquí a la guerrilla, que van matando por cualquier cosa. Pero un día recapacité y dije me voy al Ejército, a ver si cambio. Yo le he dado muchos dolores de cabeza a mis viejos también. Y me volví otra persona allá. Del comportamiento no soy ni la seña de lo que era antes.

P: ¿Cómo es la vida de la juventud, aquí en estos barrios donde hay tanto desplazado, donde a la gente le ha tocado vivir la violencia, el desempleo, donde les ha tocado tan duro? ¿los jóvenes que sienten?

La juventud aquí, para ellos es estar con la guerrilla, cargar un revolver, intimidar la misma gente, la población civil. Son pelados que no piensan, quieren estar de baile en baile tomando trago. La situación para ellos es normal. Quieren andar en moto, con el uno, enamorando peladitas que por que son guerrilleros, buscan eso, estar bien, andar armados, pero a la hora de la verdad que tengan que enfrentar no se enfrentan. A mí me miran feo porque acabo de salir. Yo como no le rindo pleitesía a nadie, ni ando con ellos ni nada. No me gusta. P'a qué me voy a involucrar en cosas que no quiero estar. Si decido meterme a la guerrilla me voy pa'l monte. Cojo mi fusil y me voy pa'l monte. Pero aquí no porque aquí matan a gente inocente.

P: ¿Aquí está muy politizada la gente?

R: Aquí no hay sino instrucción militar. Aquí no tienen ninguna doctrina, ninguna consigna. Ellos se hacen llamar revolucionarios acá, pero no tienen nada de revolucionario.

P: ¿Matan también mucha gente inocente?

R: Sí. Por cualquier cosa. Porque abusan de la mujer y entonces los pelan. O no hallan como sacarle un chisme para poder justificar la muerte. Eso no es guerrilla, eso es un vandalismo.

P: ¿Y cómo es la situación de aquí de Barranca?

R: Es una situación templada. Imagínese que no hay trabajo y esta violencia. Y más de uno pensará, no tengo que coger para un lado: me voy pa' allá o me voy pa' cá. Yo pienso que esto como va hay que empuñar el fusil. Esto como va toca a uno armarse. Se va pa' los paracos o se va pa'quí pa' la guerrilla. Esto más tarde va a totiar. Esta situación económica tan berraca que no hay ni trabajo, ¿uno qué hace? A los campos no se puede ir. Irse pa'l campo es echarse uno la sogá al cuello. Mire como está eso de berraco, esos combates, los paracos presionando por un lado, la guerrilla presionando por otro, siempre la población civil es la que paga.

P: ¿Para dónde cree que va esto?

R: Para una guerra donde van a caer, débalo o no lo deba, mucha gente.

P: ¿Hay mucho cultivador de coca de aquí?

R: Sí. Por el lado de San Pablo hay harto. Allá hay harto cultivo, coca como un berraco. Yo duré un año por allá raspando.

P: ¿Hay paracos en esa zona también, en la Serranía de San Lucas?

R: Simití, ya es paraco. Me cuenta un compañero que los paramilitares llegan a Simití, que esa es la casa de ellos. Que dijeron, aquí el que se sienta que la ha embarrado o sienta que tiene algo que ver con la guerrilla, le damos la oportunidad de que se vaya y nos deja trabajar. El que se quiera quedar se queda pero nos tiene que colaborar a nosotros. Así hizo un paraco en una reunión que hizo ahí en Simití.

P: ¿Qué edades tienen la mayoría de los paracos?

R: Más que todo jóvenes, mucho joven. Los mandos ya son gente adulta de la edad de 30, 40 años. Son sanguinarios. Cada contraguerrilla paramilitar siempre carga una motosierra que es como así (*señala el tamaño de un antebrazo*) que es para descuartizar. Todo paraco cuando va a hacer operaciones se la lleva. Ellos tienen fosas comunes. Las tienen en la región donde operan. Aquí por estos lados hay fosas comunes, por los lados de aquí del Centro (*Barranca*) ellos tienen fosas comunes.

P: ¿Cree que los que se llevaron el 26 de mayo del año pasado, los mataron?

R: Claro. Esa gente qué se va a poner a cargar gente. Está muerta. El que caiga en las manos del paramilitar lo mata.

P: ¿Utilizan algunos de los que cogen de informantes?

R: Claro. De esa gente que cogieron hubieron varios que se voltearon. Los iban a matar entonces prefirieron voltearse. Están trabajando con ellos. A la voz del plomo, cualquiera. Pero no es a cualquiera que cogen de informante. Utilizan más que todo a las mujeres, infiltradas por ese lado. La mujer se le facilita más, puede enamorar un man de esos, le saca información.

P: ¿En el Batallón en que estuvo, quién era el responsable de establecer el contacto con los paras?

R: Ellos directamente, o sea, si el paraco necesitaba algo, directamente hablaban con el comandante, con el teniente.

P: ¿Cómo se llamaba él?

R: Parra. Parra Gordillo Gabriel. Ese lo pasaron ahora para el Gaula. Él hacía el contacto directo. Y patrullamos con los paracos. Siendo soldados rasos nos tocaba. Nosotros íbamos por un lado y ellos por el otro. Ibamos en contacto permanente. A toda hora en contacto. Siempre ellos llegaban y nos gastaban cerveza, gaseosa, se familiarizaban con uno rapidito. Nos buscaban a nosotros, al comandante, para poder hacer las operaciones. Hay más que todo campesino infiltrado. Es que al que da una información le pagan muy bien, cuando da resultado. Una información buena, buena, con bajas, está por ahí entre un millón de pesos. Entonces la gente boquea fácil.

P: ¿La gente que desaparecen aquí, a donde la echan?

R: Al río. Lo que pasa es que aquí sí trabaja bien el Ejército con los paramilitares. Como ellos son los que están haciendo las infiltraciones ahora, las operaciones. Las camionetas que entran aquí cuando entran los paracos son del Batallón, creo que una es de la policía.

P: ¿La policía también está involucrada?

R: No tanto. Más que todo es el ejército.

RICHARD SANDERS

Los señores de las esmeraldas

La región de las esmeraldas de Colombia es un mundo singular, medieval, aislada en las montañas y gobernada por las pistolas.

Un minero surge de la boca de un túnel, doblado en dos bajo un saco de tierra. Se acerca tambaleándose hasta el barranco y rompe el saco, vertiendo la tierra al arroyo que pasa debajo. Al momento, el lodo desaparece bajo un enjambre de delgadas figuras que escarban en él con los dedos.

Es la mina de esmeraldas de Coscuez, y se ha corrido la voz de que se ha encontrado una nueva veta. Entre los desechos hurgan personas llegadas desde varios kilómetros a la redonda. Los residuos que se tiran desde la entrada de la mina se convierten de pronto en polvo de oro y unos pedacitos de esmeralda podrían ser la diferencia entre comer y morir de hambre.

A menos de un kilómetro y medio de distancia, en una colina situada sobre la mina, se ve la figura regordeta de Don Pablo Elías Delgadillo, propietario de Coscuez. Los guardias haraganean despreocupados en los alrededores. Sentada a su lado, una joven rubia se pinta las uñas. “Dentro de la mina hay una gran riqueza”, suspira filosóficamente Don Pablo, “pero fuera hay una gran pobreza”.

Enclavada en los Andes septentrionales, a 150 kilómetros al norte de Bogotá, esta es la principal región productora de esmeraldas del mundo, de donde se obtienen dos tercios de la producción mundial. El viaje al rostro de la esmeralda, en Coscuez, que produce la mitad de las joyas de la región, es una batalla contra la claustrofobia y el vértigo. El agua corre entre los pies mientras nos deslizamos por kilómetros de estrechos túneles. Grasientas escaleras de 35 metros se hunden en la oscuridad. Al final del último túnel está Pedro, jadeando en el aire fétido mientras perfora la roca.

“La verdad es que no cobramos un salario”, dice. “Si aparecen esmeraldas, nos dan una bonificación, nos dan una parte de las esmeraldas. Y cogemos del suelo lo que podemos. Pero si no hay producción... bueno, es duro”. Ese día, aparecieron las vetas blancas de la esmeralda, pero las esmeraldas se mostraban esquivas.

Es una situación en la que los propietarios nunca pierden, pero para los que escarban entre los desechos de fuera —los gUAQUEROS— hasta esto parece un pri-

Richard Sanders es periodista y productor de televisión. Trabajó en Colombia en 1995 y 1996 y presentó el documental del Canal 4 *Escobar's Own Goal*, sobre el asesinato del futbolista Andrés Escobar.

Traducción: Berna Wang

Esta es la frontera salvaje del país más violento de la tierra y casi todos van armados.

vilegio. Abundan las historias sobre familias que han entregado a una hija al propietario de la mina a cambio de un trabajo bajo tierra. El acceso lo es todo. Por la noche, los gUAQUEROS buscan pozos ocultos, algunos excavados hace cientos de años por los indios, y entran en los túneles principales.

Rubén trabaja como guardia en la mina. “La semana pasada, uno de mis compañeros estaba de servicio cuando oyó un ruido en uno de los túneles. Corrió hacia allí y alguien le puso una pistola en la nuca. ‘Por favor, tengo mujer e hijos’, dijo. Así que le dejaron ir. Tuvo suerte”. Muchas veces, por la noche, se escuchan disparos en los pozos de la mina. A veces hay peleas. “Puede que un par de mineros encuentren una gran esmeralda”, continúa Rubén. “Acuerdan dividirla, pero entonces, cuando caminan hacia la superficie, uno de ellos muere en un misterioso desprendimiento de rocas. El otro sale ileso”. Se encoge de hombros.

Esta es la frontera salvaje del país más violento de la tierra y casi todos van armados. Muchos huyen de la ley y sólo el imponente poder de los propietarios de las minas —los patrones— mantiene la paz. “Es así”, explica Jaime, compañero de Rubén. “Cada patrón tiene su grupo de gente y tú tienes que responder ante tu patrón de lo que haces. Se mata a los extraños, no se hacen preguntas”, dice.

Al amanecer, en medio de la llovizna, tropiezo con un cadáver. El hombre había muerto en un tiroteo unas horas antes. Su compañero de parranda lo había vestido con sus mejores ropas y lo había dejado sobre un par de cajones de cerveza para un velatorio improvisado. Cuando me marchaba, fui rodeado por un grupo de hombres armados que querían saber por qué estaba allí. Expliqué que era un invitado de Don Pablo, pero uno de los hombres me interrumpió. Dijo: “Don Pablo es el jefe en la colina. Aquí el que manda es Don Martín”, señalando con el pulgar a una figura con poncho y bigote. Había cruzado la línea invisible que divide los feudos de la esmeralda. Sólo me dejaron partir cuando convencí a Don Martín de que no estaba investigando la muerte. “Eso es cosa mía”, dijo.

Con su estricta jerarquía y su código de honor, el negocio de la esmeralda es un reflejo del oculto mundo de los carteles de la droga y se sospecha que varios patrones tienen vínculos con el narcotráfico. También se cree que son algunos de los jefes paramilitares más poderosos, que crean ejércitos privados para combatir a los movimientos guerrilleros. En la cúspide está Víctor Carranza, que según la revista *Forbes*, es uno de los hombres más ricos del mundo. Como la mayoría de los patrones, Carranza es de origen humilde y su vida sirve de inspiración para todos los gUAQUEROS. Se decía que, si Carranza permaneciera el tiempo suficiente en la Plaza Bolívar de Bogotá, aparecerían esmeraldas. Se había abierto camino hasta el cúspide de la pirámide de la esmeralda en los años ochenta. Cuando, hace diez años, trataron de introducirse en el sector los narcotraficantes de Medellín, Carranza dirigió la resistencia. Murieron alrededor de 5.000 personas en la que no es más que la guerra más reciente de una serie de guerras de la esmeralda. Entre las víctimas había mineros, gUAQUEROS, guardaespaldas y paramilitares.

Hoy Carranza está en prisión, acusado de organizar grupos paramilitares. Don Pablo representa sus intereses en el país de la esmeralda y, por tanto, ahora es el “jefe de los jefes” de hecho. Pero es más inteligente como para usurpar la autoridad de su jefe. “Aunque está en la cárcel, Don Víctor es insustituible. Es un

hombre sabio, un hombre a quien pedimos consejo”, dice. “Es como un padre para nosotros”.

“Los problemas de Don Víctor son más políticos que judiciales”, me dice. “Hay mucha presión internacional, especialmente de las ONG de derechos humanos”. Confía en que Don Víctor será puesto en libertad pronto y probablemente está en lo cierto. La fiscalía está haciendo esfuerzos desesperados para mantener en secreto la identidad del único testigo contra Carranza, pero pocos apostarían por su supervivencia para testificar.

Don Pablo presenta su propio poder como una carga. “Dirijo la compañía, pero también tengo que atender al 90% de los problemas sociales, económicos, familiares y morales que surgen. Soy alcalde, juez, todo”. Viendo a los gUAQUEROS metidos en el agua hasta la rodilla, cribando el barro de la entrada de la mina, es imposible saber si estas emociones son recíprocas, tal es la pobreza de la gente. Todos viven con la esperanza de un descubrimiento casual que transforme sus vidas.

“Así es la vida de la mina”, dice Pedro con indiferencia, levantando su taladro una vez más hasta la cara de la esmeralda. “Nadie te obliga a trabajar aquí”.

Ecuador en crisis	63
Rusia ante el abismo de Chechenia	73
Reformas y temores en Irán: Las luchas de Dios	81
Las cuitas de Hafez Asad y el proceso de paz	89
Abdullah II de Jordania: democratización limitada	95
Enseñanzas de Timor Oriental	103

NIEVES ZÚÑIGA

Ecuador en crisis

La crisis económica que afecta a Ecuador se ha cebado sobre todo en los sectores populares e indígenas, que en enero salieron a la calle para exigir una distribución más justa de la riqueza. La deuda externa ahoga la economía ecuatoriana y el objetivo del Gobierno es desarrollar una política presupuestaria aceptable por el Fondo Monetario Internacional. Para ello, en los Presupuestos del año 2000 aumentan los impuestos y se reducen los gastos sociales, lo que ha provocado la protesta de la población.

Ya lo habían avisado los indígenas ecuatorianos durante los 18 largos meses de protestas por la crisis económica y política y, efectivamente, el golpe de Estado se produjo el 21 de enero del año 2000. Un golpe de Estado previsible pero con un final nada esperado, por lo menos para algunos. El plan de dolarización (por el que un dólar equivaldría a 25.000 sucres) establecido a principios de enero por el Gobierno de Jamil Mahuad como solución a una economía al borde del caos, precipitó el golpe. La ocupación desde el 15 de enero de las calles de Quito por parte de los indígenas —que constituyen el 30% de los 12 millones de habitantes del país— pidiendo la destitución de Mahuad, los paros sindicales periódicos y las manifestaciones estudiantiles, con 30.000 soldados y policías para mantener el orden, fue el escenario en el que se desarrolló el asalto al poder. La causa: una situación económica insostenible, caracterizada por la abrupta pérdida de capacidad adquisitiva, la corrupción, el encarecimiento de la vida (en Quito los precios subieron hasta un 35%) y los sueldos mínimos (4 millones de ecuatorianos sobreviven con un salario de 7.500 pesetas al mes).

Indígenas y militares, liderados por los coroneles Fausto Cobo y Lucio Gutiérrez, ocuparon el Congreso autoproclamándose las nuevas autoridades en una Junta de Salvación Nacional que duró tres horas. Para ello contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas presididas por el general y ministro de Defensa, Carlos Mendoza. Mientras, el presidente del Gobierno, Jamil Mahuad, manifestaba su negativa a dimitir al considerarse depositario de la voluntad popular expresada en las urnas. Pocas horas después del asalto, el general Mendoza abandonó, al no poder convencer al jefe del Estado de su dimisión, con el fin de evitar un “estallido social”. Ante el inesperado suceso, los golpistas hablaron de traición y responsabilizaron a Mendoza del fracaso del golpe. Según algunas versiones, el “Judas del cuartelazo” —como fue calificado por los indígenas— “fue el topo que desde el triunvirato informó a los generales sobre el alcance de la sublevación”. Mientras

Nieves Zúñiga es
periodista

tanto, y de forma prácticamente constitucional, se nombró a Gustavo Noboa —vicepresidente del Gobierno de Mahuad— como sucesor en el cargo de la presidencia. Algunos militares detenidos y unos indígenas que han regresado a sus comunidades defraudados pero no rendidos, es el resultado de un golpe de Estado calificado por el ex presidente Jamil Mahuad de “cantinflada”. Ahora todos los ojos están puestos en Gustavo Noboa, que ya se ha pronunciado en favor de la dolarización y de la política económica dictaminada por su antecesor. La crisis social y política y una fuerte tendencia a la polarización entre ricos y pobres sitúan a Ecuador ante un incierto futuro.¹

Antecedentes de la crisis

Desde 1998 Ecuador vive serios apuros financieros. Ese año el país registró la mayor inflación de América Latina (43,4%), creció un 0,8%, y terminó con un déficit fiscal del 6% del Producto Interior Bruto. En septiembre de 1998 comenzó la devaluación desenfrenada del sucre mientras que, por otro lado, subieron las tarifas del combustible y la electricidad. El 1 de octubre del mismo año, los sectores populares iniciaron la primera huelga general, que se repetiría durante dos días, el 10 y 11 de marzo de 1999. Clase obrera, campesinos e indígenas se unieron para protestar contra la política económica neoliberal de Jamil Mahuad. Mientras en Quito se producían choques entre los trabajadores y la policía, en el campo las carreteras eran bloqueadas por los indígenas que demandaban el descenso de los precios de los productos alimentarios. Esta situación puso al país bajo el estado de emergencia dictado por el Gobierno, con miras a neutralizar las amenazas de los trabajadores de paralizar los servicios públicos como el agua, las telecomunicaciones, la electricidad y el petróleo.

Presionado por el fantasma de la deuda externa, el Gobierno incluyó en los Presupuestos del año 2000 el aumento de los impuestos y la reducción de las asignaciones al área social, lo que provocó una confrontación política entre los distintos partidos y una profunda inquietud en la sociedad ecuatoriana. Mientras que el Ejecutivo pretendía destinar el 54% del dinero al servicio de la deuda, el Pachakutic, partido político de mayoría indígena, exigía el 30%. La Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas (CONAIE) amenazó con la petición de renuncia del presidente Jamil Mahuad y de todos los funcionarios acusados de estar involucrados en el supuesto desvío de fondos públicos para la financiación de su campaña electoral, si no rectificaban su política económica.

Esta crisis se vio agudizada por el bloqueo político y la lentitud en la toma de decisiones del Gobierno de Mahuad, que provocaron la indignación de toda la sociedad. Los sectores populares y la población indígena fueron especialmente perjudicados por la cada vez más injusta distribución de la riqueza, consecuencia de la dinámica económica propia de un país dependiente y deudor. Mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la reprogramación de la deuda externa, el aumento del impuesto sobre el valor añadido y la convertibilidad monetaria, el Gobierno de Jamil Mahuad pretendía solucionar una crisis demasiado larga.

¹Ver artículo de José María Tortosa en *Le Monde Diplomatique* de marzo de 2000.

Ecuador, al borde del caos

Cuando Jamil Mahuad, del partido Democracia Popular, accedió al cargo de presidente el 10 agosto de 1998, heredó de su antecesor Fabián Alarcón una difícil situación a la que hacer frente. La política social y la reducción de la pobreza se convirtieron en parte fundamental de la agenda del nuevo mandatario. Los efectos del Niño, que devastó al país entre octubre de 1997 y agosto de 1998, la brusca caída del precio del petróleo, la crisis financiera internacional y las pérdidas ocasionadas por la corrupción, agravaron considerablemente la situación económica del país.

Jamil Mahuad era una de las últimas esperanzas para aliviar una situación económica que amenazaba con desatar una recesión de impredecibles consecuencias, si no se tomaban medidas a tiempo. El gobernante democristiano fue acusado por los movimientos sociales de falta de liderazgo y de tomar medidas económicas que sólo favorecían a los banqueros. La crisis continuó en un ambiente de indignación y engaño. Las medidas económicas significaron la duplicación del precio de la gasolina, el aumento del precio de los alimentos y del impuesto sobre el valor añadido (IVA), y la congelación de la mitad de los depósitos bancarios. Por otro lado, la devaluación del sucre, (durante el mandato de Mahuad el sucre se ha devaluado en un 65%), las fluctuaciones del dólar, la falta de créditos y las inmanejables tasas de interés motivaron la creación de iniciativas de desarrollo económico paralelas a las propuestas del Gobierno. La desenfrenada carrera alcista del dólar, cuya cotización llegó a 18.250 sucres en pocas horas en el mes de octubre de 1999, provocó el cierre de numerosas empresas. En apenas dos semanas se triplicaron los precios, los productos importados desaparecieron y los nacionales aumentaron considerablemente su coste, ya que la industria nacional trabaja con materias primas importadas.

Hacia el final de su mandato, Mahuad veía como única solución una dolarización urgente para evitar que Ecuador se convirtiera en una pesadilla. Sin embargo ya era demasiado tarde. Hoy, el 62,5% de la población ecuatoriana es pobre. La demagógica reforma agraria realizada por las dictaduras militares en la década de los sesenta y la inseguridad en la tenencia de la tierra explican que la pobreza afecte de manera especial a la población rural y sobre todo a los indígenas, quienes han tomado una posición activa y han adquirido gran influencia política, uniéndose a los campesinos y al proletariado —poco organizado— en la lucha por la justicia.

Fuerza de los movimientos indígenas ecuatorianos

En las décadas de los sesenta y setenta la reforma agraria obedeció a la necesidad de modernizar la agricultura. Sin embargo, prácticamente sirvió para acentuar aún más los procesos de diferenciación y descomposición socioeconómica y cultural de la población rural. El Estado remarcó la demanda cultural de los pueblos indígenas, por encima de la todavía inacabada cuestión agraria. De esta forma se acentuó la distancia entre las posiciones de clase y las de corte étnico dentro de la estrategia estatal. Pero ante la creciente pauperización, el movimiento indígena

pronto retomó la reivindicación de sus tierras y la cuestión del reconocimiento de sus derechos políticos. En estos años las corrientes culturalistas, indianistas y etnopolulistas dentro del movimiento indigenista no tomaron mayor fuerza; por el contrario, el movimiento indígena ecuatoriano vivió un proceso de madurez y de unificación organizativa nacional, superando la separación entre etnia y clase. Con el tiempo, la reivindicación étnicocultural fue incorporando contenidos políticos sin quedarse en la mera propuesta etnicista.

La protesta indígena fue acallada por la dura represión del régimen de Febres Cordero (1984-1988), quien impuso una política agraria de apoyo casi exclusivo a la agricultura empresarial agroexportadora. Esta situación cambió con el Gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1988-1992), que reconoció la situación de la población indígena como un problema a la vez económico y étnicocultural. Este Gobierno ofertó una nueva forma de trato estatal a los pueblos indígenas, contemplándolos como “nacionalidades” dentro de sus planes, aunque en la práctica se reeditó la política neoindigenista, colocando en un segundo plano el apoyo a los derechos económicos, políticos y culturales de los indios. Una vez más, se puso el énfasis en las políticas educativas y servicios secundarios de bienestar social.

En aquel momento el Estado ecuatoriano, presionado por los organismos financieros internacionales, había restringido el gasto social y su papel “benefactor” de intervencionismo estatal, tratando de instaurar definitivamente una economía de mercado en el país. Esta situación desencadenó uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia ecuatoriana: el levantamiento indígena del Inti Raymi en 1990. Su protagonista fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), representativa de todas las organizaciones indígenas ecuatorianas. Durante esta revolución, el Gobierno, angustiado por los acontecimientos y por la simpatía de la sociedad hacia sus oponentes, decidió dialogar con los indígenas bajo la intermediación de la Iglesia católica. El movimiento indígena adquirió una gran importancia para el pensamiento y acción de la izquierda ecuatoriana. Las antiguas tesis políticas sobre la vanguardia obrera como única salida revolucionaria fueron desterradas, ya que el potencial movilizador y transformador de la cuestión étniconacional constituyó una puerta abierta para los planteamientos políticos más progresistas de esta sociedad.

A comienzos de un nuevo siglo, el 21 de enero de 2000, los indígenas ecuatorianos pudieron “tocar” el poder, —hecho insólito en la historia de América Latina—, aunque sólo por un breve espacio de tiempo; alrededor de tres horas, las suficientes para demostrar la tenacidad de pueblos diferentes (10 etnias) unidos en busca de la justicia y la dignidad.

Actualmente la CONAIE es uno de los actores más fuertes entre los movimientos sociales ecuatorianos. Nació en 1986 y tuvo como principal virtud el llenar de contenidos políticos la demanda cultural indígena. Su reivindicación fundamental era la tierra, pero no únicamente como factor productivo sino como elemento integral de una determinada vida sociocultural y como base para defender la condición de nacionalidades de los pueblos indígenas. Pedía una reforma agraria favorable al campesino y la simultánea paralización de la colonización y explotación de los recursos naturales. Entre sus objetivos se encontraban los siguientes: gestionar ante el Gobierno la devolución total de las tierras; defender las culturas

étnicas; concienciar sobre el valor de la medicina tradicional; organizar cursos de capacitación ideológica, política y tecnológica con organizaciones afiliadas; buscar la financiación externa para los proyectos de las nacionalidades indígenas y coordinar las políticas de las organizaciones indígenas de Ecuador.

Diez años después, en 1996, el partido político de mayoría indígena Pachakutic (también llamado Movimiento Unidad-Plurinacional Pachakutic-Nuevo País) se constituyó como “la otra voz” de los indígenas en el panorama político ecuatoriano. Este partido fue el resultado de la extensión del espacio político del movimiento indígena hacia los demás sectores sociales, obreros y campesinos. La propuesta del Pachakutic era colectiva, resultado de un acuerdo común: según este partido, los cambios debían ser globales y estructurales, para superar la política del Gobierno, dirigida exclusivamente a determinados sectores de la sociedad con poder económico o político (como los banqueros o el partido social cristiano). Para lograr un Estado plurinacional, añadían, hay que revisar la arcaica legislación tradicional y tomar conciencia de cada uno de los sectores sociales con sus particularidades. El tema de la identidad, vista como un eje articulador, lo consideraban ausente de la política ecuatoriana. “Mientras no haya ese reconocimiento en nosotros mismos, si no hay originalidad en nosotros mismos, si no hay la recuperación de los valores humanos en nosotros, no vamos a poder cambiar la historia, ni la política, ni la economía de Ecuador”. Pachakutic pretendía transformar una concepción del Estado y de la nación caracterizada por la ausencia del autorreconocimiento de los valores humanos, de la persona y de la colectividad. “Las referencias para el desarrollo del pueblo ecuatoriano están en el mismo pueblo”.

La relación entre los indígenas y el Gobierno

A comienzos de 1999 la relación entre la CONAIE y el Gobierno se encontraba en uno de sus momentos más altos. El motivo era doble: por un lado el cambio de estrategia del movimiento indio y, por otro, la apertura del Ejecutivo hacia los planteamientos indígenas. El presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, comunicó que dejaban de lado las movilizaciones para dar paso al diálogo. Poco tiempo antes se había creado el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) adscrito a la Presidencia de la República, cuya función principal era la elaboración de propuestas y programas de desarrollo para los pueblos indígenas, pero esta vez directamente de manos de las nacionalidades y pueblos con sus representantes, y no de las organizaciones relacionadas con los asuntos indígenas como ocurría anteriormente. Sin embargo, esta calmada y esperanzadora situación no duró mucho tiempo.

La sucesión de crisis económicas hizo a la CONAIE preparar una ley de desarrollo para las poblaciones campesinas e indígenas, así como propuestas sociales y económicas de ámbito nacional. Su objetivo era lograr un acuerdo social para el desarrollo sostenible y detener la caída de los índices de bienestar de los sectores indígenas más pobres. Los indígenas definieron un modelo económico de desarrollo alternativo el cual “debe ser socioculturalmente compatible y aceptable, ecológicamente sostenible y económicamente rentable. Debe estar inspirado en el principio de reciprocidad, solidaridad, equidad, justicia y respeto”.

Las referencias para el desarrollo del pueblo ecuatoriano están en el mismo pueblo

La deuda externa, que alcanza los 17.000 millones de dólares, es uno de los factores más importantes de la crisis económica de Ecuador.

A causa del empeoramiento de la situación, los movimientos sociales unieron sus fuerzas y comenzaron las movilizaciones. Actos como el ocurrido en febrero de 1999, cuando la agrupación Jóvenes Indígenas, el Seguro Social Campesino y la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas del Sur “enterraron” la Constitución de la República, se sucedieron a menudo. Un mes más tarde estudiantes, sindicatos y profesores exigieron al Gobierno rectificaciones en su política económica. En este ambiente de tensión general y tras la huelga del 10 de marzo, la situación para el Ejecutivo se complicó aún más. La CONAIE amenazó al Gobierno de Mahuad con pedir su dimisión si en un plazo de 48 horas no eliminaba el aumento de los precios de los combustibles, anulaba el Estado de emergencia tras la huelga y ordenaba la inmediata devolución del dinero entregado a la Banca privada a través de las cuentas de ahorro y corrientes. A los pocos días, el 20 de marzo, el Gobierno aceptó firmar un acuerdo con la CONAIE basado en los siguientes puntos: congelación del precio del gas de uso doméstico y análisis de una posible congelación de los precios de los combustibles. También se comprometió a crear un fondo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos indígenas (mediante una reforma legal) y a eliminar las distorsiones de las planillas de energía eléctrica para el sector campesino. Finalmente, los movimientos indígenas y el régimen acordaron establecer mesas de concertación, atender las necesidades provinciales y realizar un control de precios.

Todo esto quedó en mero enunciado cuando a comienzos del año 2000, ante la invariabilidad de la situación y tras ser decretada la dolarización por el Gobierno, la CONAIE cumplió con su promesa y miles de indígenas tomaron la ciudad de Quito desde el 15 enero con el objetivo de forzar la caída de Mahuad e instaurar un Gobierno popular. Estas medidas no fueron secundadas por la oposición parlamentaria que, aunque era contraria a las políticas generales del Ejecutivo, sí estaba a favor de la dolarización. Durante la toma de Quito el entonces presidente Mahuad se negó a negociar con la CONAIE mientras continuara con su pretensión de destruir el orden político.

Tanto el líder indígena Antonio Vargas como el arzobispo Alberto Luna (que presidía el “parlamento popular” que los indígenas establecieron durante las manifestaciones) y otras plataformas paralelas que negaban la legitimidad de los poderes del Estado, fueron descalificados por el alcalde de Guayaquil —la segunda ciudad más importante de Ecuador— y el ex presidente del país León Febres Cordero como “payasos”.

Ahora los indígenas se han retirado al campo, pero han dado un plazo de seis meses al nuevo presidente para solucionar el problema. En declaraciones a la televisión, Gustavo Noboa ha declarado que “los indígenas serán atendidos en lo que sea justo, en lo que sea apropiado”. Pero ¿quién decide qué es lo justo y qué lo apropiado?

La dolarización y el fantasma de la deuda externa

La deuda externa, que alcanza los 17.000 millones de dólares, es uno de los factores más importantes de la crisis económica de Ecuador. Sin embargo el decreto de dolarización del Gobierno fue el detonante de lo ocurrido a comien-

zos del año 2000. Según el esperado discurso que pronunció el 15 de enero Jamil Mahuad (economista educado en Harvard) la urgente dolarización era lo único que podía atajar la inflación y la acelerada devaluación del sucre —en 1999 esta moneda sufrió una desvalorización del 655%, y del 20% en lo que va de año— y así evitar la conversión del país en una pesadilla. Según Mahuad, si se rechazara esta propuesta se dispararía la cotización del dolar, la inflación alcanzaría niveles catastróficos, continuaría la fuga de capitales, aumentaría el paro y caería el poder adquisitivo de los salarios. Hechos todos ellos, por otra parte, que ya llevan tiempo ocurriendo en el país sudamericano. De hecho, la inflación había llegado a tal punto a finales de septiembre de 1999 que, ante la imposibilidad de hacer frente a la deuda externa, el Gobierno intentó su renegociación con el Fondo Monetario Internacional (para lo que delineó una estrategia global de reestructuración que agrupaba en un solo paquete la deuda Brady, los Eurobonos, el Club de París y la deuda interna). Mediante la negociación con el FMI, Ecuador aspiraba a una reducción sustancial del monto de 6.000 millones de dólares que tiene en concepto de deuda Brady y a una reprogramación en el tiempo, con tasas de interés razonables, de los Eurobonos. Esta medida no implicaba la suspensión de los pagos de obligaciones con los organismos internacionales de crédito, que son los que desembolsan constantemente recursos para el país. La iniciativa contó con el visto bueno (al menos formal) del FMI, pero éste no dió un paso en firme más allá de sus promesas de ayuda de emergencia.

El modo de tratar el tema de la deuda por parte del Gobierno de Mahuad no convenció al movimiento indígena. Cuando, en abril de 1999, el mandatario anunció que los indicadores económicos no situaban a Ecuador dentro de los parámetros de pobreza establecidos por los países del Grupo de los Siete para considerar una condonación de la deuda externa del país con respecto a los Gobiernos y agencias internacionales de crédito, la Ecuarunari (organización indígena perteneciente a la CONAIE) manifestó su preocupación. Pidió al Congreso Nacional el ingreso de Ecuador dentro de los programas de condonación de deuda externa pública, y solicitó a Mahuad una posición firme y clara en defensa de la soberanía y el desarrollo nacional, planteando la utilización de los fondos condonados en obras de desarrollo e infraestructura para las nacionalidades indígenas, campesinos y sectores pobres del país. En opinión del movimiento indígena, la deuda externa no sirvió para el desarrollo nacional ni mejoró las condiciones de vida del pueblo (el gasto en salud y educación pasó de un 12% en 1980 al 7% en 1990 y, de ahí, al 3,3% en 1999). Por tanto, destinar los escasos ingresos del país al pago del servicio de la deuda reflejaba una posición claramente antipopular y de defensa exclusiva de las clases dominantes. Ecuarunari declaró “de nada nos sirve que los organismos internacionales nos califiquen con buena conducta, cuando el 80% de la población tiene hambre, el desempleo llega al 60% y todo el esquema económico está destruido”.

A partir de la declaración de la moratoria de la deuda externa —la primera declarada por un país latinoamericano desde la puesta en marcha del Plan Brady en 1988-1989— la realidad siguió empeorando: la inflación se situó alrededor del 60% anual y el PIB perdió 7 puntos en el pasado ejercicio.

Hay que preguntarse el impacto que tendrá la experiencia ecuatoriana en los demás países de América Latina y de otras regiones subdesarrolladas.

Llegado a este punto y asesorado por expertos monetaristas del Gobierno del ex presidente argentino Carlos Menem, Mahuad estudió la alternativa de la dolarización como única manera de erradicar la hiperinflación. El escenario político no se lo ponía fácil ya que contaba con la oposición sindical, indígena e incluso de sectores de la clase media. Su implantación se presentaba complicada, teniendo en cuenta la expulsión del ex presidente Abdalá Bucaram (electo en agosto de 1996 y derrocado en febrero de 1997) cuando quiso aplicar la conversión monetaria al estilo argentino. Para el plan de dolarización, Mahuad contaba con el apoyo de los principales partidos, entre ellos el Social Cristiano de la oposición, y del grueso del empresariado. A la semana siguiente de conocerse las intenciones de Mahuad los precios sufrieron una fuerte subida (del 35% en algunos artículos) mientras quedaron inmóviles los salarios. Otra consecuencia de la falta de liquidez del Banco Central fue la congelación, durante siete o diez años, de los ahorros bancarios superiores a 4.000 dólares previa entrega de un bono nominal al 7,5%. Esta medida afectó a cerca de 30.000 ecuatorianos de clase media y baja y a jubilados, e impedirá a muchos de ellos disfrutar de su dinero en vida.

La situación a la que se enfrenta ahora Noboa no es fácil. El futuro económico de Ecuador es bastante desesperanzador debido a la insuficiencia de recursos propios y al difícil acceso al crédito internacional, después de que el Gobierno suspendiera el pago de la deuda externa. Las arcas del Estado dependen en gran medida del petróleo y de la inversión extranjera, reacia a instalarse en mercados inestables. De momento los planes de Noboa incluyen llevar a cabo la dolarización, seguida de un plan de privatización y la continuación de las medidas económicas previstas por su antecesor. Además de la resolución de esta pésima situación económica y suponiendo que se lleve a cabo el experimento de la dolarización, hay que preguntarse el impacto que tendrá la experiencia ecuatoriana en los demás países de América Latina y de otras regiones subdesarrolladas.

Un futuro incierto

Tras multitud de promesas, y a pesar de ser el objetivo primordial de su legislatura, Jamil Mahuad no pudo sacar al país de la crisis económica. Él atribuye su forzosa salida del Gobierno a la reducción de los gastos militares en 1998, como consecuencia de la firma de la paz fronteriza con Perú, y al equiparamiento de los salarios de las Fuerzas Armadas con los del resto de los funcionarios. El ex mandatario afirma que su mayor error fue dejarse engañar por los militares. El general Mendoza, a su vez, proclamó públicamente la propuesta realizada por algunos de sus ministros al ex presidente, para romper el orden constitucional y, mediante un autogolpe, gobernar con todos los poderes. Es lo que se ha llamado *fujimorazo*, ya que es lo que hizo el presidente peruano Alberto Fujimori en abril de 1992. Esta propuesta fue rechazada por Mahuad, que se declaró ante todo demócrata.

La sociedad ecuatoriana, frustrada y defraudada, siempre ha acusado al Gobierno de Mahuad de una impavidez peligrosa y de "dejar hacer", sin poner el empeño necesario en la solución de los problemas. Esto provocó, a finales del año pasado, un vacío de poder que fue pronto ocupado por los analistas y editoriales de los periódicos, que llamaron a la sociedad a actuar por sí misma para

solucionar la situación. Hacía tiempo que los analistas hablaban de la alta probabilidad de entrar en un proceso de hiperinflación que provocaría violentas protestas ciudadanas, y así ocurrió. Algunos editorialistas ecuatorianos hablaban de que Ecuador estaba dado al diablo. Ahora está dado a Gustavo Noboa. Antigo vicepresidente del Gobierno de Mahuad, es definido como apolítico (no pertenece a ningún partido) y ferviente católico (pertenece al Opus Dei). “Paz para el Ecuador, vamos a salir adelante” fueron sus primeras palabras tras tomar el poder. Tal y como anunció, momentos antes de firmar el decreto de toma de funciones como presidente, el 22 enero, ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su política. De momento ha anunciado que continuará con la política económica prevista y con el proyecto de dolarización. Para ello cuenta con el apoyo de su antecesor, aunque no significa que éste lo considere legítimo ya que, según palabras de Mahuad, él jamás abandonó su cargo. El primer paso se dió el 29 de febrero cuando, tras casi una semana de debates, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transformación Económica conocida como Ley Trole. Esta norma fija los fundamentos y el marco legal para poner en marcha la dolarización y la privatización de las instituciones del Estado. Los indígenas han amenazado con suspender los diálogos con el Gobierno si éste continúa con el proceso de dolarización a través de dicha ley.

La pregunta que se plantean ahora los 12 millones de ecuatorianos es ¿cuánto durará Noboa?

MARÍA ROSA MENESES ARANDA

Rusia ante el abismo de Chechenia

La guerra de Chechenia desatada en septiembre de 1999 ha puesto de manifiesto las secuelas de un conflicto pendiente de resolver desde hace tres años. Rusia pugna por la no desintegración de la Comunidad de Estados Independientes, ya que con ello perdería los importantes ingresos económicos que le proporcionan el petróleo y el gas. La batalla se libra también en la política interior: el ahora presidente, Vladimir Putin, supo aumentar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales con la campaña militar en Chechenia. En esta República, el resultado se mide en el sufrimiento de los civiles chechenos, víctimas de una guerra de intereses que provoca muerte, torturas y destrucción.

M^a Rosa Meneses Aranda es periodista y experta en Información Internacional y países del Sur

Como en 1994, el horror de la guerra se ha adueñado de Chechenia. Con la toma del último bastión de los guerrilleros Shatoi, Rusia dio por zanjados, a principios de febrero, cinco meses de guerra. Las principales ciudades de la República han sido conquistadas: Gudermes, Grozni, Urus-Martan; los rebeldes ofrecen resistencia escondidos en las montañas del sur, en el desfiladero de Argún. El Ejército considera que se pondrá fin al conflicto sólo con la derrota de los principales grupos rebeldes. Tras acabar la fase militar de la operación antiterrorista, el Kremlin pretendía enviar a policías de elite del Ministerio del Interior para hacerse cargo del control y la seguridad de la región, pero ha tenido que revisar sus planes y sofocar primero los combates en Komsomolskoye. La guerra no ha terminado, como hubo de reconocer el mismo jefe del frente Este, el general Troshev, en marzo. Las emboscadas por sorpresa contra las tropas rusas y los duros combates siguen sucediéndose, causando las mayores bajas entre el Ejército y convirtiendo el conflicto en una guerra de guerrillas. El 12 de marzo, los servicios secretos de Moscú lograron capturar a uno de los dirigentes de los rebeldes, Salman Raduyev, pero siguen ignorando el paradero de los comandantes Basayev y Jattab. El presidente checheno, Aslan Masjadov, aseguró en Radio Libertad que la guerra será larga y que aún cuenta con más de 20.000 hombres dispuestos a luchar. Según

los rusos, todavía resisten entre 800 y 2.000 guerrilleros. Las fuerzas federales han admitido que, en lo que va de guerra, han sufrido más de 6.000 bajas (más de 1.500 muertos y 4.500 heridos).¹ La amenaza de la guerrilla puede empujar a Rusia a mantener militarizada la zona de forma indefinida.

La matanza de cientos de civiles y las atrocidades cometidas por el Ejército ruso son la consecuencia directa de una guerra diseñada para combatir a los guerrilleros chechenos, pero sin hacer distinción alguna entre éstos y la población desarmada entre la que se esconden. Todo apunta a que en esta guerra morirán más civiles que en la anterior, que ya causó alrededor de 87.000 víctimas.

Es el terrible rastro del genocidio dejado por el Ejército federal, a su paso por la República: en Alján Yurt, 41 civiles muertos; en el barrio de Staropromivlovski (Grozni), 50 muertos; en el distrito de Aldi, 62; en Goiti, 40. En los "campos de filtración" se han cometido torturas sistemáticas, violaciones y ejecuciones sumarias de civiles, según han denunciado algunos refugiados supervivientes y las organizaciones humanitarias. Los testimonios más dramáticos proceden del campo de filtración de Chernokózovo, que los rusos utilizan para detectar a los guerrilleros, donde han sido detenidas más de 300 personas, según denuncia Human Rights Watch. Rusia desmiente las acusaciones y ha nombrado a un comisario de Derechos Humanos propio para investigar los hechos. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, el 28 de febrero realizó una "visita guiada" a las ruinas de la capital chechena. En Grozni, entre la devastación provocada por los bombardeos masivos rusos, subsisten unas 20.000 personas necesitadas de ayuda humanitaria, sin alimentos, medicinas o refugio. La tragedia de la guerra ha llevado a más de 200.000 chechenos a huir a la vecina Ingushetia, que ha doblado su población. Los desplazados dentro de la República son más de 160.000 y más de 50.000 chechenos que viven en Moscú sufren amenazas y persecución.² Pese a todo, la directora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sadako Ogata, declaró que no hay catástrofe humana entre los desplazados.³

Las razones de Moscú

Rusia emprendió la guerra alegando dos razones. La primera, la incursión de los guerrilleros islamistas chechenos, comandados por Shamil Basayev y Abdurrahman Jattab (presunto aliado de Osama Bin Laden), en la vecina República de Daguestán, con el objetivo de implantar un estado islámico checheno-daguestaní. Basayev pretendía también expulsar a Rusia del Cáucaso y liberar a los pueblos musulmanes del centralismo ruso. La incursión en Daguestán desestabilizó esta pequeña República, en la que conviven 34 etnias diferentes, avistándose el

¹ *El País*, 20 de febrero, 2000.

² "Country Updates: Chechnya", *The Nation*, volumen 269, nº 17, 22 de noviembre, 1999.

³ *El País*, 12 de diciembre, 1999.

peligro de una guerra civil entre los partidarios del sueño islámico y los que se oponían a él.

La segunda razón viene dada por la ola de atentados que convulsionaron Moscú y Volgodonsk, en septiembre de 1999, cuando varias bombas mataron a cerca de 300 civiles. Rusia responsabilizó de la acción a los rebeldes chechenos, aunque esta acusación está aún por demostrar. El ex primer ministro ruso Serguei Stepashin contradujo la versión oficial y declaró que el ataque a Chechenia ya estaba planeado antes de que fuera destituido de su cargo y relevado por Putin, en agosto de 1999. Se trataba de un plan para crear en el norte de Chechenia una zona ocupada por tropas federales. El Kremlin estaba preparado para una invasión y para establecer duras sanciones económicas contra los chechenos. Por tanto, hay serios indicios de que la guerra fue planeada de antemano.⁴

La campaña contra la guerrilla —una *operación antiterrorista* según la denominó el Gobierno ruso— se lanzó en septiembre de 1999 con el despliegue de tropas federales en la frontera, que fueron adentrándose en la República desde el norte. El Gobierno checheno, elegido democráticamente en 1997, fue declarado ilegal.

Una guerra sin solucionar

La primera Guerra de Chechenia (1994-1996) concluyó sin que se hubiera llegado a una solución. Rusia fue derrotada cuando ya la creía ganada. Los presidentes ruso y checheno firmaron un acuerdo, que prevé la revisión de sus relaciones en el año 2001. El pacto concede cierta independencia en política interior a la República autónoma, siempre y cuando ésta se someta a las directrices marcadas por Rusia en política exterior.

En enero de 1997, Aslan Masjadov fue elegido presidente de Chechenia, con el 65% de los votos. Era un líder moderado que prefería un Estado basado en el modelo de desarrollo a un Estado islámico. Mientras, la economía ilegal, las mafias y el contrabando se consolidaron en la zona. Se reprodujeron escenas de extorsión y violencia contra la población rusa y las autoridades no realizaron ningún intento para paliarlas. El Gobierno de Aslan Masjadov se vio cada vez más incapaz de controlar la situación y hacer frente a los partidarios del *señor de la guerra*, Shamil Basayev. Los secuestros de rusos y extranjeros se hicieron más frecuentes y aumentó la inseguridad interna. A principios del pasado año, los secuestradores habían reclamado los rescates de más de 1.300 rusos, daguestaníes e ingushes, y muchos de ellos fueron víctimas de torturas o murieron asesinados.⁵

Durante este tiempo, el Gobierno local no adoptó ningún tipo de decisión para restablecer el orden en la República. Masjadov temía particularmente que cualquier movimiento llevase a una guerra civil. Pero su política de no intervención, le llevó a perder el control del país por completo. El poder se fragmentó y pasó a

*El Kremlin
estaba
preparado
para una
invasión y
para
establecer
duras
sanciones
económicas
contra los
chechenos.*

⁴ *Financial Times*, 31 de enero, 2000.

⁵ "War in the Caucasus. The Chechen tragedy continues", *Strategic Comments International Institute for Strategic Studies*, volumen 5, nº 10, diciembre, 1999.

manos de hombres como Basayev y Jattab, que se enfrentaron a la postura del Gobierno, debilitando así su autoridad.⁶

Los seguidores de Jattab, extremistas wahabíes que cuentan con un fuerte respaldo financiero de Arabia Saudí, se aliaron en 1997 con Basayev para emprender una ofensiva contra Rusia desde Daguestán y todo el norte del Cáucaso. Las autoridades rusas intentaron reprimir el creciente radicalismo islámico, que tiene su centro en las montañas fronterizas entre Daguestán y Chechenia, pero en agosto de 1998, la zona fue declarada territorio islámico, sometido a la *shari'a*. Inició así un período de represión, con la práctica de amputaciones de miembros, castigos corporales y ejecuciones públicas retransmitidas por televisión. En agosto de 1999, Jattab y Basayev llevaron a cabo la intervención en Daguestán, que fracasó ante la falta de apoyos, obligando a los chechenos a retirarse. El Kremlin envió las primeras tropas a la frontera sin antes haber iniciado conversaciones con el Gobierno legítimo de la República autónoma. Masjadvov no tuvo más elección que apoyar a los extremistas frente a los ataques de las tropas federales.

Los beneficios de la intervención

La guerra de Chechenia esconde un complejo entramado de intereses; en primer lugar los que benefician directamente a Rusia. La intervención rompe el acuerdo de 1997, firmado por los gobiernos de Grozni y Moscú para plantear, en el año 2001, el estatuto de independencia de Chechenia, pero soluciona el problema de la desmembración de la Comunidad de Estados Independientes. Castigando el atrevimiento de Chechenia se evitaría así que otras Repúblicas tomen su ejemplo y proclamen la independencia.⁷ Se trata de un intento de controlar la desestabilización en la que se ha sumergido el Cáucaso, zona clave geopolítica y económicamente, a la vez que poseedora de un fuerte contenido simbólico para Rusia.

Por otro lado, la campaña se inició como forma de desviar los ojos de la opinión pública de la oleada de escándalos —entre ellos, el desvío de créditos del FMI hacia cuentas suizas— que afectaban a la clase gobernante, especialmente al presidente, Boris Yeltsin, y a una de sus hijas, Tatiana Diatchenko. El 10 de agosto de 1999, en los primeros días de la acción militar rusa en Daguestán, Yeltsin reemplazó al primer ministro, Serguei Stepashin, por Vladimir Putin. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin abandonó su cargo y nombró a Putin presidente en funciones, quien se apresuró a firmar un decreto para conceder la inmunidad al ex presidente, de modo que los tribunales no puedan procesarle.

Beneficiado por la dimisión de Yeltsin, Putin encaró las presidenciales del 26 de marzo contando con el apoyo del pueblo ruso. La popularidad de este personaje gris, con pasado de espía del KGB, crece a cada momento y con cada acción contra los *terroristas* chechenos. Durante el verano de 1999 parecía claro que el

⁶ Serguei Kovalev: "Putin's War", *The New York Review of Books*, volumen XLVII, nº 2, 10 de febrero, 2000.

⁷ Chechenia se declaró República independiente en agosto de 1991, al igual que Estonia, Letonia y Lituania. Sin embargo, no ha sido reconocida ni por Rusia ni por la comunidad internacional, excepto por Afganistán.

bloque Patria-Toda Rusia, encabezado por Yuri Luzhkov y Evgueni Primakov, los políticos más populares del país, tenía grandes posibilidades de obtener una amplia victoria electoral. La única alternativa que vio Putin para derrotarles electoralmente era conseguir una victoria militar. Los atentados de septiembre —presuntamente organizados por los chechenos, según Rusia, y, de acuerdo con las acusaciones de Occidente, llevados a cabo por los servicios secretos federales para movilizar a la opinión pública— supusieron para Putin la excusa perfecta para emprender una campaña contra el enemigo checheno. Sus frutos pudieron comprobarse en las elecciones parlamentarias de diciembre, en las que el bloque Unidad, recién creado para la ocasión para apoyar a Putin, obtuvo el 23% del voto. Ya en el año 2000, Luzhkov y Primakov anunciaron su retirada de las elecciones presidenciales. Putin, quien —según Stepashin— necesita ser educado en derechos civiles y democracia, tuvo allanado el camino hacia la Presidencia de Rusia.⁸

La guerra de Chechenia confiere a Rusia una nueva legitimidad internacional. Para el Ejército supone una oportunidad para vengar la humillante derrota sufrida en 1996 y lavar su imagen en decadencia ante el mundo. Es su forma de demostrar que, internacionalmente, sigue siendo una potencia hegemónica. De ahí la invasión a gran escala en la que han participado 100.000 soldados del Ejército, la Armada, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Especiales. Rusia ha empleado todos sus medios para combatir a los chechenos: intensos bombardeos, armamento pesado, incluso se ha confirmado oficialmente la utilización de bombas de vacío.⁹ Esta terrible arma crea una atmósfera cero y una presión que lo destruye todo; minutos después, se restablece la atmósfera y las tropas pueden tomar el territorio. La impresionante dimensión de la fuerza desplegada parece desproporcionada con la intención de Rusia de combatir el terrorismo checheno.

Todo ello coincide con la proclamación de su nuevo concepto de seguridad nacional, que rememora, en cierta forma, la época de la bipolaridad. Este concepto destaca que, entre las prioridades nacionales de Rusia se contempla mantener buenas relaciones con las repúblicas de la CEI, asegurar la soberanía rusa y garantizar que el país siga siendo una superpotencia. Entre las amenazas para la seguridad nacional de la Federación rusa, el documento menciona las tendencias separatistas, las tensiones entre Moscú y las regiones y el extremismo político. En la escena internacional, se resalta como principal amenaza la pérdida de un papel preponderante en la ONU. Como conclusión, se establece que, para garantizar la seguridad nacional de la Federación de Rusia, ésta necesita equiparse militarmente para ser capaz de responder de forma adecuada a cualquier amenaza y se proclama que Rusia tiene el derecho de utilizar los medios a su alcance, incluyendo las armas nucleares, para hacer frente a potenciales agresiones.¹⁰ Ante a la hegemonía de la OTAN, demostrada por su ampliación hacia el Este y su actuación en Kosovo y Bosnia, Rusia también desea tener un papel respetado por el mundo. Sin embargo, la campaña militar producirá daños en su imagen, cierta hostilidad en el

⁸ El 25 de marzo, Putin ganó las elecciones con más del 50% de los votos.

⁹ Serguei Kovalev: "Putin's War". *Ibidem*.

¹⁰ *The New York Times*, 14 de enero, 2000.

mundo musulmán y aumentará la percepción occidental que la considera una potencia culturalmente no occidental y potencialmente hostil.

El factor geoeconómico

Rusia posee objetivos estratégicos y económicos de máxima importancia en la zona del Cáucaso. Estos intereses se centran en las rutas de abastecimiento petrolífero provenientes de Oriente Medio y Asia Central y también en la gran riqueza en gas y petróleo que existe en el mar Caspio, a pesar de que no se está aprovechando todo su potencial.¹¹ Las principales vías de abastecimiento discurren, desde Bakú, por Chechenia y Daguestán hacia el mar Negro y el Bósforo. También había importantes refinerías en Grozni, ahora destruidas.

El acuerdo de paz de 1997, garantizaba la seguridad del oleoducto Bakú-Grozni-Novorossisk-Bósforo¹² por parte de la policía chechena. A cambio, Rusia pagaba un impuesto a las autoridades, lo que suponía reconocer su soberanía. Pero el creciente estado de inseguridad reinante en la zona constituía una amenaza para la industria petrolífera del Caspio, en la que estaban invirtiendo compañías occidentales (Mobil/Exxon, BP). Masjadov se mostró incapaz de garantizar la seguridad del oleoducto y los continuos sabotajes privaron al Gobierno de las rentas. La guerra ha conferido una nueva dimensión al pacto de 1997, ya que si Rusia recupera la República autónoma no tendría que seguir pagando impuestos por utilizar el oleoducto.

En mayo de 1999 se reabrió la vía Baku-Supsa y, en noviembre, Turquía, Azerbaiyán y Georgia firmaron un acuerdo para construir otro oleoducto que uniría Bakú y Ceyhan, lo que marginaba a Rusia.¹³ Hay varias opciones para sacar el petróleo del Caspio hacia el Mediterráneo: una vía es Azerbaiyán-Georgia-Turquía, otra pasa por Rusia y otra por Irán. Los intereses de Rusia se centran en evitar que Turquía (miembro de la OTAN y que cuenta con un fuerte apoyo de EE UU) o Irán se queden con la ruta, pero para conseguirlo tiene que estabilizar Chechenia y Daguestán, ya que sólo así mejoraría su posición. Es importante también que el Cáucaso no se convierta en una zona bajo influencia de la OTAN.

La riqueza del Caspio, sin embargo, presenta serias dificultades para ser explotada,¹⁴ dado que se trata de un mar cerrado y es costoso construir vías para extraer el petróleo y el gas hasta el Mediterráneo. Los beneficios son bajos y las inversiones poco rentables. El proceso de extracción tiene altos costes y la inestabilidad de la zona (movimientos separatistas de Chechenia y Georgia, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, el movimiento kurdo en Turquía) no ayuda a crear mejores expectativas.

¹¹ Hacia 1940, la región constituía cerca del 45% de las reservas petrolíferas rusas; ahora sólo se produce allí un 1%.

¹² *Foreign Report*, nº 2482, 5 de febrero, 1998.

¹³ Ignacio Ramonet: "Chechnya in chaos", *Le Monde Diplomatique*, febrero, 2000.

¹⁴ "Caspian oil development. Multiple obstacles", *Strategic Comments*, International Institute for Strategic Studies, volumen 5, nº 4, mayo, 1999.

Las voces discordantes

Durante la anterior guerra no hubo restricciones al acceso de los medios de comunicación al escenario del conflicto. La prensa independiente rusa fue muy crítica con la campaña militar e incluso la televisión estatal mostró imágenes de las víctimas y del sufrimiento padecido por las tropas federales y por los civiles chechenos, lo que ayudó a que la sociedad rusa rechazara la guerra, y la moral de los soldados quedara debilitada. Una encuesta llevada a cabo en 1996 mostró que tan sólo el 6% de los rusos aprobaba la política de Yeltsin en Chechenia.¹⁵

Esta vez, la entrada de periodistas extranjeros a la zona ha sido prohibida y no hay imágenes del horror de la guerra. El camino para la propaganda estatal está libre de obstáculos, consiguiendo así el apoyo popular: el 52% está a favor de la campaña militar, según los sondeos.

A pesar de todo, existen dentro del país voces que denuncian la intervención, como la asociación Memorial o las madres de los soldados rusos que ven cómo sus hijos caen muertos o mutilados, víctimas de una guerra injusta. Un periodista ruso, Andrei Babitski, fue víctima de las mismas atrocidades que los rusos cometían contra los chechenos. El reportero de Radio Libertad fue detenido por los federales el 16 de enero, cerca de Grozni, mientras informaba sobre la guerra en el lado checheno. Internado durante dos semanas en Chernokózovo, fue testigo y víctima de las torturas que allí se practican, corroborando las denuncias.

La reacción de Occidente ha sido la de renunciar a presionar o sancionar a Rusia por su intervención en Chechenia. No se han esgrimido aquí los motivos humanitarios que legitimaron la intervención de la OTAN en Kosovo, ignorando a Naciones Unidas. Se alega que en esta ocasión se trata de un asunto interno ruso y se opta por una débil persuasión que se limita a pedir a Moscú "transparencia" en la guerra. La Unión Europea aprobó una declaración llamando al respeto de los Derechos Humanos, pero sin lanzar ningún tipo de amenaza o sanción. La ONU tampoco ha planteado ningún tipo de resolución ni exigencia. Más aún, el Banco Mundial aprobó en diciembre la concesión de otro crédito millonario al Gobierno ruso. Éste sólo tuvo que garantizar que el conflicto de Chechenia no afectará a la estabilidad macroeconómica del país.¹⁶

Cuando todo termine, será muy difícil una negociación entre las actuales autoridades chechenas y las rusas. La cooperación entre ellas, después de la ofensiva, parece imposible, aunque Putin, que en un principio descartaba el diálogo con Masjadov, se muestra ahora dispuesto a entablar negociaciones. Todo apunta a que se creará en Chechenia una zona de seguridad militarizada, retomando la zona norte hasta el río Terek (que históricamente perteneció a Rusia hasta 1957), para impedir posibles infiltraciones de comandos fundamentalistas en territorio ruso y a que se instalará un Gobierno favorable al Kremlin. El estado de caos, el extremismo islámico, la violencia y la extorsión en la República autó-

¹⁵ *El País*, 24 de febrero, 2000.

¹⁶ *Financial Times*, 29 de diciembre, 1999.

noma que sirvieron para justificar la guerra acaban de hacerse más reales ahora, después de la intervención rusa y como resultado directo de ella. Si la guerra de Chechenia es una muestra de cómo puede gestionar Rusia sus conflictos internos, entonces se abren tiempos muy duros para la Federación y dilemas complejos para la comunidad internacional.

ALLISON ROHE

Reformas y temores en Irán: Las luchas de Dios

Cuando los iraníes votaron en las elecciones del 18 de febrero de 2000, el 75% del electorado exigió un Gobierno más dispuesto a democratizar la República, eligiendo un Parlamento con fuerte peso reformista. Estas elecciones, como las de 1997, que llevaron a Mohamed Jatamí al cargo de presidente de la República, llamaron la atención del mundo. ¿Qué está sucediendo en Irán? Aparentemente, los resultados de las elecciones abrirán las políticas del Gobierno y traerán más libertades al pueblo iraní; sin embargo, dentro de la teocracia islámica las cosas no se ven tan fáciles.

Allison Rohe es licenciada en Relaciones Internacionales y experta en Información Internacional y Países del Sur

Una parte importante de la sociedad iraní quiere más libertad, después de más de dos décadas de rígida teocracia que da más importancia a vigilar que las mujeres lleven puesto el *hiyab* (pañuelo que les cubre el cabello) que a desarrollar una estrategia para mejorar la economía. Esto ha conducido a arrebatar a los conservadores la mayoría en el Majlis (Parlamento) reemplazándola, por primera vez, por una mayoría reformista. Estas elecciones en la República Islámica de Irán han sido las primeras elecciones libres para el Majlis en los 21 años de historia del régimen teocrático y han registrado una participación electoral más alta que nunca. Las frustraciones del país por la crisis económica, las restricciones sociales, las limitaciones que afrontan los políticos que son elegidos democráticamente (como el presidente Jatamí) y el poder absoluto de los oficiales nombrados por instancias en las que el electorado no participa (como el líder espiritual) han sido expresadas en la primera vuelta con la elección de los candidatos reformistas, que obtuvieron 170 de los 290 escaños en liza el pasado 18 de febrero.

Victoria para los reformistas

No estaba muy claro que los reformistas fueran a tener tanto éxito en los comicios. De hecho, hasta el mismo día de las elecciones, la mayoría de los análisis

tas políticos hablaba más del candidato moderado y preferido por los conservadores, Ali Akbar Hashemi Rafsanyani, que de los reformistas. Pero Rafsanyani, presidente del Gobierno durante la Segunda República (1989-1997) y favorito para ser presidente del Majlis, apenas recibió el 25% del voto que se precisa para ser elegido y llegó al mínimo con dificultades en la primera vuelta de las elecciones.

En el otro campo, el candidato reformista más popular no pudo presentarse a las elecciones. Abdolá Nurí, ex ministro del Interior y editor del periódico *Jordad*, fue encarcelado y condenado a cinco años, el pasado mes de diciembre por publicar artículos que los conservadores consideraron anti-islámicos. Nurí era el candidato más popular del frente reformista y el preferido para ocupar el cargo de presidente del Majlis. En su ausencia, hubo discrepancias entre los aliados de Jatamí sobre quién debía ocupar su puesto pero, fue el hermano menor del presidente Jatamí el candidato elegido por el electorado: Mohamed Reza Jatamí obtuvo la mayoría de los votos, ocupando el número uno en la lista de elegidos por el distrito de la capital, Teherán. Los reformistas se encuentran en una situación complicada porque, aunque tienen el apoyo del electorado, no cuentan con la confianza de los conservadores, necesaria para realizar cambios en la política iraní.

El frente Jatamí ante el sistema religioso

En Irán, el hecho de tener la mayoría de los escaños en el Majlis y un presidente cosmopolita, liberal y reformista no significa que el denominado "frente Jatamí" pueda cambiar o desarrollar políticas con facilidad. El jefe del Gobierno sigue siendo Mohamed Jatamí, pero su impotencia para reformar algunos aspectos del sistema ha marcado su mandato y ha demostrado su falta de autoridad real.

El presidente Mohamed Jatamí no es jefe del Estado. La República Islámica de Irán tiene un sistema de gobierno basado en el concepto del *velayat i faqih*, que significa que un jurista islámico es líder del pueblo y del Gobierno. El *faqih* o líder espiritual, que tiene un mandato indefinido y cuyo poder es absoluto, no es elegido en elecciones populares sino nombrado por una Asamblea de Expertos. Aunque Jatamí es el número dos en la jerarquía constitucional, no sólo tiene que enfrentarse al líder espiritual, Ali Jamenei, sino también a la compleja estructura institucional inspirada por el fallecido ayatolá Jomeini: el Consejo de Guardianes, el Consejo de Defensa de la Razón de Estado (presidido por el ex presidente Rafsanyani), la Asamblea de Expertos, el Consejo de Seguridad Nacional y el Majlis.¹ Desde ahora podrá contar al menos con el apoyo de una cámara reformista. Sin embargo, incluso con tal apoyo, este poder es relativo dado que las demás ramas de la estructura del gobierno están controladas por los conservadores. Más aún, el líder espiritual y el Consejo de los Guardianes tienen poder de veto sobre todas las leyes desarrolladas por el Majlis.

¹ Fernando Delage, "Irán, el agotamiento de una revolución", en *El País*, 22 de junio de 1998

Reformas: dos pasos adelante, uno atrás

Durante los tres años de su mandato, Jatamí ha ido con cautela a la hora de introducir reformas. Desde su elección como presidente, en 1997, el camino de los reformistas ha constituido un proceso de “dos pasos adelante y uno atrás”. Jatamí no ha sido capaz de cambiar muchas cosas concretas. Ha tenido éxito al crear una sociedad menos estricta y con más libertades sociales (con una mayor apertura, por ejemplo, en el mundo del arte y la música) pero no ha podido desarrollar ninguna política institucional que fije y reglamente tales avances.

El sistema religioso ha impedido muchas de las reformas. Su control sobre el Majlis no dejó que se desarrollaran legislaciones reformistas, y por su autoridad obligó a dimitir a varios miembros de la administración Jatamí (como Abdolá Nurí, el ex ministro del Interior). La justicia, también controlada por los conservadores, ha llegado a detener y encarcelar a varios periodistas y clérigos liberales. Este control llega hasta los numerosos servicios de seguridad, como la policía moral y el Basij (ejército islámico), lo que permite vigilar y amenazar con intimidaciones a los críticos del sistema religioso y a aquellos que actúan de una forma que, según sus miembros, no es conforme al Islam.

Las reformas más urgentes se precisan en el ámbito de la economía, y el primer desafío será el petróleo. En general la industria está en malas condiciones. Los ingresos por el petróleo han bajado a casi un tercio del nivel que registraban antes de la Revolución y la industria no sólo no ha sido modernizada en casi dos décadas, sino que muchas de las refinerías han sido destruidas durante la guerra con Irak. Al principio de la Revolución, el régimen utilizó las riquezas del petróleo para modernizar las regiones más pobres del país (en un plan llamado Construcción Jihad) pero, cuando se produjo la invasión por parte de Irak en 1980, casi todas las reformas fueron canceladas al tiempo que los fondos se destinaban a la guerra, y al restablecimiento del ejército después de ésta.²

La población casi se ha duplicado desde 1979, pasando de 34 a 64,7 millones de habitantes, y los iraníes han sufrido mucho debido a la inflación después de la guerra con Irak. El dólar estadounidense, que cotizaba durante los años ochenta en torno a 70 riales, subió después de la guerra (en los años noventa) a más de 3.000 riales, lo que provocó el aumento de precios de casi todos los productos, mientras el promedio de los sueldos era —y sigue siendo— más bajo que antes de la Revolución. La inflación ha fluctuado en estos años entre el 40 y el 200% y la mayoría de los iraníes tiene más de un trabajo, incluso tres. La Oficina de Comercio de Irán admite que un 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, pero los diputados creen que el porcentaje está más cerca del 60%.³ La corrupción y la mala administración de los recursos son otros problemas que afronta Irán. La red de fundaciones, las instituciones paraestatales y los *bunyard* (poderosos monopolios creados con las riquezas confiscadas durante la Revolu-

*El sistema
religioso ha
impedido
muchas de las
reformas*

² Robin Wright, “Dateline Tehran: A Revolution Implodes”, *Foreign Policy*, Verano de 1996, N° 103, p. 161

³ John Mullin, “North/South Divide”, *Guardian Weekly*, 21 de febrero de 1993, p. 10.

ción y dirigidos por los clérigos conservadores), organizaciones que están fuera del control del Gobierno, controlan el 80% de la economía.⁴

El interrogante es si el presidente Jatamí, ahora reforzado por el Majlis y la opinión pública, podrá desarrollar una política dirigida a la sociedad civil, con una apertura de relaciones hacia Occidente y mayores libertades para el pueblo iraní. Los reformistas entienden bien la severidad de la crisis económica y se han dado cuenta del error de mantener una política exterior de aislamiento en la era de la globalización, y del daño que esta política ha hecho a su economía. Por eso han iniciado relaciones con varios países de Occidente: Jatamí hizo dos viajes oficiales a Francia e Italia en 1999, tiene un viaje previsto a Alemania este año y está mejorando sus relaciones con Gran Bretaña.

Cuando Jatamí comenzó su mandato pidió un “diálogo de civilizaciones” (en referencia a la teoría del “choque de civilizaciones” de Samuel Huntington) entre países occidentales e Irán, una especie de intercambio entre culturas.⁵ Esta petición ha sido reconocida por varios países de Occidente, incluido EE UU, y ha dado lugar al intercambio de varios programas intelectuales y culturales en materia de enseñanza, arte y deportes. El Gobierno estadounidense ha estado observando los pasos de Jatamí con interés y en marzo levantó las sanciones contra la importación de los tres principales productos que exporta Irán: alfombras, pistachos y caviar.⁶ EE UU sabe que Irán, un país rico en recursos petroleros y situado en el Golfo Pérsico —con el Mar Caspio y Rusia al norte y Afganistán y Pakistán al este— es un factor clave para la estabilidad de la región. Lo fue desde el final de la Segunda Guerra Mundial y por eso EE UU intervino de diversas formas. Los reformistas plantean ahora la posibilidad de reanudar relaciones con este país, pero insisten en que Washington tiene que dar el primer paso.

Sin embargo, la apertura de la política exterior iraní no sólo depende de la reacción de EE UU, sino también de los países europeos y Rusia, que podrían ofrecer a Irán lo que requiere en estos momentos de crisis. Un obstáculo permanente en la posible apertura de relaciones es su posición en contra del proceso de paz árabe-israelí: Irán, país conocido por subvencionar las guerrillas de Hezboláh en el sur de Líbano —que están luchando contra la ocupación militar israelí— tendría que cortar tales relaciones antes de hablar en serio con Occidente.⁷ El anuncio de Israel, realizado en marzo pasado, sobre su retirada incondicional de Líbano para el mes de julio de este año,⁸ facilitará el acercamiento con EE UU y, en el futuro, que Teherán y Tel Aviv mantengan una relación pragmática, como la que ya tiene Israel con Turquía.

⁴ Gema Martín Muñoz, “Islamismo y democracia – Ante las próximas elecciones”, *Política Exterior*, Nº 73, Enero/Febrero de 2000, p. 29

⁵ Fred Halliday, entrevista personal por Internet, mayo de 1999

⁶ Barbara Slavin, “U.S. to ease sanctions on Iran”, *USA Today*, 14 de marzo de 2000

⁷ Robert Fisk, “Iran’s new dawn might mark the end of US influence in the Gulf” *The Independent*, 22 de febrero de 2000

⁸ Aluf Benn, “It’s official: IDF ordered out of Lebanon by July”, *Ha’artz*, 6 de marzo de 2000

El poder de la pluma

Los reformistas conocen bien sus impedimentos para reformar el Estado y por ello han buscado otras vías, fuera del complejo sistema gubernamental, para expresar sus inquietudes, críticas y demandas. En este sentido, la prensa iraní está cumpliendo un papel muy importante, convirtiéndose en la voz de los oprimidos y haciendo por el pueblo iraní lo que no hacen los líderes religiosos. La población ha encontrado un medio en el que hablar sobre y para sí misma y, aprovechando este cauce, los reformistas han pedido un país más suyo, con más participación en el desarrollo de políticas y más peso en las decisiones oficiales del Estado.

Hoy en día, por cada periódico del frente conservador hay dos periódicos reformistas.⁹ Estos han llevado la lucha por la democratización del país a un nivel que asusta a los conservadores. Los periodistas y miembros del frente Jatamí utilizan los periódicos como una herramienta para democratizar el país y a través de ellos informan al pueblo iraní de todo, desde los malos tratos a los presos políticos encarcelados hasta sus visiones democráticas para reformar el Estado. Critican el poder absoluto de los oficiales que no han sido elegidos en elecciones populares, como el líder espiritual y los jueces islámicos. Piden, también, políticas internas menos rígidas y con menos restricciones sociales y una apertura en política exterior y en las relaciones con Occidente (para mejorar, entre otras cosas, la economía).

El sistema no ve a los periódicos reformistas con buenos ojos, y por eso la situación de la prensa frente a los líderes religiosos ha llegado a ser como un juego. Al principio los conservadores cerraban los periódicos que, a su juicio, publicaban artículos anti-islámicos, pero ellos seguían por otros caminos: cuando se cerraba un periódico, sus miembros obtenían otra licencia y abrían, de inmediato, otro con nombre diferente. Ante esta táctica se ha empezado a castigar no sólo al periódico sino también a sus editores, directores y periodistas, como en el caso más reciente y famoso de Abdolá Nurí.

El aumento del poder de la prensa se demuestra no sólo por las acciones de los estamentos conservadores, sino también por el fervor de los periodistas y los lectores. Miles de estudiantes universitarios, hartos del rígido régimen imperante, se manifestaron en julio de 1999 debido al cierre del periódico *Salam*, en unas protestas que fueron las más graves desde la Revolución Islámica de 1979. El reformista *Salam* había publicado una carta escrita por Said Emami (líder de un grupo de asesinos que mató a cuatro intelectuales) en la que hablaba de la necesidad de aumentar las restricciones a la prensa y daba a entender que se haría todo lo posible para acabar con la prensa libre.¹⁰ Las manifestaciones duraron cinco días y acabaron con la muerte de al menos cinco estudiantes y la detención de 1.500 —la mayor parte de los cuales sigue encarcelada—, además de dos condenados a la pena de muerte.

⁹ Ali Ansari, "Reform Dominates", *The World Today*, octubre de 1999, p. 22

¹⁰ Christopher Dickey, "The Reform Vote", *Newsweek*, 28 de febrero de 2000, p. 20

La reacción de Jatamí no fue la que esperaban los estudiantes. Para restablecer la calma en Teherán, tanto Jatamí como el líder espiritual denunciaron estas acciones, señalando que el método para reformar el Estado no es una revolución como la de 1979, sino utilizar las vías que existen dentro del sistema. Sin embargo, el problema es saber si la población tendrá la paciencia de esperar a que el frente Jatamí realice los cambios a través del Gobierno. Las manifestaciones del verano pasado llevan a la pregunta: ¿hasta qué punto esperará el pueblo iraní para que se pongan en marcha reformas concretas?

¿La Revolución de 1979 revive?

La situación política en Irán parece un regreso a la Revolución de 1979. En aquella época fueron los estudiantes quienes se manifestaron contra el rígido régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (tal y como ahora han salido a la calle contra el Gobierno represivo de la República Islámica). Hasta el año 1978, el Sha mantuvo un control absoluto sobre el país. Durante su dictadura no existía libertad de expresión ni de ideología política, la mayoría de la población vivía bajo condiciones de extrema pobreza, los ciudadanos no tenían ninguna clase de representación en el Gobierno y la política del Sha no sólo favorecía los valores de Occidente sino que rechazaba los principios del Islam. En general, su reinado estuvo marcado por la represión y la manipulación. La Revolución de 1979 fue un gran éxito para el ayatollah Ruhola Jomeini, ya que gracias a ella pudo establecer un sistema político según su visión de *velayat i fakih*, es decir, que sólo las personas versadas en las leyes islámicas tienen derecho a gobernar. Sin embargo, fue un fracaso para todos aquellos que con la Revolución querían establecer, un sistema de gobierno no sólo islámico, sino también en democrático. Más de veinte años después, de la revolución, hay más semejanzas que diferencias entre el laico régimen del Sha y el sistema islámico. En la situación actual de Irán tampoco hay libertades y la mayoría de los iraníes vive en condiciones de pobreza peores que las de la época del Sha (aunque ahora son los clérigos, en lugar de los militares, quienes forman la clase alta y privilegiada). Mientras el Sha imponía los valores y costumbres de Occidente, el régimen actual exige respeto absoluto a los valores y costumbres islámicos (tal y como son interpretados por los clérigos conservadores).

La Revolución Islámica se consideró un proceso de devolución de la soberanía del país a sus ciudadanos, pero lo que se llevó a cabo fue un cambio de un régimen totalitario a otro incluso más rígido. El régimen absoluto de Jomeini, que parecía ser tan fuerte durante los años ochenta, está mostrando sus debilidades (especialmente por su falta de legitimidad entre los ciudadanos). En un país donde más de la mitad de la población tiene menos de 25 años, donde el paro supera el 35% y el subempleo más del 75%,¹¹ gran parte de la población iraní está mostrando su frustración con el actual sistema de gobierno, especialmente con el control absoluto que ejerce el líder espiritual, Ali Jamenei, cuyo cargo no encaja con la idea de la democracia islámica. En su mayor parte, los iraníes piden el cumpli-

¹¹ Robin Wright, "Dateline Tehran: A Revolution Implodes" *Foreign Policy*, Verano de 1996, Nº 103

miento de todos los principios de la Revolución, pero no sólo con respecto al Islam sino con las promesas de justicia y reformas gubernamentales. Muchos de los partidarios del régimen de Jomeini están a estas alturas preguntándose qué le ha pasado a su Revolución.

La visión de Mohamed Jatamí y la mayoría de los reformistas no es de cambio absoluto sino de transformación. Jatamí es un clérigo que cree que el Islam y la democracia pueden coincidir y funcionar juntos, pero el obstáculo sigue siendo el papel de los conservadores y del líder espiritual. Irán es el único país islámico que parece tener en sus manos la posibilidad de desarrollar una democracia, pero la cuestión es si los conservadores dejarán que esto ocurra. El pueblo iraní ya ha mostrado que no le queda mucha paciencia y ahora Jatamí y el Majlis reformista tendrán que demostrar que intentan cumplir con su palabra. Los ciudadanos llevan más de 21 años esperando que la teocracia cumpla con las promesas de la Revolución y no estarán contentos hasta que lo consigan, sea a través de elecciones populares o quizá por medios similares a los de entonces, cuando el Sha tuvo que abandonar el país debido a la fuerte presión del pueblo.

RAMY WURGAFT

Las cuitas de Hafez Asad y el proceso de paz

Las negociaciones de paz entre Siria e Israel han experimentado continuos altibajos desde su inicio, algo que la mayoría de los expertos atribuye a la influencia del presidente sirio Hafez Asad. Éste se debate entre la necesidad de llegar a un acuerdo con sus vecinos sobre los Altos del Golán en un plazo razonable y las dificultades derivadas de la situación interna de su país, donde su principal prioridad es el mantenimiento del orden baazista y la supervivencia del régimen cuya cabeza ocupa desde hace tres décadas. El supuesto interés estratégico de la meseta en disputa, la cuestión de los refugiados palestinos y el control sirio sobre Líbano son factores importantes en la negociación, pero aún lo es más el dilema que afronta el presidente sirio entre mantener un férreo orden interno o ceder a las pretensiones democratizadoras de Occidente.

Ramy Wurgaft es periodista, corresponsal de *El Mundo* en Jerusalén

Bernard Lewis, una eminencia en investigación sobre Oriente Próximo, entró a dictar una charla en un aula de la Universidad de Tel Aviv. Los organizadores habían olvidado borrar la pizarra, donde aparecía el trabajo que un profesor había encargado a sus alumnos: "Enumere los factores que influyen sobre la postura de Siria hacia Israel". Sin pensarlo dos veces Lewis escribió: "No os rompáis la cabeza: el único factor que influye en ese y en cualquier otro asunto es la voluntad del presidente Hafez Asad".

No es arriesgado suponer que en esta materia la mayoría de los expertos opina de forma unánime, porque si las promociones en el ejército sirio, de alférez para arriba, están sometidas a la aprobación de Hafez Asad, a mayor razón lo son las tácticas que se esgrimen en la mesa de negociaciones. Conviene remitirnos a la descripción que hace el inglés Patrick Seale, biógrafo del presidente, del documento de posiciones que los sirios expusieron en la última rueda de negociaciones con Israel:¹ "los temores y los anhelos de Asad están fundidos no sólo en las cláusulas sino también en la gramática del documento..."

¹ Shepherstown, diciembre 1999.

El proceso de paz de Oriente Medio es un tentador oasis a la vez que un campo sembrado de trampas.

¿Quo vadis Hafez Asad? A ojos del neófito, su conducta no responde a la del hábil estadista, en quien el ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, descubriera “brotes de genialidad”. Desde que se celebró la Conferencia de Paz de Madrid en 1991, Asad se ha retirado y ha vuelto a la mesa de negociaciones ocho veces. Un día exalta el “coraje” del primer ministro israelí Ehud Barak, y al siguiente le tacha de cobarde. Un día los medios oficiales de prensa proclaman que la paz está al alcance de la mano, al siguiente auguran la inminencia de un apocalipsis bélico. Pero atención: bajo los zigzagueos subyace una política rectilínea, derivada de un prolijo orden de prioridades. En todo momento, el objetivo primordial de Asad es la preservación de su régimen, sustentado en el partido Baaz. La continuidad del orden baazista, construido a golpe de talento, de sangre y de intrigas, es la obsesión que le persigue desde que asumió al poder en 1971. Ni la recuperación de los Altos del Golán ni los dólares que Washington pudiera derramar sobre Damasco... nada en el mundo debe alterar ese principio.

Visto desde ese ángulo, el proceso de paz de Oriente Medio es un tentador oasis a la vez que un campo sembrado de trampas. En el terreno económico por ejemplo, no cabe duda que si Hafez Asad se aviniera a estrechar la mano del primer ministro israelí, EE UU y Europa le retribuirían con la inyección de divisas que tanto reclaman las depauperadas arcas de su país. Por otro lado, al abrir la puerta a las inversiones extranjeras es inevitable que se cuele un inventario de ideas desestabilizadoras para el régimen, como el respeto a los derechos humanos, el pluralismo o incluso la democratización de Internet, un ingenuo juguete que puede transformarse en otro agente corrosivo. ¿Cómo obtener la miel de la abeja occidental y evitar el aguijonazo de sus predicamentos sediciosos? He aquí el dilema de la diplomacia siria y el por qué de los bruscos barquinazos que tanto confunden a los observadores.

Las borrascas que últimamente sacuden a la nave baazista se desataron a comienzos de 1999 con la decisión de Hafez Asad de nombrar a su hijo Bashar como a su sucesor. Desde entonces, las escaramuzas entre los partidarios y rivales del flamante delfín se han vuelto el pan de cada día. El primer brote de violencia se produjo hace seis meses y según la revista *ICT Newsletter* (verano de 1999), retrasó en dos semanas la reapertura de las negociaciones con Israel. Otro recrudecimiento sobrevino a mediados de diciembre en coincidencia con la decisión siria de posponer la tercera ronda de negociaciones en la localidad de Shepherstown (EE UU). Y es que Hafez Asad no dispone ni de la salud ni de los hombres de confianza como para sofocar las revueltas y al mismo tiempo adelantar las negociaciones con Israel. De ahí que cuando la situación se pinta de negro, el canciller Faruk A Shara deba partir precipitadamente a Damasco para regresar también de forma intempestiva, una vez reinstaurada la calma. Todo para la perplejidad del observador.

La preservación del orden baazista subordina, pero no suprime, otros objetivos como la restitución de los Altos del Golán. No está de más preguntarse con qué fin se persigue la recuperación del Golán, pues, por extraño que parezca, la altiplanicie no aportaría grandes ventajas a Siria en el plano militar. El Golán constituía una formidable barrera en los tiempos en que los blindados eran el eje de la doctrina ofensiva del ejército israelí. Pero a partir de la guerra de Yom Kip-

pur, los helicópteros Apache desempeñan el papel de punta de lanza. Siria por su parte se ha empeñado en contrarrestar la supremacía israelí en el aire, mediante la edificación de un arsenal de misiles de tipo Scud, capaces de transportar gases tóxicos hasta cualquier ciudad israelí. Las lanzaderas están emplazadas en el norte de Siria y los generales jamás incurrirían en el error de trasladarlas al Golán, ya que ello precipitaría una crisis similar a la que estalló cuando la URSS emplazó los suyos en Cuba, en 1962. Descartada también la importancia que podrían representar los ríos estacionales que atraviesan la meseta —Siria se basta con las aguas del Éufrates— no queda más que el significado simbólico. Pero, inscribir al Golán en esa categoría en ningún caso disminuye su valor. De hecho, sin envolver otro significado que el de un símbolo, el casco histórico de Jerusalén constituye el epicentro del conflicto árabe-israelí. A tenor de esta reflexión, Hafez Asad jamás estamparía su firma sobre un acuerdo que no le restituyera el Golán. Al hacerlo, esculpiría en la roca la humillación que Israel infligió a su país en 1967, al conquistar el altiplano. Por último, existe un precedente que no se puede ignorar. En 1979 Israel cedió toda la península de Sinaí a Egipto, en el marco de un acuerdo de paz. Hafez Asad no se puede conformar con menos de lo que obtuvo el malogrado Anwar Saadat sin sellar su epitafio y el de su dinastía familiar.

Otro de los temas que aflora en las conversaciones es el de los refugiados palestinos. La hipótesis más difundida es que el interés de Hafez Asad por la suerte de aquellos, obedece a un conjunto de razones oscuras o egoístas. Pues bien, este convencionalismo ignora los vericuetos en la personalidad de Asad quien de un lado se siente elegido para redimir a sus hermanos árabes, y por el otro entiende que el panarabismo tal y como lo concibiera Gamal Abdel Naser, entró en coma después de la guerra de los Seis Días y murió en 1990 cuando un conglomerado de países árabes —entre ellos Siria— se unió a EE UU para atacar a Irak. En cuanto a la historia de las relaciones entre Hafez Asad y el liderazgo palestino, buena parte de sus páginas están escritas con sangre. En las postrimerías de la invasión israelí al Líbano (1982) el ejército expedicionario sirio estuvo a punto de acabar con las fuerzas de elite de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) apostadas en Trípoli. Asad quería hacerse con la cabeza de Yaser Arafat para ungir en su lugar a “su propio palestino”: George Habash, jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). No es de extrañar pues que Asad y Arafat se profesen un odio mortal y que el presidente sirio no mueva un dedo por la causa palestina mientras sea Yaser Arafat quien represente dicha causa. Lo más que se puede esperar es que su brazo derecho, el canciller Faruk A Shara, plantee reivindicaciones que el propio Arafat descartaría por ambiciosas. Por ejemplo, la exigencia de que Israel acoja dentro de sus actuales límites a todos los refugiados palestinos de la guerra del 48, un cometido para el cual sería necesario destruir el 60% de los *kibutz* y no pocas de las ciudades judías.

Otra pregunta que surge a menudo es si acaso al negociar separadamente Arafat y Asad no estarían jugando a las manos de Israel. Esta suposición es en gran medida correcta. Al país que se quede rezagado en el proceso de paz le tocaría negociar frente a un Israel que ya ve disuelto el cerco bélico a su alrededor y que por consiguiente, puede imponer con mayor facilidad sus intereses. Otra razón por la cual a Asad le urge llegar cuanto antes a la meta es su propio estado

de salud. No es un secreto que el *rais* padece de una leucemia de progreso lento pero constante a lo que se suman los rumores acerca de sus lapsos mentales. Los servicios de Inteligencia le han pronosticado entre unos pocos meses hasta dos años de vida. De cualquier manera el presidente no dispondría de mucho tiempo para dejar atados todos los cabos.

En las ruedas de prensa que se celebran dondequiera que se reúnan los negociadores, se repite siempre el mismo ritual: en cuanto surge la inefable pregunta sobre el Líbano los diplomáticos carraspean nerviosamente y cambian de tema. Sin duda que el futuro del pequeño país, sujeto a las veleidades de sus poderosos vecinos, se discute profusamente entre bastidores, a espaldas de los periodistas y de los propios gobernantes del Líbano. Valiéndose del rol de *sheriff* que le otorgan los acuerdos de Taif (1989), Siria ha conseguido establecer su predominio en la casi totalidad del país de los cedros. Un predominio que le permite paliar los devastadores efectos de una cesantía del orden del 25% y de un crecimiento económico casi nulo. Cerca de un millón de ciudadanos sirios trabajan en el vecino país, evitándose así que el paro llegue a convertirse en un elemento desestabilizador. En cada proyecto de envergadura —sobre todo en la restauración de Beirut— los promotores libaneses se ven obligados a asociarse con un contratista sirio (amigo del régimen). En el ámbito de la economía pirata, los mandos de la fuerza expedicionaria siria han amasado grandes fortunas gracias al tráfico del opio que se cultiva en el valle del Beka. Hafez Asad se mostraría menos obsesivo con relación al Golán si sus interlocutores israelíes aceptasen la completa subyugación del Líbano a Damasco. De hecho, el jefe del equipo negociador judío, Uri Saguí, insinuó en una entrevista al diario *Yediot Hajarot* que Israel y EE UU deberían aceptar *de jure* el predominio sirio sobre el Líbano. Pero la opinión que cuenta es la de Ehud Barak. Y el primer ministro se opone vehementemente a la creación de un “Frankenstein sirio” que pudiera destruir todo a su paso. A juicio de quien escribe estas líneas, en la negativa israelí a entregarle al León de Damasco la presa que tanto ansía, estriba el mayor escollo de las negociaciones.

Otro de los factores que ha perjudicado las negociaciones es la visceral animosidad que Hafez Asad le profesa a Israel y que se vio reflejada con toda intensidad en el editorial que publicó el diario oficial *Tishrein* el día 4 de febrero de 2000. En dicha columna, el periodista Hakim Baled caracterizaba a los israelíes como a “unos criminales peores que los nazis”. Valga decir que todo cuanto se publica en las páginas del *Tishrein*, desde los editoriales hasta los avisos publicitarios, pasa por la aprobación del *rais*.

Los tiempos de Clemente Metternich, cuando los diplomáticos se formaban en las mismas academias y frecuentaban los mismos salones, han quedado atrás. Pero incluso en una realidad descarnada como la de Oriente Medio los negociadores son capaces de entablar una plática ligera, intercambiar un chiste, proferir aquella observación ingeniosa que sirve para romper el hielo. El presidente egipcio Anwar Saadat llegó a compartir con su interlocutor, el primer ministro Menajem Beguin, una visión mesiánico-religiosa del papel de ambos como precursores de la paz. Entre el rey Husein e Isaac Rabin existían lazos de amistad mucho antes de que el proceso diplomático entrase en su etapa formal. Lo mismo ocurre

en el cauce palestino-israelí. Aunque parezca insólito, muchos de los ayudantes de Yaser Arafat que estuvieron recluidos en cárceles israelíes (durante la Intifada), terminaron siendo amigos de sus antiguos cancerberos. La amistad entre el actual jefe del servicio secreto palestino, Jibril Rayub y el que fuera su acérrimo enemigo, el jefe del Shin Bet israelí, Yaacov Pery, es un caso ilustrativo. En cambio los engranajes que mueven las negociaciones en el cauce sirio-israel carecen de ese tipo de lubricante. En Asad, *la Esfinge de Damasco*, el profesor Moshé Maoz define al protagonista de su libro como el último de los estadistas árabes (en el entorno inmediato a Israel) que aún alberga la esperanza de que el Estado judío constituya una realidad pasajera. Si Hafez Asad es capaz de rechinar los dientes para enviar a su canciller, Faruk A Shara, a las tertulias que organiza Bill Clinton con Ehud Barak, es porque sabe establecer una distinción entre sus fantasías y la realidad; entre la utopía de una Gran Siria extendida entre el Eúfrates y la Galilea y lo que se puede conseguir en un sistema cuasi-hegemónico en el que EE UU dicta las reglas del juego. Hafez Asad no quiere para sí el papel de paria que interpreta Sadam Husein, ni condenar a su gente a la hambruna como ha hecho el dictador iraquí. Por otro lado, tampoco acepta que el Fondo Monetario Internacional interfiera en la economía siria o que el Senado estadounidense envíe una de sus comisiones para controlar el trato que reciben los presos políticos en las cárceles de Damasco. Más que en zanjar sus pleitos con Israel, para Hafez Asad el proceso de paz consiste en superar el sentimiento de atracción-aversión que le inspira Occidente con su “modernismo” rampante. Entre esos dos polos se extiende la cuerda floja por la que una vez avanza, otra retrocede, Hafez Asad. Bajo sus pies, se abre el abismo.

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO

Abdullah II de Jordania: democratización limitada

Abdullah II ha pasado con éxito el test de su primer año de reinado. Durante estos doce meses el nuevo monarca ha consolidado su posición en el escenario político internacional y ha estrechado las relaciones con las principales potencias locales (en especial Israel, Siria y Arabia Saudí), superando los malentendidos e incomprensiones creados por el mantenimiento de relaciones con Irak tras la guerra del Golfo. No obstante, el pequeño reino de Jordania sigue debatiéndose en una doble disyuntiva, un año después de la muerte del rey Hussein: por un lado proseguir la traumática normalización de relaciones con Israel y, por otro, acentuar las reformas democratizadoras introducidas a finales de la década de los ochenta.

Jordania en la era de Abdullah II

El 17 de enero de 2000, casi un año después de ser coronado, Abdullah II protagonizó una asombrosa noticia que fue recogida en detalle por la mayor parte de los medios de comunicación europeos. Aprovechando la complicidad de la noche, el monarca abandonó su palacio disfrazado y visitó los hospitales públicos para conocer las condiciones de vida de sus súbditos y sus problemas más acuciantes. Este relato bien podría ser uno de los cuentos *milyunanochescos* recopilados por Pelland, aunque el anodino Ammán de Abdullah II poco tiene que ver con la bulliosa corte de Bagdad del califa Harun al-Rachid.

La designación de Abdullah II como rey de Jordania sorprendió a propios y extraños, al igual que el cese fulminante de su tío Hassan Ben Talal, decidido pocos días antes de la muerte de Hussein, el 7 de febrero de 1999. El nuevo monarca contaba entonces con 36 años de edad y su esmerada educación, en las prestigiosas universidades de Oxford y Georgetown, le convertía en una promesa para una región gobernada por vetustos dirigentes (el sirio Hafez al-Asad, el egip-

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante e investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. También es autor del libro *El proceso de paz de Oriente Medio. Historia de un desencuentro*

cio Hosni Mubarak o el palestino Yaser Arafat). Además, su formación militar —general del ejército al frente de una unidad de elite— y su matrimonio con Rania —hija de una acaudalada familia palestina natural de Tulkarm— le convertían en el candidato ideal de las Fuerzas Armadas y de la población de origen palestino.

En líneas generales la agenda de Abdullah II, coronado oficialmente el 9 de junio (fecha de profunda significación en la que se conmemora el aniversario de la Gran Revolución árabe contra los turcos de 1914), no se diferencia excesivamente de la de sus predecesores: mantenimiento de la monarquía, preservación de la estabilidad interna, desarrollo económico, modernización del reino e implicación en la resolución de la cuestión palestina.¹ No obstante, sus retos inmediatos parecen ser otros bien distintos: la continuación del proceso de democratización iniciado en 1989 y la normalización definitiva con Israel, con quien se firmó el tratado de paz de Wadi `Araba en 1994.

La herencia de Hussein

En sus primeros meses de reinado, Abdullah II adoptó varias medidas encaminadas a asentar su autoridad y a depurar de la vida política a los elementos fieles al príncipe Hassan. El 4 de marzo de 1999 designó como primer ministro y como jefe de la Casa Real a dos personajes antagónicos —Abd al-Rauf Rawabda y Abd al-Karim Kabariti, respectivamente— en un intento de mantener el equilibrio entre dos de las principales figuras políticas del reino y, al mismo tiempo, evitar que un excesivo protagonismo de estos restase importancia al papel que debía jugar el rey en esta fase de transición.

El conflicto entre Rawabda y Kabariti está motivado por sus diferentes percepciones sobre el futuro del reino, las alianzas regionales, el proceso de normalización con Israel y, en especial, el calado de las reformas democratizadoras. El penúltimo acto de esta “opereta” repleta de intrigas palaciegas se escenificó en enero de este año, cuando Kabariti presentó su dimisión, probablemente con la esperanza de ser llamado para ocupar el puesto de su rival en un futuro cercano.

Las causas de la compleja situación que actualmente atraviesa la monarquía jordana han de buscarse en las transformaciones registradas hace una década. En 1989 el Fondo Monetario Internacional condicionó la concesión de nuevas ayudas a la aplicación de un riguroso plan de choque basado en el incremento de los precios de la electricidad, el teléfono, el tabaco y el petróleo. La adopción de estas controvertidas medidas desencadenó choques violentos en la ciudad de Ma`an, considerada el feudo natural de los hachemíes.

En este contexto se introdujeron reformas encaminadas a garantizar el pluralismo político en las elecciones de noviembre de ese año, circunstancia por la cual fueron consideradas “los primeros comicios libres” en la historia del reino. Como consecuencia de este clima de aperturismo, fueron legalizados los partidos políticos proscritos desde 1957 (como los comunistas y baazistas) y se permitió la crea-

¹ Emile Sahliyah, “Jordan and the Palestinians” en *The Middle East Ten Years After Camp David*, William Quandt (ed.), The Brookings Institution, Washington, 1988, pp. 279-280

ción del Frente de Acción Islámica, brazo político de los Hermanos Musulmanes (HHMM), que obtuvo una abrumadora victoria en las urnas al conseguir 35 de los 80 escaños en liza.

Los HHMM abandonaban así la sombra en la que habían desarrollado sus actividades desde mediados de siglo, cuando la monarquía decidió utilizarles para asentar su frágil autoridad y frenar el avance del movimiento panarabista. Durante todos esos años fueron percibidos como una oposición leal,² por lo que se les permitió instaurar una compleja red de servicios sociales, médicos y educativos. Además, en aquellos momentos, “la restricción de las libertades provocó la despolitización de los ciudadanos y les condujo hacia la mezquita, en tanto lugar inviolable de militancia y libre expresión”.³

El nuevo primer ministro Mudar Badran planteó un ambicioso programa basado en el levantamiento de las leyes marciales vigentes en el país desde 1967, la liberación de presos políticos, la clausura de las cortes militares y la derogación de la ley anticomunista. Aunque la Carta Nacional, aprobada por el Parlamento en junio de 1991, sancionó parte de estos proyectos, la Corona hizo frente común con la Cámara para torpedear el grueso de las reformas. Finalmente, su sucesor, el conservador Zaid Ben Shakir, obtuvo los apoyos necesarios para derogar la ley marcial y aprobar la Ley de Partidos Políticos en 1992.

La designación de Abd al-Salam al-Mayali como presidente del Gobierno, en mayo de 1993, interrumpió el proceso aperturista. Con la intención de reducir el peso parlamentario de los islamistas y de limitar la influencia de los palestinos (que representan cerca de un 60% de la población jordana) remozó la Ley Electoral. Esta reforma provocó una inmediata reacción de la oposición: tanto los islamistas como los izquierdistas anunciaron el boicot de las elecciones de noviembre de 1993.

No satisfecho con estas reformas, el primer ministro auspició una controvertida Ley de Prensa que impedía la publicación de informaciones que incitasen a la sedición o difamasen a la familia real, al Gobierno o a los jefes de Estado de países amigos. En la práctica, la nueva legislación permitía censurar toda información relativa a la corrupción y toda crítica a Israel. Los infractores de esta ley podrían ser puestos a disposición judicial, hacer frente a cuantiosas multas e, incluso, afrontar penas de prisión.

La Declaración de Washington (de 25 de julio de 1994) y el Acuerdo de Wadi Araba (del 26 de octubre) confirmaron la alianza tácita⁴ existente entre la Jordania de la monarquía hachemí y el Israel laborista, y transformaron la paz *de facto* imperante hasta el momento en una paz *de iure*. Como consecuencia del tratado

² Laurie A. Brand, “The Effects of the Peace Process on Political Liberalization in Jordan”, *Journal of Palestine Studies*, n° 2, invierno 1999, p. 52

³ Jean Christophe Augé, Riccardo Bocco y Louis-Jean Duclos, “Les élections du 4 novembre 1997 en Jordanie. Contexte et prétextes d’une normalisation politique”, *Monde Arabe. Maghreb-Machrek*, n° 160, abril-junio 1998, p. 31

⁴ Avi Shlaim, *Collusion Across the Jordan. King Abdullah, the Zionist Movement and the Partition of Palestine*, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 1

de paz, los dos países trazaron sus fronteras internacionales, establecieron plenas relaciones diplomáticas y aprobaron la libre circulación de mercancías.

No obstante, el acercamiento registrado entre Ammán y Jerusalén fue descrito como una alianza *contra natura* por un segmento significativo de la población, que consideraba poco conveniente establecer relaciones de buena vecindad con un país que todavía ocupaba Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza y aplicaba con cuentagotas los acuerdos firmados con la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Los islamistas, junto a los izquierdistas, encabezaron el bloque opositor a la normalización jordano-israelí.

La normalización entre Ammán y Jerusalén fue encomendada a Abd al-Karim Kabariti, pero la rampante crisis económica, la privatización de varias empresas públicas, la degradación de la calidad de vida, el aumento de los arrestos arbitrarios, la vulneración de la libertad de expresión y la sangrante corrupción despertaron un malestar popular generalizado. La retirada de los subsidios del pan y los piensos, en agosto de 1996, fue el detonante de nuevos disturbios en la ciudad de Kerak, que hicieron recordar a los violentos choques de 1989.

Para reconducir esta complicada situación, el rey Hussein anunció la disolución del Parlamento en marzo de 1997 y recuperó como primer ministro al denostado Abd al-Salam al-Mayali. En el curso de la “revolución blanca” emprendida por Mayali se registró un progresivo deterioro de las libertades políticas. Aprovechando el vacío de poder existente, el Gobierno aprobó por trámite de urgencia una enmienda temporal a la Ley de Prensa que fijaba elevadas multas para los infractores de la legislación (hasta 35.000 dólares) y que posibilitaba la clausura de aquellos que difundiesen información sensible para el Estado. Además se impusieron fianzas para la publicación de diarios (840.000 dólares) y semanarios (420.000 dólares) con el objeto de dificultar la creación de nuevos tabloides.⁵ Cuarenta días antes de la celebración de las elecciones, el Ministerio de Información ordenó el cierre de 13 semanarios.⁶

La aplicación de la nueva ley llevó a numerosos periodistas ante los tribunales. Las condenas más significativas recayeron sobre Ali Snaid —un escritor que pasó 18 meses en la cárcel por publicar un artículo considerado ofensivo a la dignidad del rey— y Leiz Shubeilat, presidente del Colegio de Ingenieros, encarcelado en varias ocasiones por su oposición a la paz con Israel y por sus críticas a la ruptura con Irak.

En este clima de intimidación se celebraron las elecciones de noviembre de 1997. El islamista FAI y la Alianza izquierdista condicionaron su participación en los comicios a la derogación de la Ley de Prensa, al respeto de los derechos humanos y la interrupción del proceso de normalización con Israel. Mientras tanto, la población de origen palestino se mantuvo al margen de la lucha interna por la distribución del poder, hecho que confirmó la división social entre una mayoría

⁵ Joel Campagna, “Jordania: severas restricciones”, *Nación Árabe*, nº 36, otoño 1998, p. 100

⁶ En enero de 1998 el Tribunal Supremo ordenó la inmediata reapertura de todos los semanarios cerrados al considerar que las enmiendas temporales eran inconstitucionales, por haberse aprobado cuando el Parlamento estaba fuera de sesión

palestina preponderante desde el punto de vista económico, pero dominada políticamente por la minoría beduina.⁷

Los mayores beneficiarios del boicot fueron las formaciones tradicionales. Los notables movilizaron a las tribus beduinas para obtener su apoyo, a cambio de su labor de mediación ante la autoridad central, y su victoria fue descrita como un triunfo del tribalismo y del localismo. El nuevo Gobierno mostró su intención de proseguir con la política precedente e incidió en tres aspectos: liberalización económica, normalización con Israel y control de la prensa.

Un futuro incierto: ¿normalización o democratización?

La gestión de Abdullah II está condicionada en buena medida por este turbulento contexto. La normalización con Israel y la democratización interna —sus dos principales prioridades— continúan siendo asignaturas pendientes que no han registrado avances significativos en esta etapa. Al contrario, han sufrido un retroceso considerable como consecuencia de la congelación de las negociaciones palestino-israelíes, tras la firma del Acuerdo de Sharm al-Sheij, y del desmantelamiento de la infraestructura que el partido islamista Hamas tenía en territorio jordano.

En lo que atañe a las relaciones con Israel, en este último año se han producido varios acontecimientos de suma importancia para el futuro de la región, entre ellos la derrota electoral del conservador Benjamin Netanyahu, la elección del laborista Ehud Barak, la firma del Acuerdo de Sharm al-Sheij y, por último, la reanudación de las negociaciones de paz sirio-israelíes.

La victoria de Ehud Barak en las elecciones de mayo de 1999 debería consolidar los vínculos tradicionales entre la monarquía hachemí y el laborismo israelí. No obstante, en este punto se debe ser sumamente cauto debido a las anteriores experiencias: los Acuerdos de Wadi `Araba auguraban un esperanzador futuro económico para la región tras la creación de un mercado común mediorienta, pero la realidad ha sido desalentadora. Desde 1994 el nivel de vida de los jordanos ha experimentado un retroceso de un 13%. Por si este dato no fuera lo bastante significativo, la ruptura con Irak —impuesta por Israel y EE UU— ha privado a Jordania de su principal mercado de exportación de productos y de su mayor proveedor de petróleo.

El Acuerdo de Sharm al-Sheij (firmado el 4 de septiembre) significó un impulso al proceso de paz palestino-israelí, prácticamente interrumpido desde la llegada de Netanyahu al Gobierno. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, el Gobierno laborista se refugió en la máxima *rabiniana* “no hay fechas sagradas” para justificar nuevas demoras en la retirada de un 11% de Cisjordania.

Por otra parte, un eventual tratado de paz entre israelíes, sirios y palestinos consagraría la actual división de Oriente Medio en dos grandes zonas: Jordania y Palestina quedarían en la esfera de influencia de Israel, mientras que Líbano se mantendría dentro de la órbita de Siria como un protectorado *de facto*.

En lo que respecta a la democratización, se han dado ciertos pasos encaminados a replantear la relación entre la monarquía y los HHMM, la principal fuerza

⁷ Augé, Bocco, Duclos, *ibidem*, p. 42.

*El Frente de
Acción
Islámica se
alzó con la
mayoría
absoluta en
43 de los 304
Consejos
Municipales*

opositora. El primer test político del nuevo soberano fue seguido con especial atención, al interpretarse que podría marcar las pautas a seguir en el futuro. En las elecciones municipales celebradas en julio de 1999, el monarca aprobó la participación de los islamistas que, en ocasiones anteriores, habían boicoteado los comicios. Unos meses antes había ordenado la liberación de 15 destacados dirigentes de los HHMM y había permitido que algunos imames opositores volvieran a dirigir sus sermones desde las mezquitas, suspendiendo una medida utilizada habitualmente para castigar a los críticos.

Los comicios pusieron de manifiesto que los islamistas contaban con el apoyo de una parte significativa del electorado y que, por lo tanto, debían formar parte de las estructuras de gobierno y no ser marginados del juego democrático que, hasta el momento, han respetado de manera ejemplar. El Frente de Acción Islámica se alzó con la mayoría absoluta en 43 de los 304 Consejos Municipales, y conquistó las alcaldías de varias ciudades importantes (Zarqa, Irbid y Rusaifa). Sin embargo, una vez más los verdaderos triunfadores de las elecciones fueron los notables tradicionales y los jeques tribales.

A pesar de este tímido acercamiento, un acontecimiento enturbió las relaciones entre la Monarquía y la Hermandad. El 30 de agosto, las fuerzas de seguridad clausuraron las oficinas del partido islamista palestino Hamas y detuvieron a 15 de sus dirigentes, a los que se acusó de pertenecer a una organización ilegal que violaba las leyes jordanas. Esta decisión contó con el respaldo de la Autoridad Nacional Palestina, Israel y EE UU (todos ellos deseosos de privar a Hamas de su principal base de operaciones y alejar a sus líderes de los territorios palestinos) y con la oposición de la opinión pública jordana y de los principales partidos políticos y sindicatos. Las detenciones rompieron unilateralmente el pacto vigente desde 1993, cuando el rey Hussein permitió a la cúpula de Hamas instalarse en territorio jordano, siempre que se abstuviese de reivindicar las acciones terroristas cometidas en Israel.

Tres de sus máximos dirigentes (Jalid Mishal, jefe del máximo órgano político de Hamas, su portavoz oficial Ibrahim Gawshe y Musa Abu Marzuq) fueron detenidos nada más retornar de Irán en septiembre. Mientras Abu Marzuq fue expulsado a Siria al tener pasaporte yemení, los otros dos dirigentes fueron encarcelados, ya que son ciudadanos jordanos y su deportación a un tercer país hubiera significado una violación de la Constitución, que indica que "ningún jordano puede ser deportado del territorio del Reino".

La crisis se cerró el 21 de noviembre con la deportación a Qatar de Jalid Mishal, Ibrahim Gawshe, Izzat Rishq y Sami Jater —todos ellos de nacionalidad jordana y origen palestino— y la puesta en libertad del resto de los detenidos. La versión oficial difundida en Jordania confirmaba la existencia de un acuerdo que había permitido abandonar el país a algunos de los detenidos para evitar su enjuiciamiento.

No por casualidad esta campaña de detenciones coincidió con dos importantes acontecimientos: el inicio de las negociaciones palestino-israelíes sobre el estatuto final de los territorios autónomos y la visita de Abdullah II a Washington para solicitar ayuda financiera, con la que paliar la aguda crisis económica del Reino. Mediante estas deportaciones se enviaba un mensaje claro a los diferentes

actores políticos del escenario jordano. En primer lugar a Hamas y a las organizaciones palestinas, a las que se advertía de los riesgos de utilizar el territorio jordano como base de operaciones. En segundo a la oposición islamista, la prensa independiente y las organizaciones profesionales, que podrían correr la misma suerte de los dirigentes de Hamas en caso de que insistiesen en su campaña contra la normalización con Israel.⁸ Y en tercero y último, a la población jordana de origen palestino, a la que se planteaba la disyuntiva de elegir entre su identidad nacional palestina o sus derechos políticos como ciudadanos jordanos.⁹

Una última reflexión sobre Jordania debería tener en cuenta la situación que atraviesa su entorno regional. Con la coronación de Abdullah II se ha iniciado un proceso de recambio generacional que pronto afectará a Siria, Egipto y la ANP, donde ya se produce una abierta lucha por el poder entre los posibles sucesores. Estas transformaciones modificarán sin duda la actual fisonomía política de Oriente Medio, basada parcialmente en filias y fobias personales. Esta ventaja temporal sobre sus vecinos debería permitir al monarca hachemí resolver sus dos principales asignaturas pendientes: en primer lugar proseguir el proceso de democratización, evitando la tentación de emplear medidas autoritarias y anticonstitucionales contra aquellos que difieren de sus enfoques y, en segundo, culminar la normalización con Israel para impedir que Jordania siga los pasos de Egipto, que convirtió su tratado de paz en una “paz fría” que todavía perdura.

⁸ Coincidiendo con esta campaña de detenciones se registró un grave retroceso en lo que respecta a la libertad de expresión: el 23 de agosto fue detenido Abd al-Karim al-Barguzi, director de la revista *al-Bilad*, quien pasó encarcelado 14 días por publicar una noticia sobre un caso de acoso sexual protagonizado por el hijo primogénito del primer ministro Rawabda. El 28 de septiembre le llegó el turno a Azzam Yunis, editor de *al-Arab al-Yawm*, detenido por permitir la publicación de un artículo que criticaba la persecución de Hamas

⁹ Lamis Andoni, “Amman’s New Political Thinking”, *Middle East International*, 26 de noviembre de 1999, p. 5

JOSÉ L. GÓMEZ DEL PRADO

Enseñanzas de Timor Oriental

El autor analiza los paralelismos entre los procesos de ocupación en Timor Oriental (por parte de Indonesia) y Sáhara Occidental (por Marruecos), y la actuación de la comunidad internacional en los dos casos estableciendo la celebración de un referéndum —que en el caso del Sáhara todavía no se ha celebrado. Las dudas, temores e intereses estratégicos han condicionado la débil y tardía respuesta internacional ante las matanzas que se cometieron en Timor, sobre todo después del referéndum del 30 de agosto. Esto no debiera ocurrir en el Sáhara, donde se deben poner todos los medios para garantizar la seguridad de la población y el respeto a los resultados de la consulta.

La tragedia de Timor Oriental, ocurrida poco después del drama de Kosovo y a sólo cinco años del genocidio de Ruanda, forma parte de una serie de crisis humanitarias causantes de más víctimas civiles que en ningún otro siglo de la historia de la humanidad. El conflicto en Chechenia, que está ocurriendo al escribir este artículo, tiene el triste honor de cerrar el siglo XX dejando tras de sí, al igual que las otras crisis, un rastro inconmensurable de sufrimiento.

Una vez más se plantea a la comunidad internacional la necesidad de intervenir en los asuntos internos de un Estado, lo antes posible y sobre todo antes de que sea demasiado tarde, cuando las autoridades de un país son incapaces, carecen de voluntad o están implicadas en violaciones contra la población civil que tienen el deber de proteger. En la crisis de Timor Oriental, la comunidad internacional apareció, en las propias palabras del Secretario General de la ONU, como responsable de hacer demasiado poco y demasiado tarde.¹

En la crisis de Ruanda, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había decidido de común acuerdo no actuar. En la crisis de Kosovo, ante la falta de acuerdo entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la OTAN decidió intervenir sin la autorización del Consejo de Seguridad en nombre del derecho de injerencia humanitaria y, por supuesto, sin la invitación del presidente yugoslavo Milosevic. Dicha intervención ha creado no sólo un precedente importante contra el

José L. Gómez del Prado es miembro del Grupo Asesor del Fondo de Naciones Unidas para el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y ex funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

¹Kofi Annan, "Two concepts of sovereignty", en *The Economist*, 18 de septiembre de 1999.

principio de soberanía, sino que ha vuelto a actualizar la doctrina de una soberanía “desigual”: “intocable” para unos pocos Estados, “limitada” para la mayoría.

En el caso de Timor Oriental, el Consejo de Seguridad, responsable directamente de la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET), no previó la violencia y las violaciones que todo observador perspicaz podía ver venir. Pero lo que es más grave, no intervino hasta haber logrado, el 15 de septiembre de 1999, la invitación de las autoridades indonesias aceptando una fuerza multinacional, a pesar de las graves y sistemáticas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se estaban cometiendo. Estos acontecimientos, así como los saqueos y disturbios acaecidos recientemente en El Aaiún, han mermado la confianza de los refugiados saharauis en la capacidad de Naciones Unidas para garantizar su seguridad durante el período de transición electoral.²

La ONU y los Territorios No Autónomos

Timor Oriental, al igual que el Sáhara Occidental, forman parte de los Territorios no Autónomos³ que el Comité Especial y la Cuarta Comisión de Política Especial y Descolonización de Naciones Unidas tienen como mandato llevar a la independencia, de conformidad con el principio de libre determinación como derecho de los pueblos y su aplicación para acabar con todas las situaciones coloniales, enunciados en la resolución de la Asamblea General 1514 (XV). Existen tres formulas en el proceso de descolonización a las que pueden optar los pueblos no autónomos: la independencia, la asociación o la integración.

Los dos territorios fueron conquistados y anexados por potencias coloniales. Timor Oriental por Portugal a partir del siglo XVI hasta 1974, el Sáhara Occidental por España desde 1884 hasta 1975. Los procesos democráticos y cambios políticos importantes que tuvieron lugar en los años setenta en Portugal (la revolución de los claveles) y en España (la muerte de Franco) permitieron la ocupación extranjera de Timor Oriental por Indonesia, y del Sáhara Occidental por Marruecos. La respuesta de los dos pueblos a esas ocupaciones necesitó de una oposición armada: Frente Revolucionario de Timor Leste Independiente (Fretilin), Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario).

Ya en 1964, la Asamblea General de la ONU había aprobado una resolución en favor de la autodeterminación del pueblo saharauí. Desde 1966 hasta 1973, durante la época del protectorado, España hizo oídos sordos a las resoluciones de la Asamblea General que recomendaban el establecimiento de una misión de Naciones Unidas para la participación activa en la organización y el proceso del referéndum para la autodeterminación del pueblo saharauí.

² Naciones Unidas, Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, documento S/1999/1098.

³ Los restantes territorios no autónomos en la actualidad son : Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, las Islas Caimán, las Islas Malvinas (Falkland) las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Monserat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.

Tras la invasión indonesia, el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció sobre la ocupación de Timor Oriental exhortando al Gobierno indonesio a que retirara todas sus fuerzas del territorio inmediatamente (resoluciones 384/1975 y 389/1976).

Respecto a las reivindicaciones sobre estos territorios por parte de los países ocupantes, la Corte Internacional de Justicia ha indicado el derecho inalienable del pueblo saharauí y timorense a la autodeterminación: Opinión de la C.I.J. de 16 de octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental (ni Marruecos ni Mauritania pueden reivindicar su soberanía); argumentación de la C.I.J. en su sentencia de 30 de junio de 1995 sobre el caso presentado por Portugal contra la legalidad del tratado Australia-Indonesia que permite explotar la plataforma continental de Timor Oriental.

La Asamblea General de Naciones Unidas asignaría al Secretario General responsabilidades específicas en relación con Timor Oriental y el Sáhara Occidental con el fin de ayudar y facilitar el proceso de descolonización, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Para ello, a través de los “buenos oficios” del Secretario General se entró en un proceso de negociación para resolver de manera pacífica las respectivas controversias.

En 1988, Marruecos y el Frente Polisario dieron su aceptación para que se organizase un referéndum sobre la libre determinación del pueblo saharauí. El Consejo aprobó el informe del Secretario General presentando un plan de acuerdo entre las partes (resolución 658/1990) y el establecimiento de una Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) (resolución 690/1991) que se encuentra desplegada en el territorio desde 1992. La consulta sobre el futuro del territorio que debería tener lugar en julio del 2000, se ha visto aplazada una vez más debido a la avalancha de recursos formulados contra el censo provisional.⁴

El proceso del Sáhara Occidental difiere del de Timor Oriental en varios aspectos. La anexión de ese territorio por el Gobierno indonesio, que en agosto de 1976 pasó a formar parte de Indonesia constituyendo la vigésimoséptima provincia del país,⁵ fue reconocida por los países de la región. Por Australia oficialmente, pero también *de facto* por los países de la Asociación de Naciones del Asia Suroriental (ASEAN). Además del apoyo y reconocimiento del Sáhara Occidental por Argelia, Mauritania renunció, en 1979, a la tercera parte del territorio concedido por el Tratado de Madrid, negociado un mes después de la “marcha verde” del 16 de octubre de 1975, y reconoció el derecho de libre determinación del pueblo saharauí. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada en 1976, fue admitida en 1984 como miembro de la Organización de la Unidad Africana, y Marruecos salió de la organización. Más de setenta Gobiernos han reconoci-

⁴ Nota del editor: En febrero pasado el Secretario General de la ONU aplazó de hecho la celebración del referéndum en el Sahara de forma indefinida.

⁵ La explotación del petróleo fue el móvil principal, con los intereses norteamericanos como telón de fondo, que movió a Indonesia a ocupar Timor Oriental. G.J. Aditjondro “Is oil thicker than blood?”, Nova Science Publishers, 1999.

do a la RASD. La OUA, pero sobre todo Argelia y Mauritania han participado como observadores en las negociaciones que permitieron llegar a los acuerdos entre Marruecos y el Frente Polisario para la celebración del referéndum.

Por otra parte, el Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental y los acuerdos concertados entre Marruecos y el Frente Polisario⁶ contienen una serie de garantías que no existían en los acuerdos entre Indonesia y Portugal del 5 de mayo de 1999. Dichos acuerdos establecían que "...el Gobierno de Indonesia será responsable del mantenimiento de la paz y del orden en Timor Oriental..."

Desde que se desplegó la MINURSO, en 1992, se encuentran en el territorio unos 200 observadores militares de Naciones Unidas que vigilan el cese del fuego entre el ejército marroquí y las fuerzas del Frente Polisario. La labor de los 80 observadores de la policía civil de la ONU, que trabajan en el territorio, consiste en asegurar, controlar y mantener el orden en el proceso de identificación de las personas que podrán votar. Según lo previsto, cuando empiece el proceso electoral estarán presentes 1.695 observadores militares y unos 300 observadores de la policía civil. Unos cuatro meses antes, Marruecos tendrá que reducir sus tropas hasta un máximo de 65.000 hombres que, al igual que las tropas del Frente Polisario, estarán estacionados en determinados lugares, que los observadores militares de MINURSO se encargarán de controlar. Asimismo, se prevé el retorno de los refugiados saharauis que se encuentran en Tiduf y se tendrá que proclamar una amnistía general y un intercambio de prisioneros de guerra.

La Misión de la ONU y la crisis en Timor Oriental

En 1982 la Asamblea General, tras escuchar a los representantes de Indonesia, Portugal, Fretilin, peticionarios y organizaciones no gubernamentales, decidió pedir al Secretario General que iniciase consultas con todas las partes interesadas con miras a lograr un acuerdo global sobre el problema. Durante el Gobierno de Suharto las negociaciones habían quedado paralizadas. Los cambios políticos y económicos ocurridos en Indonesia en 1998 llevaron a la dimisión de Suharto y a un proceso electoral. El 27 de enero de 1999, tras la declaración de la Unión Europea indicando que una solución al problema de Timor Oriental no sería posible sin la consulta libre que permitiese conocer la voluntad del pueblo, el nuevo presidente, Habibie, dio un giro trascendental, al declarar que si los habitantes de Timor Oriental no aceptaban la autonomía especial que se les ofrecía, el Gobierno se vería en la obligación de pedir a la nueva Asamblea, que debía ser electa en junio de 1999, que anulara la decisión de 1976 por la que se integraba Timor Oriental a Indonesia.

Al parecer, al tomar esta decisión el presidente Habibie sólo consultó a algunos de sus más íntimos colaboradores. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Ali Alatas, estuvo al corriente sólo poco antes de que se anunciase oficialmente la decisión del presidente y lo mismo ocurrió con el hombre fuerte del régimen, el general Wiranto, ministro de Defensa. De ahí las dificultades que planteó

⁶Naciones Unidas, documentos S/21360, S/22464, S/1997/742 y anexos I al III.

Indonesia en las negociaciones que se llevaron a cabo en Naciones Unidas para organizar el referéndum. Sin embargo, hay que hacer hincapié en el hecho de que, si bien Indonesia cedió sobre la consulta popular, se mostró completamente intransigente sobre la aceptación de una presencia militar internacional y la retirada de sus fuerzas armadas de Timor Oriental. Esta preponderancia permitió que el ejército de Indonesia —en lugar de Naciones Unidas como hubiera tenido que ser— controlara la evolución de la situación durante todo el proceso electoral, es decir: antes, durante y después del referéndum.

Hasta el 5 de mayo de 1999 no se podrían concluir entre Portugal, Indonesia y Naciones Unidas unos acuerdos por los que se solicitaría que el Secretario General organizase una consulta popular del pueblo de Timor Oriental para ejercer su derecho de libre determinación y decidir si aceptaba o rechazaba la autonomía especial propuesta por Indonesia. En base a dichos acuerdos, el Consejo de Seguridad estableció el 11 de junio de 1999 la Misión de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET) para la organización de la consulta.

La autonomía especial, elaborada por la Secretaría de Naciones Unidas, sobre la que el pueblo de Timor Oriental se tenía que pronunciar, dejaba al Gobierno central de Indonesia las competencias de la defensa nacional, de la moneda y la política fiscal, de los aranceles e impuestos así como de las relaciones exteriores. Parece ser que los dirigentes independentistas timorenses estaban de acuerdo en aceptar dicha autonomía como una fase de transición.⁷

Como era de esperar, el Gobierno indonesio no cumplió con las obligaciones suscritas en los acuerdos. La inseguridad en Timor Oriental era tal unas semanas después de que se instalase UNAMET que las elecciones, previstas para el 8 de agosto de 1999, tuvieron que ser aplazadas al 30 de agosto. El Secretario General y su equipo reiteraron al Gobierno indonesio sus responsabilidades, continuaron gestionando la creación de una fuerza multinacional, mantuvieron informado al Consejo de Seguridad de la situación y de los riesgos que se corrían y le propusieron el envío de una misión de alto nivel a Indonesia. El Consejo de Seguridad rechazó la propuesta.⁸

Después de 24 años de ocupación indonesia, el 30 de agosto, un 98,6% de las personas inscritas en el censo electoral de Timor Oriental acudió a las urnas, a pesar de un clima de intimidación y de constantes violaciones poco propicio a la realización de una consulta libre. Los resultados del referéndum popular, anunciados el 3 de septiembre de 1999 por el Secretario General, indicaron que un 78,5% de la población rechazaba la autonomía especial y estaba a favor de la independencia.

De la población actual de Timor Oriental (unos 800.000 habitantes), se calcula que más de 3.000 personas fueron asesinadas entre el período de instalación de la Misión de Naciones Unidas en junio de 1999 para preparar el referéndum hasta la celebración del escrutinio, el 30 de agosto.

⁷ Jean-Pierre Catry, "Double jeu au Timor-Oriental", en *Le Monde Diplomatique*, junio 1999.

⁸ Afsané Bassir Pour, "Le combat solitaire de Kofi Annan", en *Le Monde*, 1 de noviembre de 1999.

El Gobierno indonesio no cumplió con las obligaciones suscritas en los acuerdos

A partir del momento en que se anunciaron los resultados de la votación, el 3 de septiembre de 1999, las milicias y los partidarios pro indonesios, dentro de un plan de "tierra arrasada" y bajo la dirección de las fuerzas militares indonesias, desataron una campaña de terror y de destrucción total en contra de los habitantes pro independentistas. Se atacaron los edificios de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se quemaron viviendas y edificios públicos, se desplazó forzosamente a otras partes de Indonesia a unas 500.000 personas de Timor Oriental y se ejecutó sumaria y selectivamente a intelectuales, estudiantes activistas y líderes de la población pro independentista.⁹ Hasta el 15 de septiembre, la acción de Naciones Unidas fue tan débil que no pudo impedir la violencia desatada en la isla. En esa fecha, el Consejo de Seguridad adoptó, bajo el Capítulo VII de la Carta, la resolución 1264/1999 por la que se creaba una fuerza militar internacional y se autorizaba el uso de la fuerza para restablecer el orden en Timor Oriental.

En los veinticuatro años anteriores de ocupación, desde que Indonesia invadió Timor Oriental en diciembre de 1975 hasta la llegada de la Misión de Naciones Unidas en 1999, unas 200.000 personas (una tercera parte de la población) habían sido víctimas de la represión indonesia; en algunas ocasiones, como en la matanza en el cementerio de Santa Cruz, en 1991, ante la presencia del Relator Especial sobre la tortura de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La Misión de Naciones Unidas en Timor Oriental, compuesta principalmente de civiles y sólo 271 policías, estaba incapacitada para proteger a la población y tuvo que ser evacuada al cabo de unos días. Se calcula que unos 30.000 militares indonesios estaban estacionados en el territorio, sin contar varios miles de personas armadas y entrenadas por el ejército que formaban parte de las milicias anti independentistas. INTERFET, la fuerza militar multinacional, al mando de Australia, llegó a Timor Oriental el 20 de septiembre. El 25 de octubre, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 1272/1999 por la que se establecía la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET) inicialmente hasta el 31 de enero de 2001. Las tropas de UNTAET, compuestas de 9.000 militares, reemplazarán la fuerza militar multinacional INTERFET.

Se ha responsabilizado a Naciones Unidas por haber confiado en las autoridades indonesias y no haber tomado las precauciones que hubiesen podido evitar las graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Pero hablar en general de Naciones Unidas es tan vago como hablar del concepto de comunidad internacional y extender la responsabilidad a toda la organización. ¿Cómo reaccionaron los principales órganos de Naciones Unidas y qué parte de responsabilidad recae sobre cada uno de ellos? La Asamblea General con sus respectivos órganos subsidiarios, responsable del proceso de descolonización, no jugó un papel decisivo en la crisis de Timor Oriental. Por ello se analiza el papel del Consejo de Seguridad, de la Secretaría y de la Comisión de Derechos Humanos.

⁹ Naciones Unidas, Informe del Secretario General sobre la situación en Timor Oriental, documento S/1999/1024.

El Consejo de Seguridad

Uno se puede plantear por qué el Consejo de Seguridad se desautorizaba a sí mismo al no tener en cuenta sus decisiones anteriores (resoluciones 384/1975 y 389/1976) y aceptaba los acuerdos del 5 de mayo, mediante la aprobación de la resolución que establecía UNAMET, sin pedir que las tropas indonesias se retirasen del territorio. Al parecer los miembros del Consejo prefirieron felicitarse por la decisión de las autoridades indonesias en lugar de inquietarse y considerar los posibles peligros que tal decisión acarrearía.¹⁰

Hay dos posibles explicaciones: China y Rusia, dos Estados miembros permanentes del Consejo, ardientes defensores del principio de soberanía y en contra de toda injerencia en los asuntos internos, pudieron ver con malos ojos una presencia de cascos azules de Naciones Unidas sin el aval del país ocupante. Esta hipótesis podría parecer plausible, a pesar de que no se trataba de un asunto de soberanía pues el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia estaban de acuerdo respecto a la ocupación ilegal del territorio por Indonesia. En efecto, días más tarde, una vez lograda la autorización del Gobierno indonesio, ni China ni Rusia opusieron su veto al despliegue de la fuerza militar multinacional.

Sin embargo, es más plausible la falta de voluntad política de los otros tres miembros permanentes del Consejo que no presionaron en ningún momento a Indonesia para que evacuase sus tropas. En especial de EE UU, que oficiosamente había avalado la invasión de Indonesia en 1975, facilitando desde entonces más de 1.000 millones de dólares en armamento y entrenado en la contrainsurrección a los batallones de elite del ejército indonesio (Kopassus)¹¹ implicados en la represión en Timor Oriental. Asimismo del Reino Unido, que había facilitado ayuda y entrenamiento militar y de Francia, que cooperaba estrechamente desde hace tiempo con el Gobierno indonesio.

Como bien indica Noam Chomsky,¹² el Gobierno indonesio se ha beneficiado del apoyo de EE UU y de los otros Gobiernos occidentales desde la toma del poder por Suharto en 1965. Si en el momento de la invasión de Timor Oriental, las instrucciones de Washington llevaron a la inoperancia del Consejo de Seguridad, no sería de extrañar que durante la presente crisis este mismo país hubiera bloqueado cualquier acción que pudiera tomar el Consejo. Alimenta esta hipótesis el hecho de que, desde marzo de 1999, sus miembros estaban al corriente de las intenciones y los preparativos que se llevaban a cabo en Timor Oriental. Según diversas fuentes, los servicios de inteligencia australianos habían comunicado que el ejército indonesio “protegía claramente y en algunos casos operaba con las milicias” las cuales tenían la firme intención de poner en marcha una política de “tierra arrasada” si los resultados del referéndum favorecían a los pro independentistas.

¹⁰*Le Monde*, ídem.

¹¹Noam Chomsky, “Timor-Oriental, l’horreur et l’amnésie”, en *Le Monde Diplomatique*, octubre de 1999.

¹²Noam Chomsky, “L’Indonésie, un atout maître du jeu américain”, en *Le Monde Diplomatique*, junio de 1998.

Documentos obtenidos por la resistencia y transmitidos a Naciones Unidas confirmaban los planes indonesios.¹³

El 4 de septiembre, el Consejo de Seguridad rechazó la propuesta del primer ministro portugués que estimaba que la presencia de una fuerza militar internacional se hacía indispensable, así como la sugerencia del Secretario General Adjunto, Prendergast, de enviar una misión de alto nivel a Indonesia. Reunido de urgencia al día siguiente, a petición del Secretario General, de nuevo rechazó la idea de enviar una misión. Kofi Annan informó de que Australia se comprometía a dirigir una fuerza multinacional a condición de que Indonesia lo aceptase. Washington, que se quejaba de no tener “un perro de guardia” en la crisis de Timor Oriental,¹⁴ lo había encontrado en Australia que deseaba jugar un papel de potencia regional frente a China y Japón en Asia y el Pacífico, pero que asimismo podía estar calculando que, al estar sus costas a tan sólo 400 km de distancia, podría transformarse en el primer país de asilo de una marea de posibles refugiados, a menos que la situación en Timor Oriental se estabilizara rápidamente.

El Consejo de Seguridad continuaba sin reaccionar a pesar de los ataques que perpetraban las milicias indonesias, en especial el del 6 de septiembre a la residencia de Monseñor C. Belo, Obispo de Dili y premio Nobel de la Paz, y el realizado contra la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se habían refugiado miles de civiles. Tan sólo el 7 de septiembre, el Consejo de Seguridad aceptó la idea de enviar una misión a Indonesia. La misión debía estar compuesta por representantes diplomáticos de Eslovenia, Malasia, Namibia, Países Bajos y Reino Unido. El 8 de septiembre, el Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que se le acordasen 24 horas más a Indonesia.

Ese mismo día, y a pesar del discurso de Bill Clinton en el que hacía mención de violaciones graves de derechos humanos, la posición de EE UU se hizo cristalina. En plena crisis y matanzas en Timor Oriental, responsables de la Administración declararon públicamente que “Con el fin de preservar sus relaciones con el vasto archipiélago, Estados Unidos continúan resistiendo amenazas directas de sanciones económicas o militares en contra de Indonesia (...) La Administración ha calculado que EE UU debe colocar sus relaciones con Indonesia, un país rico en minerales con más de 200 millones de habitantes, por encima de la preocupación por el porvenir político de Timor Oriental, un pequeño y empobrecido territorio de 800.000 habitantes a la búsqueda de su independencia”.¹⁵

Eso a pesar de la obligación que tiene la comunidad internacional, en general, y el Consejo de Seguridad en particular, en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, de actuar para prevenir que se cometa tal crimen sobre todo cuando se tenía ya el precedente del exterminio de la tercera parte de la población de Timor Oriental.¹⁶

¹³Información recopilada por el London Observer Service, 13 de septiembre de 1999, citado por Nizkor International Human Rights Team.

¹⁴*Australian Financial Review*, Sidney, 13 de septiembre de 1999, citado por N. Chomsky *ibid*.

¹⁵*New York Times*, 9 de septiembre de 1999.

¹⁶Monique Chemillier-Gendreau, “Les ressources méconnues du droit international”, en *Le Monde Diplomatique*, octubre de 1999.

La misión del Consejo de Seguridad se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, con representantes diplomáticos en Yakarta y con la candidata Megawati. El 9 de septiembre, la misión supo directamente por Xanana Gusmao que lo que estaba ocurriendo en Timor Oriental era una campaña planificada para exterminar a su población. El presidente y el ministro de Defensa indonesios continuaban rechazando la idea de una fuerza militar internacional. Mientras se reunía en Nueva York el Consejo de Seguridad, la misión, acompañada por el general Wiranto, comprobaba en Dili el nivel de destrucción el 11 de septiembre. Al parecer, fue en aquel momento cuando el general Wiranto, persuadido de que ya no se podía seguir negando la situación reinante en Timor Oriental, pues los medios de comunicación, incluidos CNN y la BBC, habían difundido la imágenes por todo el mundo, tomó la decisión de aceptar la fuerza militar internacional y se lo hizo conocer al presidente quien lo anunció públicamente al día siguiente, antes de recibir a la misión de vuelta de Dili. El 15 de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1264/1999 por la que se autorizaba la intervención en Timor Oriental de una fuerza multinacional liderada por Australia.

La Secretaría

Este órgano comprende al Secretario General y a todos los funcionarios, incluyendo los responsables de los distintos departamentos de Naciones Unidas que están bajo su autoridad. Se ha criticado al Secretario General que los acuerdos no tuvieron en cuenta las resoluciones del Consejo de Seguridad 384 y 389, respectivamente de 1975 y 1976, en las que se exhortaba a Indonesia a retirar todas sus fuerzas de ocupación. Los acuerdos de 1999 no sólo se inhibían y no pedían la retirada inmediata de las tropas indonesias, en virtud de decisiones anteriores, sino que además confiaban a dichas fuerzas la seguridad durante todo el proceso electoral.

Ante estas críticas, el Secretario General, Kofi Annan, se defiende y saca a relucir públicamente, en un artículo publicado en *Le Monde*,¹⁷ las gestiones confidenciales que llevó a cabo con el fin de garantizar el referéndum. Por una parte, se refiere a sus comunicaciones, rechazadas por el Gobierno indonesio, en las que señalaba las responsabilidades de Indonesia y proponía las condiciones indispensables para que la ONU pudiera organizar el referéndum: control de los grupos armados; detención e inculpación inmediata de toda persona que incitara a la violencia; retirada del territorio un mes antes de la votación de las fuerzas indonesias; desarme de todas las milicias anti independentistas antes del proceso electoral.

Por otra parte, el Secretario General menciona sus negociaciones paralelas con varios gobiernos dispuestos a mandar tropas al territorio en el caso de que "fueran mal las cosas", así como la manifestación de sus inquietudes al Consejo de Seguridad. Si el Secretario General no logró, a pesar de la buena disposición de Australia, que una fuerza multinacional bajo los auspicios de Naciones Unidas pudiera ser desplegada antes del referéndum fue porque ningún país aceptaba

¹⁷Afsané Bassir Pour, "Le combat solitaire de Kofi Annan", en *Le Monde*, 1 de noviembre de 1999.

*Kofi Annan
en una
reunión con
la prensa
volvió a
insistir sobre
la necesidad
de enviar una
fuerza
multinacional*

mandar a sus tropas sin el consentimiento del Gobierno indonesio. Según el Secretario General, las autoridades indonesias habían indicado claramente que romperían las negociaciones en el caso de que se insistiera sobre la cuestión de una presencia internacional en Timor Oriental. La otra alternativa, según Kofi Annan, era arriesgarse a enfrentar una resistencia armada por parte de las fuerzas anti independentistas, riesgo que los dirigentes de Timor Oriental le pedían que asumiese.

Un día después del anuncio de los resultados, Kofi Annan convocó a la prensa en Nueva York y declaró que una presencia militar internacional se hacía necesaria. Asimismo, envió a su Representante Especial, M. Marker, a Yakarta para que protestara enérgicamente ante el presidente Habibie contra la violencia desencadenada y la apatía de las fuerzas de seguridad y para que se exigiese que las fuerzas indonesias detuvieran a las milicias. El presidente indonesio rechazó la demanda del Secretario General de desplegar una fuerza militar multinacional. En ese momento ningún país aceptaba el envío de una fuerza militar sin el consentimiento de Indonesia. El 5 de septiembre, el Secretario General transmitió sus inquietudes al presidente indonesio, el cual le anunciaba su intención de proclamar la ley marcial en Timor Oriental. El Secretario General le respondió que si al cabo de 48 horas no se establecía el orden público sería necesario desplegar una fuerza militar multinacional para ayudar a Indonesia.

Sin embargo el día 6, el Secretario General volvió a aceptar un aplazamiento de 24 horas más para que la ley marcial permitiese restablecer el orden. El 8 de septiembre, el Secretario General hizo saber al presidente Habibie que la ley marcial era ineficaz y que había decidido evacuar al personal de Naciones Unidas en Timor Oriental. El presidente le pidió otras 24 horas suplementarias. El Secretario General, en su informe al Consejo, propuso el despliegue inmediato de la fuerza militar internacional. Ante la oposición de las autoridades indonesias, sus miembros se negaron a tomar tal decisión. Kofi Annan en una reunión con la prensa volvió a insistir sobre la necesidad de enviar una fuerza multinacional. El Secretario General, a pesar de la peligrosa situación del personal de Naciones Unidas en Timor Oriental, estaba todavía indeciso ante la perspectiva de abandonar a la población a la que había estimulado a votar. El 10 de septiembre, Kofi Annan pidió con urgencia a las autoridades indonesias que aceptasen una presencia internacional militar, advirtiéndoles que un rechazo equivalía a hacerse responsables de "crímenes de guerra". El 11 de septiembre, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad que Indonesia no había cumplido con sus responsabilidades, a pesar de la introducción de la ley marcial, insistiendo sobre la necesidad de desplegar una fuerza internacional e informando que Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Malasia estarían dispuestas a participar en dicha fuerza.¹⁸

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos

En una declaración pública del 3 de septiembre, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, antes de que se conocieran los resultados del escrutinio,

¹⁸United Nations, Press Release SG/SM/7127, SC/6725, SG/SM/7124, *Le Monde* ídem.

insistía en la necesidad de desplegar una fuerza internacional o regional de seguridad en Timor Oriental para proteger a la población. El 6 de septiembre, Mary Robinson exhortó a las autoridades indonesias a que acabasen con la política de terror que estaban llevando a cabo en Timor Oriental. Un día más tarde, pidió que se convocase con urgencia una sesión extraordinaria de la Comisión para tratar la situación en Timor Oriental. Del 10 al 13 de septiembre, la Alta Comisionada visitó la región. En Darwin, Mary Robinson recogió información directa del personal de UNAMET sobre la situación en Timor Oriental. El 13 de septiembre, se entrevistó con el presidente Habibie a quien propuso la creación de una comisión internacional de investigación para recoger y analizar la información sobre los crímenes cometidos en Timor Oriental. Asimismo se se reunió con Xanana Gusmao.¹⁹

El Departamento de Asuntos Políticos

Por lo menos en tres ocasiones el Secretario General Adjunto responsable del Departamento de Asuntos Políticos, K. Prendergast, recomendó al Consejo de Seguridad que enviase una misión de alto nivel a Indonesia para evaluar *in situ* la situación en Timor Oriental. El 5 de septiembre informó al Consejo de Seguridad que la situación en Timor Oriental respondía a una estrategia montada por el ejército indonesio y que el Consejo debía actuar en consecuencia.

El Consejo Económico y Social. El 9 de septiembre, Portugal inició el procedimiento especial para convocar una reunión de urgencia de la **Comisión de Derechos Humanos**. Ésta se reunió del 23 al 27 de septiembre de 1999, en Ginebra, en período de sesiones extraordinario para examinar la situación en Timor Oriental en base al informe publicado por la Alta Comisionada tras su visita a la región. Indonesia, pero también otros países, principalmente del grupo asiático como Japón, trataron de bloquear la sesión, alegando cuestiones de procedimiento y que el Consejo de Seguridad ya estaba estudiando el asunto, para que no se prosiguiera con el examen de la situación. Se trataba de adoptar un proyecto de resolución por el que se pedía al Secretario General que estableciese una comisión internacional de investigación, para indagar los crímenes cometidos en Timor Oriental a partir de la puesta en marcha del proceso electoral en enero de 1999, y someterle las conclusiones que le permitiesen hacer las recomendaciones oportunas par una acción futura. Asimismo, se informaría al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y a la propia Comisión. Durante los trabajos de la Comisión, en los pasillos del Palais des Nations en Ginebra se oía frecuentemente evocar a los delegados la posibilidad de un golpe de Estado por el ejército indonesio si se aprobaba la resolución o el peligro de la *balcanización* de Indonesia.

Si bien la Comisión adoptó el texto en general de la resolución con una amplia mayoría, el párrafo clave de la misma, que trata del establecimiento de una comisión de investigación, fue objeto de una votación nominal separada. Se aprobó únicamente por 27 votos a favor, 12 en contra (Bangladesh, Bután, China, Cuba, India, Indonesia, Japón, Nepal, Filipinas, Rusia, Sri Lanka y Sudán) y 11 absten-

¹⁹UN High Commissioner for Human Rights, Press Releases of 3, 6, 7 and 14 September 1999

ciones (Argentina, Chile, Congo, Madagascar, México, Marruecos, Pakistán, Qatar, República de Corea, Senegal y Túnez). La votación puso de manifiesto las divisiones de la comunidad internacional frente al planteamiento de la tragedia de Timor Oriental, de la impunidad y de la necesidad de investigar los hechos ocurridos que permitan llevar ante los tribunales a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El hecho que la iniciativa se tomase en la Comisión de Derechos Humanos y no en el Consejo de Seguridad indicaba que, por muy fuertes que fueran las conclusiones y recomendaciones de la comisión de investigación, era muy improbable que se estableciera un tribunal penal internacional *ad hoc* para Timor Oriental como ha sido el caso para la ex Yugoslavia y Ruanda.

Conclusión

El ejemplo de Timor Oriental muestra que largos años de sometimiento no son suficientemente fuertes para apagar el deseo de un pueblo de adueñarse de su propio destino. La tragedia de Timor Oriental, un problema de descolonización, se convirtió en una crisis humanitaria permanente desde que el territorio fuera ocupado por Indonesia en 1975. La comunidad internacional no actuó por razones de estrategia y de geopolítica. Aunque los países occidentales y demás países de la región no habían reconocido *de jure* (excepto Australia) la anexión del territorio por Indonesia, sí lo habían hecho *de facto*. Los estadounidenses hablaban de asunto interno de Indonesia, olvidando que ese país no tenía soberanía alguna sobre Timor Oriental (como le ocurre a Marruecos con el Sáhara Occidental). Timor Oriental había desaparecido en los atlas del *National Geographic* posteriores a 1976.

Es indudable que, en el caso de Timor Oriental, la Secretaría (Secretario General y sus colaboradores) ha sido el órgano de Naciones Unidas que más esfuerzos ha desplegado por encontrar una solución a la crisis. Después de la inacción de la Organización en Kosovo, culminada por una serie de desafortunadas actuaciones, la credibilidad de la ONU en general, y la del Secretario General en particular, estaban en tela de juicio. La Secretaría fue el único órgano que previó y tomó en serio las informaciones que indicaban que el proceso electoral podía tener graves consecuencias. Los contactos y los preparativos del Secretario General para mandar una fuerza multinacional hicieron posible que ésta pudiese desplegarse rápidamente una vez el Consejo de Seguridad diera su visto bueno. Se le podría reprochar al Secretario General el haber respaldado unos acuerdos que no presentaban garantías para la población. Sin embargo, los líderes timorenses aceptaban correr ese riesgo. Y más responsabilidad podría recaer sobre Portugal, antigua potencia administradora, que fue firmante de los acuerdos.

Se han de buscar las responsabilidades más bien del lado del Consejo de Seguridad, verdadero órgano de decisión, y dentro de éste entre los miembros que tenían la capacidad de presionar al Gobierno indonesio para garantizar el referéndum y que podían haber actuado con más urgencia. Resulta ilustrativo que el 8 de septiembre, en plena crisis humanitaria, un portavoz de la Administración estadounidense declarase que no era irrazonable conceder al general Wiranto por

lo menos 24 horas suplementarias y que “Estados Unidos no tenía ningún plan establecido para castigar al Gobierno de Yakarta aunque la violencia continuase”.²⁰

El hecho que tuviera que ser la Comisión de Derechos Humanos y no el Consejo de Seguridad quien tomase la iniciativa de pedir al Secretario General que estableciese una comisión para investigar las infracciones al derecho internacional humanitario y las violaciones cometidas en Timor Oriental, es una muestra más del escaso compromiso de los miembros permanentes del Consejo para actuar. En efecto, en el caso de la ex Yugoslavia y de Ruanda, fue el Consejo de Seguridad el que tomó la iniciativa en la creación de las respectivas comisiones de investigación, a raíz de cuyas recomendaciones se establecerían los tribunales penales internacionales *ad hoc* para cada uno de los dos países. Se debe admitir, bien es cierto, que las probabilidades de que el Consejo tomase esa iniciativa eran muy limitadas, tal como demuestra el voto negativo en la Comisión de Derechos Humanos de China y Rusia (susceptibles por Tibet y Chechenia respectivamente).

Se ha comparado la situación del Sáhara Occidental con la de Timor Oriental. Marruecos intenta guardar el territorio del Sáhara Occidental y negociar que el pueblo saharauí acepte una autonomía y no se independice, al igual que Indonesia lo hiciera con Timor Oriental. Con el fin de cambiar el resultado del referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de Naciones Unidas, previsto desde 1992 y confirmado por los acuerdos de Houston de 1997, se ha trasladado a miles de marroquíes al territorio. No hay que olvidar, sin embargo, que el Frente Polisario ha contado con el apoyo de los países limítrofes y el de la OUA, y ha podido instalarse y operar desde el sur de Argelia. El Fretilin y los timorenses, bloqueados en una isla, no pudieron contar con nada similar.

Desafortunadamente, los acuerdos firmados para el referéndum de Timor Oriental no contenían un mínimo de garantías e Indonesia ni siquiera se dignó contestar a las sugerencias del Secretario General en materia de seguridad. Los acuerdos para el referéndum del Sáhara Occidental sí contienen esas disposiciones. Además del cumplimiento de sus compromisos por las dos partes y por Argelia y Mauritania, es imprescindible, antes, durante y después de las elecciones, que se cumplan todas las disposiciones estipuladas en los acuerdos: acantonamiento de las tropas; despliegue de observadores militares y de policía civil; amnistía; intercambio de prisioneros de guerra; retorno de los refugiados. En todas las fases del proceso electoral la seguridad debe encontrarse en manos de la ONU para poder hacer frente a cualquier eventualidad. El Consejo de Seguridad, en base a la información que se le suministra regularmente, tendrá que adoptar con urgencia las medidas que se impongan y actuar con una celeridad que le faltó en la crisis de Timor Oriental.

España, responsable en su momento de no haber llevado a buen término el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, tiene la responsabilidad de utilizar toda su influencia en la ONU, así como sus “buenos oficios” y sus buenas relaciones para mediar con las autoridades marroquíes, con el fin de asegurar todas las garantías necesarias que permitan al pueblo saharauí ejercer su derecho

²⁰New York Times, 9 de septiembre de 1999.

de libre determinación y decidir su propio destino. La opinión pública debe estar continuamente movilizada para, si es necesario, presionar ante sus propios Gobiernos y las instancias internacionales.

Post Scriptum:

En abril de 2000 el proceso de reconstrucción en Timor Oriental sigue en curso. No se ha declarado formalmente la independencia, tampoco han vuelto todos los refugiados de Timor Occidental y se prevé que las fuerzas internacionales deberán permanecer por un largo tiempo. Uno de los mayores problemas es la reintegración social o rechazo hacia los timorenses que participaron en las matanzas proindonesias. Entre tanto, la situación en Indonesia es de alta inestabilidad.

Nota del editor.

Derechos Humanos

Niños soldados: Fuera de tiempo, fuera de lugar

119

ÁNGELA SOBRINO LÓPEZ

Niños soldados: Fuera de tiempo, fuera de lugar

El CIP/Centro de Investigación para la Paz lleva trabajando en un proyecto de educación y sensibilización sobre la participación de la infancia en los conflictos armados desde 1997. Está adscrito a la “Coalición internacional para acabar con la utilización de niños soldados”, cuyo principal objetivo es elevar a 18 años la edad mínima para el reclutamiento y participación en conflictos bélicos y conseguir una mayor protección de los derechos de los menores.*

Ángela Sobrino es coordinadora del proyecto “Ni un solo niño en la guerra”, en el Centro de Investigación para la Paz.

Dos pequeños de 12 años líderes del Ejército de Dios

Recientemente aparecieron en los televisores de todo el mundo unas imágenes estremecedoras. Dos hermanos gemelos de tan sólo 12 años, arma en puño, fumando y vistiendo ropas militares. En este caso y según los testimonios de los propios niños, luchaban para acabar con la opresión que el ejército tailandés está ejerciendo sobre su pueblo Karen.

Los dos gemelos tienen poderes especiales, así lo afirman su padre y su tío. El resto de los componentes del Ejército de Dios —que son una pequeña parte de la etnia Karen—, lo creen también. Debido a los poderes místicos que les atribuyen, cuando los hermanos dirigen un ataque, siempre lo hacen bajo inspiración divina; por tanto, sus poderes especiales les protegen y ningún miembro de este ejército puede ser herido.

Los niños gozan del respeto y admiración de su pueblo, pero esto no justifica que niños de 12 años dirijan ataques o tomen decisiones militares, en vez de disfrutar de su infancia. No sería de extrañar que la próxima noticia que tengamos al respecto sea la de su captura y muerte.

* Cuando se utilice la palabra **niño**, se hace referencia tanto a niños como a niñas

Panorama general de los niños en los conflictos armados

Más de 300.000 niños y niñas menores de 18 años participan actualmente en alrededor de 30 conflictos armados que se están librando en 50 países de todo el mundo. En 27 casos se ha detectado el empleo de menores de 15 años, llegando en ocasiones a haber reclutas de 7 y 8 años.¹ El reclutamiento lo llevan a cabo tanto los ejércitos regulares (fuerzas armadas gubernamentales), como los irregulares (paramilitares, guerrilla, grupos denominados de autodefensa).

Las actividades que tienen que realizar son muchas y muy duras y pueden ir desde cargar armas y municiones, hasta a actuar de avanzadilla de los grupos de ataque para detectar las minas de los campos, evitando así que puedan mutilar o matar a un soldado “más útil”.

Las prácticas llevadas a cabo por los grupos beligerantes son cada vez más inhumanas. Se utilizan métodos crueles para hacer sufrir al adversario física y mentalmente. A diferencia de lo que ocurría antes, las tácticas de guerra actuales van dirigidas contra la población civil, especialmente contra mujeres y menores. No se respetan las zonas de paz, como hospitales o colegios, sino que, por el contrario, estos lugares se convierten en blanco favorito de los soldados. En la última década estos conflictos han causado la muerte de dos millones de niños y han dejado a seis millones gravemente heridos o discapacitados.²

Una estrategia muy común en las guerras modernas es la utilización de minas. Resultan baratas, fáciles de adquirir y colocar y nunca fallan; muchas tienen forma de mariposas de colores, para llamar la atención de los pequeños. La población civil, principalmente los niños, está expuesta al peligro de unos 100 millones de minas, que han quedado enterradas en más de 68 países. Se calcula que las minas matan o mutilan a unas 26.000 personas al año y que unos 800 niños y niñas mueren o quedan mutilados cada mes.³

Las guerras se libran en los denominados países frágiles, donde la capacidad de gobernar y regular se ha perdido. Los sistemas educativos, sanitarios y de producción por lo general no funcionan, los mecanismos de control no existen, los derechos humanos son violados casi sistemáticamente y suele reinar un caos total. En este contexto los grupos armados actúan libremente. En plena luz del día aparecen con camiones en colegios, orfanatos, centros de refugiados y barrios marginales y secuestran a tantos niños y niñas como pueden. A partir de ese momento los menores comienzan a sufrir los peores abusos, maltratos y vejaciones que un ser humano pueda soportar.

Para conseguir su obediencia, las técnicas utilizadas por los mandos consisten en torturarles, obligarles a torturar y/o matar, a veces a sus compañeros, en ocasiones a miembros de su comunidad y de su propia familia. Tanto los niños

¹ *Boletín sobre niños soldados*, “Niños de la Guerra”, Rádda Barnen, nº 3/98, octubre 1998

² Fuente: página web de Human Rights Watch, febrero 1999

³ *Informe de Naciones Unidas*, “Los niños y los conflictos armados”, Consejo de Seguridad, 3896ª sesión, junio 1998

como las niñas sufren violaciones, y en el caso de las niñas, son utilizadas como compañeras sexuales de los combatientes.

Secuelas que padecen

- **Físicas:** malformaciones (por el continuado transporte de armas y otras cargas pesadas), deformaciones y dolores de espalda, pérdida de la visión, de la audición, mutilación de alguno de sus miembros (por minas antipersona, en un enfrentamiento o como castigo). Sufren drogodependencias, se les suministra alcohol, cocaína, pólvora en la comida (para mantenerles alerta) y cualquier otra sustancia que les pueda volver más fieros y deshumanizados a la hora de perpetrar un ataque. Padecen graves enfermedades venéreas,⁴ principalmente las niñas, como consecuencia de los abusos sexuales a los que se ven sometidas.
- **Psíquicas:** se manifiestan de diversas formas. En algunos casos con gritos, hiperactividad, espasmos, rabia, violencia. Sufren insomnio, ansiedad, miedo, parálisis, tics, un gran sentimiento de culpa, confusión, dificultad para entender y dar una respuesta. En muchas ocasiones se muestran insensibles, se encierran en sí mismos y huyen del contacto con los demás. En la mayoría de los casos sienten muchos remordimientos por lo que se han visto obligados a hacer. En el caso de las niñas, que con mayor frecuencia se ven sometidas a abusos sexuales, sufren el terror y la humillación de esos actos y con frecuencia se quedan embarazadas, teniendo que soportar esta situación en las peores condiciones imaginables, (tienen hemorragias, anemias, abortos naturales o provocados, quedándoles en la mayoría de los casos secuelas físicas y psíquicas difíciles de superar).

*Las niñas son
utilizadas
como
compañeras
sexuales de
los comba-
tientes*

Propuestas para la rehabilitación

No es necesario decir que es mucho mejor prevenir que rehabilitar. Evitar que se produzcan enfrentamientos armados, actuar sobre las causas es de vital importancia, pero, al mismo tiempo, es necesario intervenir ya para contribuir a mejorar las condiciones de vida de estos menores. El momento ideal para hacerlo es cuando el conflicto ha terminado, pero en muchos casos no es así y, entonces, lo que se pretende es que los niños no retomen las armas y que no vuelvan a ser secuestrados. Quienes llevan a cabo esta tarea de rehabilitación son las ONG, y el personal de instituciones internacionales y nacionales dedicadas a la reconstrucción posbélica, educación para la paz y defensa de los derechos humanos y de la infancia.

En la mayoría de los casos, los niños han sido reclutados bajo presión (física o psicológica). Cuando se les desmoviliza suelen llevar ya mucho tiempo luchando y la guerra ha pasado a ser su forma de vida. El grupo armado es su referencia y les proporciona seguridad. A pesar de que muchos intentan escapar, muchos otros

⁴ Amnistía Internacional, "Niños Soldados: uno de los peores abusos del trabajo infantil", enero 1999

quieren volver al grupo. Por eso es fundamental que se les presenten alternativas más atrayentes que las anteriores. Hay que inculcarles respeto y confianza en sí mismos y en los demás y ayudarles a recobrar su autoestima.

Para que la rehabilitación sea efectiva, debe ser practicada en tres niveles: *nacional, comunitario, e individual-familiar* y, a ser posible, en su medio o en condiciones lo más similares posibles a éste.

Nivel nacional

Es mucho más fácil que los niños soldados deseen desmovilizarse si se les ofrece una alternativa que mejore su situación socioeconómica: formación y un trabajo. También, el acceso a cosas básicas: agua, comida, un techo y seguridad, sin olvidar la localización de sus familiares. Es esencial que las ONG y las organizaciones internacionales contribuyan a aumentar el papel de la sociedad civil y la educación para la paz, centrando su tarea en:

- fortalecer y desarrollar las instituciones democráticas en todos los niveles, incluyendo el sistema judicial.
- promover la educación, especialmente en derechos humanos, relaciones de género, salud, planificación familiar, nutrición de los pobres, problemas medioambientales y el uso sostenible de la agricultura y la tierra.
- fortalecer los grupos locales más vulnerables, tales como las minorías étnicas, religiosas, culturales, las mujeres y los niños.
- generar relaciones de confianza mutua entre diferentes grupos locales.
- educar a las personas para afrontar una situación de crisis, es decir, entrenamiento en estrategias.

Nivel comunitario

Es necesario ofrecer a la comunidad programas de entrenamiento para que los líderes locales, profesores, padres y religiosos entiendan y acepten a los niños soldados desmovilizados. Esto, junto con programas de capacitación y educación para los niños, así como trabajos adaptados para personas que han pasado su infancia luchando. La idea es establecer rutinas diarias para que los menores perciban una idea de normalidad y estabilidad en sus vidas. La formación vocacional-profesional para jóvenes ayuda a aumentar su capacidad de generación de renta e independencia económica, a la vez que aumenta su sentido de identidad y autoestima. En algunos países se les ha formado y empleado para la reconstrucción de su comunidad, en la construcción de escuelas, iglesias, casas, etc., proporcionándoles así unos ingresos propios y una sensación de tranquilidad. El factor imprescindible para la buena reinserción de los niños ex combatientes es la participación de la comunidad. Necesitan observar unos modelos de conducta en tiempos de paz.

Dentro de los programas locales, y para recuperar la confianza mutua y la aceptación de la comunidad, se recurre a rituales tradicionales para purificarlos, ya que la comunidad les rechaza porque se les considera responsables de

las atrocidades (torturas, mutilaciones, muertes) cometidas. En Ruanda, por ejemplo, 70.000 personas han participado en un programa de cantos, bailes, teatro y escritura, para liberarse del dolor de sus recuerdos. En Filipinas, algunos jóvenes traumatizados por la guerra han sido nombrados “animadores juveniles” para que pudieran compartir sus historias y relacionarse con los más pequeños. En Líbano, en un proyecto denominado “Educación para la paz”, cientos de jóvenes, muchos de ellos ex soldados de la milicia, están trabajando como militantes para la paz. Con este tipo de actividades los ex combatientes recobran su autoestima desempeñando funciones que tienen un reconocimiento social.

Nivel individual

Se considera prioritaria la reunificación familiar. Lo ideal es que los niños vuelvan con los padres o familiares más cercanos, aunque no siempre es posible, ya que es común que las familias se hayan trasladado varias veces, que los miembros de la misma se hayan dispersado, que estén muertos o incluso que esos niños ya no tuviesen contacto con la familia antes de su reclutamiento en el grupo armado. Es vital crear y transmitir al niño la idea de normalidad. Esto se consigue en gran medida yendo a la escuela (aunque sea debajo de un árbol), realizando juegos y haciéndole partícipe de la vida del entorno u ofreciéndoles un trabajo.

Formación del personal que va a trabajar con ellos. Todas las prácticas mencionadas anteriormente, deberán ser realizadas por unos buenos profesionales: maestros, psicólogos, terapeutas, pedagogos, trabajadores sociales, representantes religiosos, líderes de opinión, que además conozcan bien la idiosincrasia de cada comunidad. Atención especial se le debería prestar a las mujeres por dos razones:

- a) suelen ser madres y tienen una influencia indudable sobre el desarrollo estable de los niños.
- b) en situaciones de conflicto, las mujeres y los niños representan el 75% de la población de refugiados.

Se deben utilizar sus propios recursos, es decir, emplear a personal de la comunidad, a personas en quienes estos niños puedan confiar, que conozcan bien ese medio y que a su vez puedan proponer soluciones. Este es el caso de los rituales de “purificación”.

El tratamiento psicológico que se les proporcione tiene que tener en cuenta muchos factores. Siempre debe respetarse la intimidad y los deseos del menor y buscar la mejor fórmula para que exteriorice sus emociones. Suele ser muy traumático para ellos relatar sus experiencias, por eso se les dan varias opciones para manifestar sus sentimientos a través de talleres de trabajos de plástica, dibujo, juegos, teatro de la práctica del deporte. En definitiva, llevarles a olvidar sus malas experiencias y hacerles recobrar la autoestima y fe en sí mismos y en el medio en el que viven.

Desprotección legal

La aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), supuso un avance importante, aunque insuficiente, en la defensa de los menores. Según ésta, niño es todo ser humano menor de 18 años; sin embargo, en su artículo 38 establece la edad mínima de 15 años para su posible reclutamiento y participación en conflictos bélicos.

Durante la negociación de la Convención muchos Gobiernos, agencias internacionales y ONG, pidieron que se elevara a 18 la edad legal mínima de reclutamiento y participación en conflictos armados y manifestaron que 15 era una edad excesivamente baja y que había que elevarla.

En este contexto y como consecuencia de los constantes abusos que se seguían cometiendo contra la infancia, en 1992 se reunió por primera vez el Comité de los Derechos del Niño, órgano creado para velar por el cumplimiento y la aplicación efectiva de los derechos reconocidos en la Convención. Se invitaron a ONG y a representantes de agencias de Naciones Unidas para participar en el debate y aportar recomendaciones junto con los miembros del Comité. Como resultado, se propuso llevar a cabo un estudio sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños y niñas combatientes y la redacción de un Protocolo Opcional Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, relativo al aumento a los 18 años como edad mínima para el reclutamiento y participación de menores en conflictos armados.

Dos años más tarde, como resultado de la presión internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, designó un Grupo de Trabajo que se encargaría de redactar dicho Protocolo. El Grupo de Trabajo celebró sus primeras sesiones en 1994 y desde entonces se ha reunido anualmente en Ginebra.

Estas reuniones están abiertas a la participación de todos los miembros de la Comisión. Generalmente participan entre 40 y 50 Estados, las agencias internacionales de Naciones Unidas UNICEF y ACNUR, la Organización Internacional del Trabajo y el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. También asisten ONG reconocidas por el Consejo Económico y Social como son: Amnistía Internacional, Alianza Internacional, Save the Children, Terre des Hommes, Human Rights Watch, Coalición, entre otras.

En el transcurso de los cinco años que el Grupo lleva trabajando en la elaboración del Protocolo, no ha conseguido alcanzar un consenso sobre su principal objetivo de establecer los 18 años como edad mínima de reclutamiento y participación en los conflictos. La mayor oposición viene del grupo de países compuesto por Gran Bretaña, Pakistán, Israel, Corea del Sur y Kuwait, liderado por EEUU. Este país es el que más enérgicamente se ha opuesto al consenso internacional de la elevación de la edad mínima.

La última reunión del Grupo de Trabajo se celebró en Ginebra en enero de 2000, con la participación de 40 países. Después de seis años de negociaciones, los Gobiernos se han puesto finalmente de acuerdo para prohibir la participación de niños y niñas menores de 18 años en conflictos armados. El Tratado es aplicable tanto a las fuerzas armadas nacionales como a los grupos armados no estatales. Sin embargo, no se ha conseguido establecer los 18 como edad mínima para el reclutamiento. Es decir, los menores no pueden participar activamente

en conflictos armados, pero sí pueden formar parte del ejército regular o de grupos armados.

“Este es un cambio significativo, un gran avance para los niños y niñas de todo el mundo”, dijo Jo Becker, presidente del Comité de la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Soldados.⁵ “Cuando sea respaldado por la presión política y pública, este Tratado ayudará a acabar con el terrible uso de los niños como soldados”. Se trata, sin duda, de un paso más, aunque es evidente que la mejor forma de proteger a los menores en las guerras, es asegurarnos que no se les alista. Desafortunadamente y como ocurre en la mayoría de las ocasiones, muchos Gobiernos basaron sus posiciones en intereses militares y particulares más que en el mejor interés del niño.

La Coalición reconoció los esfuerzos realizados por algunos países para intentar conseguir la prohibición de cualquier tipo de reclutamiento o participación de menores en hostilidades, en particular Suiza, Bélgica, Uruguay, Portugal, Suecia, Guatemala, la República Checa y Etiopía.

Disposiciones que se incluyen en el Protocolo

- Establece los 18 años como edad mínima para la participación directa en hostilidades.
- Solicita a los Gobiernos que eleven la edad mínima para el reclutamiento voluntario por encima de los 15 años y que hagan una declaración vinculante manifestando la edad mínima que respetarán.
- Prohíbe el reclutamiento o utilización de menores de 18 años en hostilidades por grupos rebeldes o no estatales y pide a los Estados que castiguen tales prácticas.
- Pide a los Gobiernos medidas y asistencia internacionales para desmovilizar, rehabilitar y reinsertar a los niños y niñas ex combatientes.

El Protocolo está abierto para su firma y ratificación después de su adopción en la 56ª sesión de la Comisión de UN del 20 de marzo al 28 de abril de 2000.

La Coalición se comprometió a supervisar la ejecución del Tratado, a seguir haciendo campañas para alcanzar una mayor ratificación y a continuar presionando para alcanzar una edad de alistamiento más elevada en los países que aún reclutan a menores: EE UU, Inglaterra, Australia, Canadá, entre muchos otros.

No se puede permanecer impasibles y pensar que tan sólo los Gobiernos son los responsables de proteger los derechos de la infancia, o creer que resulta inevitable que los denominados países pobres siempre tengan problemas de etnias o religión que desembocan en conflictos armados a los que somos ajenos. Menos aún cuando los denominados países desarrollados son los mayores productores y exportadores de armamento ligero, cada vez más barato y ligero. Su fácil manejo,

⁵ La Coalición es una agrupación que reúne a siete de las más prestigiosas ONG, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que trabajan en la defensa de los derechos humanos y de la infancia. Está llevando a cabo una campaña muy activa para la adopción del protocolo y se están creando más Coaliciones en todo el mundo.

su escaso peso y bajo precio facilitan la proliferación de los conflictos y la participación de los menores en ellos. Por otro lado, los países del Norte son los principales explotadores de los recursos naturales del Sur, contribuyendo así a su empobrecimiento progresivo.

Es necesario invertir el orden de las actuaciones, empezando por potenciar el desarrollo y la educación para la paz, contribuyendo a la eliminación de los conflictos, en lugar de invertir en proyectos de reconstrucción y rehabilitación.

Más de 300.000 menores corren hoy el peligro de perder la vida y, desafortunadamente, nadie tendrá constancia de ello si así sucede. A este respecto, cabe cuestionarse una vez más el papel de los medios de comunicación. ¿Por qué casi nunca se habla de estos hechos, negándoles así su importancia?. ¿Son los propios medios o la sociedad quienes determinan la prioridad de las noticias?

Las guerras no son inevitables y menos aún el que los niños participen en ellas. Todos tenemos la obligación moral de contribuir a eliminar la violencia armada y presionar a fin de que se acabe con estas prácticas tan deshumanizadas e injustas.

**Medios y Derechos Humanos: Silencio
ante lo esencial**

129

JEAN-PAUL MARTHOZ

Medios y Derechos Humanos: Silencio ante lo esencial

Las últimas crisis en el escenario internacional, como la de Kosovo o Timor Oriental, han reabierto el debate sobre el papel que deben jugar los periodistas y los medios de comunicación a la hora de abordarlas. Frente a las tendencias predominantes, quizá ha llegado la hora de hacer un periodismo premonitorio, que no se deje llevar por las presiones del mercado y del día a día, y que aborde las noticias desde su origen, en su contexto y con un enfoque global, actuando como un vigía en el plano internacional.

La guerra de Kosovo y las matanzas en Timor Oriental han puesto de nuevo el papel de los medios de comunicación en el centro de la palestra. Pasado lo más álgido de la crisis, periodistas, analistas y diplomáticos continúan la batalla y se interrogan sobre la cobertura mediática. Si bien algunos se autoglorifican, otros no tienen bastantes adjetivos para subrayar las deficiencias de los medios informativos. La mayoría de las críticas se centra en la cobertura de la guerra: prohibido el acceso al territorio kosovar, los periodistas habrían sido incapaces de deslindar la política de propaganda de la OTAN y habrían difundido, sin la distancia crítica necesaria, las aseveraciones más imprudentes o infundadas de la organización atlántica.

En un informe publicado en septiembre, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) hablaba de “la política agresiva de información de la OTAN”, acusada de repartir “rumores, mentiras e informaciones incorrectas”, y añadía claramente en dirección a los periodistas: “Estos informes falsos recibieron una cobertura extensiva en los medios y contribuyeron a reforzar la unidad de la Alianza de 19 miembros en momentos críticos”.¹

Es indispensable un *post-mortem* sin concesiones de la actuación de la prensa. Sin embargo, urge ir más allá de esta revisión de los medios en tiempos de

Jean-Paul Marthoz es director europeo de información de Human Rights Watch, y autor del libro *Et Maintenant le Monde en Bref. Politique étrangère, journalisme global et libérés*, GRIP, Bruselas

¹ IPI, *The Kosovo News and Propaganda War*, Viena, septiembre de 1999

guerra, mas allá de la crítica del periodismo de “fusión” de ciertos corresponsales diplomáticos con sus Gobiernos y de ciertos enviados especiales con una opinión publica emocionada. Importa cuestionar el momento de la intervención periodística y revisar la práctica del *too little, too late* que hace que los medios, tan ansiosos de ser los primeros en la noticia, lleguen muchas veces a convertirse en los últimos de la fila de la historia.

Víctima constante de los ciclos noticiosos, pasando de la negligencia a la febrilidad y saturación informativas, la mayor parte de la prensa llega a los conflictos como los bomberos o las ambulancias. En muchos escenarios, el periodismo cada vez más está en el punto último de la cadena noticiosa. Repercute declaraciones e informes e, hipotecando su capacidad autónoma de indagar e investigar, debilita a la vez su posibilidad de saber y comentar.

La falta de preparación y anticipación tiene consecuencias serias: agrava el sentimiento de incompreensión y de impotencia entre el público, como si el mundo no tuviera sentido y la vida internacional fuera una sucesión de crisis desechables e intercambiables —hoy Timor, mañana Chechenia— ; acrecienta la vulnerabilidad de los periodistas y sobre todo de los generalistas frente a las políticas de desinformación y, sobre todo, obstaculiza una toma de conciencia temprana de la gravedad de una crisis al no dar cobertura sostenida a las premisas de un conflicto.

En los últimos años —marcados por la limpieza étnica en la ex Yugoslavia, el genocidio en Ruanda y violencias sin nombre en Sierra Leona, Liberia y Timor Oriental— periodistas, organizaciones no gubernamentales, organismos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa se han dedicado a luchar en el terreno de los medios, a combatir los medios del odio que tantos estragos han causado en esta orgía criminal de fin de siglo, a fomentar un periodismo “incluyente” y tolerante en países divididos por tensiones étnicas o religiosas, y a apoyar medios independientes en países todavía sometidos a la arbitrariedad de Gobiernos autoritarios.

Después de este periodismo preventivo, que supone programas comunitarios y experimentos cívicos con la prensa local, ha llegado la hora del periodismo premonitorio, que concierne sobre todo a la prensa internacional y especialmente a la de aquellos países que se han dado el mandato y tienen los medios para la intervención militar-humanitaria. Esta propuesta camina a contratiempo de otro periodismo llevado, por las presiones del mercado y de la tecnología, a privilegiar el directo y la noticia inmediata. De hecho, el periodismo premonitorio requiere otra manera de cubrir las noticias, de darles espacio y tiempo: quiebra los ciclos de noticias, invierte las jerarquías convencionales de las informaciones y reporta desde países donde no pasa nada. Su propósito es ser un vigía, jugar en el terreno de la política internacional el papel del canario en las minas de carbón del siglo pasado: cuando se dormía el pájaro, señalaba el peligro invisible y sin olor de la presencia de gas explosivo.

Humanitarios y diplomáticos

El género del periodismo premonitorio cierra el ciclo del periodismo humanitario, que tanto ha marcado la cobertura internacional de las últimas tres década-

das. El periodismo humanitario salvó decenas de miles de vidas y merece, como el personal de las agencias humanitarias, que su papel sea reconocido. Sin embargo, la sucesión de reportajes dramáticos sobre masacres y desastres, el desfile inexorable delante de las cámaras de víctimas anónimas y de masas desamparadas, han tenido consecuencias sobre la percepción del mundo en las opiniones públicas. “En cierto modo —escribe el autor canadiense Michael Ignatieff— la televisión ha contribuido a derribar las barreras de ciudadanía, religión, raza y geografía, que antes dividían nuestro espacio moral entre los seres bajo nuestra responsabilidad y los que estaban mas allá de nuestro mundo. La televisión nos convierte en *voyeurs* del sufrimiento de los otros, turistas en sus panoramas de angustia. Nos pone frente a frente con su situación, mientras oscurece las distancias —sociales, económicas, morales— que nos separan”.

Practicado en el mundo de la televisión, marcado por la audiencia —con su necesidad de testimonios desgarradores e imágenes dramáticas—, promovido también por organizaciones determinadas, en nombre de la urgencia de emocionar a la opinión pública para provocar su generosidad, el periodismo humanitario difiere fundamentalmente del periodismo premonitorio. Aparece cuando la crisis ha llegado a su punto más violento, cuando los campos se han transformado en mataderos.

Contrasta agudamente, así, con el periodismo derecho-humanista que precedió, acompañó y a veces se confundió con determinados movimientos en las décadas anteriores. Cubriendo las batallas de la libertad, como la resistencia *antiapartheid* en Suráfrica o la lucha antidictatorial en América Latina, humanizaba a las víctimas porque éstas tenían cara y nombre y eran héroes positivos, individualizados, militantes políticos o periodistas independientes. Por su lado, el periodismo humanitario, inmerso en batallas étnico-nacionalistas confusas, ha deshumanizado involuntariamente a las víctimas, filmadas “a granel” como seres pasivos y casi intercambiables. Como seres sospechosos también, como en el caso de los hutus ruandeses, de haber sido en un cierto momento culpables. En este contexto, el héroe no es el “nativo”, sino el “sinfronterista”.

El periodismo premonitorio limita la soberbia del periodismo diplomático. El tema de los derechos humanos ya no es algo marginal, limitado a acciones discretas de la “diplomacia tranquila” o a fechas simbólicas de la ONU, sino uno de los ingredientes centrales de la alquimia política internacional. En el periodismo de los años setenta, los derechos humanos no cabían dentro del universo convencional de los Metternich de la pluma. Gracias al trabajo de los Sakharov y Pérez Esquivel, gracias a la doctrina de los derechos humanos inaugurada por Jimmy Carter en 1977, la democracia y los derechos humanos ya no sólo son mencionados en discursos de fin de banquete, sino que están inscritos como elementos esenciales en acuerdos de cooperación internacional. Se infiltran en los debates de la Organización Mundial del Comercio, sirven para justificar intervenciones humanitarias y logran, aparentemente, un apoyo mayoritario de las opiniones públicas occidentales. Los derechos humanos ya forman parte de la compleja ecuación del poder.

*El periodismo
premonitorio
limita la
soberbia del
periodismo
diplomático*

Convergencia

Esta evolución, incipiente en círculos periodísticos, coincide con la preocupación de las organizaciones de derechos humanos, en el sentido de dar un contexto a las crisis para emitir un diagnóstico que no sólo pueda curar, sino también ayudar a prevenir estos hechos en otras fechas u otros lugares. Las guerras que han asolado decenas de países en la última década no han nacido de la nada. Han tenido un largo tiempo de incubación. No han nacido tampoco como resultado de la fatalidad o de odios ancestrales. “La violencia comunitaria muchas veces está considerada como el producto de odios profundamente arraigados o de viejas animosidades”, notaba Human Rights Watch en su estudio sobre los orígenes políticos de diez conflictos recientes. “Ocasionalmente, esta visión está promovida por periodistas que carecen del tiempo o de la inclinación para buscar causas más complejas. Los Gobiernos que presiden en esta violencia comunitaria pueden promover también esta visión: si las viejas animosidades se consideran la causa, la violencia comunal tiene la apariencia de un fenómeno natural que los de afuera no tienen el derecho de condenar, ni la esperanza de prevenir. Algunos miembros de la comunidad internacional han conspirado en esta opinión, porque la inacción frente a la violencia comunitaria se excusa más fácilmente si se pretende que la fuente de esta violencia no puede controlarse”. Las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que tensiones comunitarias no son *per se* la causa inmediata de muchos conflictos violentos y persistentes. La causa directa de la violencia comunitaria es la explotación gubernamental de las diferencias comunitarias.²

Muchos periodistas de medios de calidad han tratado de buscar la explicación detrás de la noticia, se han esforzado por comprender para hacer comprender. Han cubierto hechos antes de que llegaran a ser noticias, han anticipado crisis y advertido a las opiniones públicas. Sin embargo, los que han seguido los dramas de los últimos años confiesan su perplejidad y su sentimiento de inutilidad. Muchos enviados especiales en Bosnia, Chechenia o África Central tienen la impresión desesperante de que han cubierto un sinnúmero de horrores sin resultado alguno sobre el desarrollo de los acontecimientos. “¿Todavía molestamos?”, se preguntaba el reportero Laurent Van der Stock. “Llegamos a Sarajevo acogidos como salvadores. Tres meses más tarde, los habitantes se habían dado cuenta que no habíamos provocado nada”.³

Después del genocidio de Ruanda y las guerras de limpieza étnica en Bosnia, las organizaciones de derechos humanos vienen abogando por una reacción mucho más firme y rápida de la comunidad internacional para prevenir la comisión de crímenes contra la humanidad. Piden pasar de la intervención posmasacre, típica de las operaciones humanitarias, a la intervención preventiva, un acto más político, que implica decisiones muy graves de apreciación del riesgo de la injerencia o de la pasividad.

² David Rieff, *The Slautherhouse, Bosnia and the failure of the West*, Simon&Schuster, Nueva York, 1995

³ *Liberation*, 13 de octubre de 1999

Detrás de estas llamadas las ONG admiten amargamente su fracaso —a pesar del “efecto CNN”, supuestamente capaz de forzar a los Gobiernos a intervenir bajo la presión de las imágenes sobre la opinión pública— en sus intentos de movilizar a los líderes del mundo democrático cuando les parecía posible y menos costoso parar un crimen o un conflicto que intervenir después. Argumentaban que, en los meses que precedieron al genocidio en Ruanda, pero también cada día que pasó después del estallido de la campaña de exterminio contra los tutsis, habría sido posible detener a las bandas asesinas. De la misma manera, pensaban, una política de firmeza clara hacia Milosevic en Bosnia-Herzegovina habría hecho innecesaria una intervención militar en Kosovo.

Río arriba

“El gran público y una parte considerable de los periodistas han descubierto a Timor Oriental en septiembre de 1999”, exclamaba Paul Moreira, director de encuestas de Canal+. “Sin embargo, Indonesia había comenzado la exterminación en diciembre de 1975. Si uno cuenta bien, suma 24 años de silencio desde la invasión del territorio; un silencio de 200.000 muertos, uno de cada tres habitantes liquidado en un desinterés mediático indolente.”⁴

Esta observación tiene al menos dos corolarios: primero, la intervención informativa tiene que ir “río arriba”, para revelar los preparativos y las premisas de un drama, tiene que llegar mucho más temprano, antes de que los gurus del odio hayan conquistado los balcones y los paramilitares adquirido sus armas. Segundo, los periodistas deben replantear su papel. Pueden limitarse a observar la realidad como lo requieren los criterios clásicos de la cobertura noticiosa, u optar por forjar la realidad, hacer campaña, hablar e insistir cuando la crisis no está de actualidad, cuando no ha contribuido con bastante furor y sangre a atraer a los camarógrafos.

Mientras la Guerra del Golfo inspiró reflexiones sobre el seguidismo de la mayoría de la prensa con relación a los servicios de propaganda del Pentágono, las crisis de Bosnia, Ruanda, Kosovo y Timor Oriental llevan a reflexiones de otra índole. Piden cambios aún más esenciales que la distancia frente a los poderes, exigen cambios en la manera de concebir el papel del periodismo y de fijar prioridades editoriales. Denuncian el seguidismo con relación a las reglas clásicas del periodismo de actualidad, con relación también a un periodismo de mercado que decreta que ciertos temas aburren al público.

Este planteamiento desemboca, inevitablemente, en una reformulación del debate sobre la neutralidad y el compromiso, sobre la legitimidad de pasar de una descripción factual y analítica de los acontecimientos a una posición de defensa de un campo —el de las víctimas o de los menos culpables— y de una política de intervención. David Rieff lo planteó sin rodeos en su libro *El Matadero* sobre el asedio a Sarajevo: “Porque lo que estaba ocurriendo era un genocidio, la mayoría de los periodistas vino a simpatizar con la causa bosnia, exactamente de la misma manera, esperamos, que si representantes de la prensa internacional hubieran estado en el ghetto de Varsovia en 1943, habrían simpatizado con los judíos”.

⁴ Isabelle Vichniac, “Des clivages significatifs entre Européens et Américains”, *Le Monde*, 5 de noviembre de 1999

Para el periodismo, es el momento de reivindicar tiempo y recursos para ganar su independencia

Instrumentalización

A pesar de todo, la convergencia entre el humanitarismo y la intervención militar ha cambiado los términos de la ecuación. Todo cambia cuando la acción humanitaria no significa únicamente el “sinfronterismo” de la asistencia médica, sino la decisión de enviar tropas, a veces sin mandato de la ONU, para sancionar al bando que se juzga responsable de la tragedia. En Sarajevo en 1993, en Ruanda en 1994, los periodistas más comprometidos y las organizaciones de derechos humanos no pedían solo el envío de médicos sino de soldados, no pedían sólo el acceso humanitario a las víctimas sino la neutralización de sus torturadores.

Este debate sería más sereno si la cuestión de los derechos humanos no hubiera sido instrumentalizada por las grandes potencias, si la propaganda no hubiera jugado baratamente con conceptos tan graves como genocidio o limpieza étnica. Las intervenciones contra Saddam Hussein y Slobodan Milosevic han enseñado los peligros de la instrumentalización de los derechos humanos por Gobiernos democráticos. El uso de exageraciones y mentiras contra un adversario con el cual, unos meses antes, era aparentemente legítimo negociar o comerciar, abarata el valor y la fuerza de las propias denuncias. Además se corre el riesgo de perder la confianza de un público del que los Gobiernos esperan un día la indiferencia y otro día la militancia.

De la misma manera los periodistas, engañados por las mentiras de la Guerra del Golfo, despistados por el falso caso de Timisoara en Rumania, irritados por las *bavures mediatiques* de la OTAN, como titulaba uno de sus informes Reporteros Sin Fronteras, pueden caer en la tentación de no creer a nadie —no sólo a los Gobiernos sino a las organizaciones de derechos humanos más serias— cuando denuncian violaciones de derechos humanos en países donde se percibe que estos Gobiernos tienen intereses vitales y han escogido su estrategia y designado a los buenos y a los malos. Un primer síntoma de este “síndrome de Timisoara” se verificó con las denuncias de masacres masivas en el este de Zaire/Congo en 1997, cuando muchos periodistas acogieron con cautela los informes independientemente de su origen.

Aunque durante la guerra de Kosovo y las matanzas en Timor Oriental imperó todavía el miedo de subestimar o ignorar un genocidio —lo que podría llamarse el “síndrome de Srebrenica”—, y aunque la falta de informaciones y de imágenes, paradójicamente, favoreció la dramatización de la crisis, el proceso es irreversible y el temor al engaño, inevitable.

El tango de la prensa y las ONG

Estos hechos tienen serias consecuencias para las organizaciones de derechos humanos. Implican una delimitación estricta de su área y la de los Gobiernos. Requieren un rechazo de políticas de comunicación que dramatizan y “contaminan” las noticias y una relación con los periodistas basada en la voluntad y el interés comunes de promover un periodismo autónomo.

Para el periodismo, es el momento de reivindicar tiempo y recursos para ganar su independencia, no sólo en el comentario de los acontecimientos sino en

la revelación de los hechos. Es el momento de acordarse del viejo periodismo, de Albert Londres revelando en los años veinte la miseria en el presidio de Cayenne o de Seymour Hersh investigando la masacre de My Lai en Vietnam. Es el momento de nadar contracorriente y elegir el riesgo de aburrir y disgustar. “Ninguna muchedumbre quiere la verdad cuando ésta choca con sus ilusiones vitales”, decía André Malraux. Es el tiempo de redescubrir, en la época del periodismo de grupo, la valentía y la verdad de la soledad.

Crónica de no-proliferación

Crónica de no-proliferación y desarme nuclear

139

VICENTE GARRIDO REBOLLEDO

Crónica de no-proliferación y desarme nuclear¹

El rechazo por parte del Senado estadounidense a la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT) ha ensombrecido los progresos realizados en materia de desarme y no-proliferación nuclear desde que en 1995 fuese prorrogado indefinidamente el TNP. Independientemente de las consecuencias de la no ratificación del Tratado para el proceso global de desarme, la autoridad moral y política de EE UU, como principal valedor del CTBT, ha quedado en entredicho.

El 13 de octubre del pasado año, el Senado estadounidense rechazó la ratificación del CTBT. La votación arrojó un resultado de 51 votos en contra, 48 a favor y una abstención (demócrata), muy lejos por lo tanto de los dos tercios necesarios para que el CTBT obtuviese la confianza de la Cámara. La fracción más conservadora de los republicanos, junto a sus aliados (sólo cuatro senadores votaron a favor del Tratado), encabezados por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Jesse Helms, antepuso con ello su batalla política particular contra el presidente Clinton, al interés general de la mayoría de los Estados e incluso, al de su propia opinión pública, tirando por la borda años de negociaciones de control de armamentos. Todo ello precisamente un día después de producirse un golpe militar en Pakistán. Tanto Islamabad como Nueva Delhi se pueden dar un respiro tras esta decisión ya que, a partir de ahora, EE UU no es precisamente el país más idóneo para criticar las pruebas nucleares realizadas por ambos Estados en mayo de 1998 o sus reticencias a la hora de firmar el Tratado, pese a que ello sea un requisito para que el CTBT pueda entrar en vigor.

¹ En el número 69 de la revista salió nuevamente reproducida (a partir de la página 130) la *Crónica de no-proliferación y desarme nuclear* ya publicada en el número 68. Por ese motivo se reproduce en este número la crónica actualizada que debía haber aparecido en el número anterior de la revista –con su respectiva bibliografía– y cuyo tema central era la no ratificación del CTBT por el Senado estadounidense. Pedimos disculpas a nuestros lectores por el error.

Vicente Garrido es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, miembro del Programa de No Proliferación del PRIF (Francfort) e investigador del CIP.

Pulso entre el Presidente y el Senado

Sólo existe un precedente importante en la política exterior estadounidense que iguale la humillación a la que el Senado ha sometido a un presidente de EE UU con relación a un acuerdo internacional: el Tratado de Versalles, rechazado en noviembre de 1919. En los más de dos siglos de historia, el Senado sólo ha rechazado 20 tratados internacionales negociados por sus presidentes (y ninguno de ellos de la magnitud del CTBT) mientras que, por otra parte, ha aprobado un total de 1.523. Además, el control de las armas nucleares había sido una piedra angular de la política exterior estadounidense desde que Eisenhower propusiera en 1958 la prohibición total de todos los ensayos nucleares. Con la negativa del Senado a ratificar el Tratado se rompe una larga tradición de más de cuatro décadas (avalada por ocho presidentes) representativa del apoyo de EE UU a los acuerdos multilaterales de control de armamentos nucleares.

Los intentos de última hora para retirar el Tratado del Senado (como ya hiciera el ex presidente James Carter en 1979 con el acuerdo bilateral SALT-2, tras la invasión soviética de Afganistán, y que fue finalmente ratificado en 1996) tampoco han dado resultado. Ello hubiera permitido a Clinton someter a consideración de la Cámara el CTBT en un momento más propicio, quizás al final de su mandato. Sin embargo, el líder de los republicanos en el Senado, Trent Lott, no tenía por qué conceder esa pleitesía al presidente, sobre todo, teniendo en cuenta que cuando Clinton le solicitó la retirada del Tratado, sólo noventa minutos antes de la votación, ambos líderes llevaban sin tener una conversación directa desde el mes de julio. Por ese motivo, por más que el senador Lott se haya esforzado en afirmar que el voto en contra de los republicanos no ha tenido nada que ver con los asuntos de política interna (el hecho de que Clinton escapase airoso de su destitución por el asunto Lewinsky) sino, más bien, con el contenido del Tratado (firmado sin problemas por el presidente en septiembre de 1996), pocos le han creído. Al contrario, el debate, tanto interno como internacional, no se ha centrado en cuestionar el Tratado, que todos, incluso el Senado, consideran la piedra angular del desarme (su lema principal es: "si no se prueban las armas nucleares se acaba también con la necesidad de inventar otras nuevas y a la vez, se acelera el proceso de destrucción de las ya existentes, con el tiempo inoperativas") sino en clarificar las razones de fondo que han llevado a la Cámara a su no ratificación.

Los republicanos, y especialmente Lott, no han salido bien parados en los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que les han tratado con una dureza inusitada. Calificativos como "actitud revanchista" (*Time*), "senadores parroquianos" (*The New York Times*), "irresponsables" (*The International Herald Tribune*) o "desafiantes" (*Le Monde*) se han unido a las propias críticas del presidente (que ha tildado a los republicanos de "partisanos temerarios"). Clinton ha amenazado incluso con adoptar represalias en contra de la decisión republicana, tales como vetar cinco de las trece leyes de acompañamiento a los presupuestos del Estado para el año 2000 o simplemente, no conceder al Senado una prórroga adicional para que complete el presupuesto de 2000 (produciéndose de ese modo una situación similar a la de los años 1995 y 1996). Ello acentuaría aún más el distanciamiento entre la Casa Blanca y el Senado, aunque el debate no es más

que un anticipo de lo que se avecina en la ya iniciada campaña electoral. El candidato a suceder a Clinton, Al Gore, ya ha anunciado que convertirá la ratificación del Tratado en uno de los asuntos centrales de la campaña.

En el ámbito internacional, también han arreciado las críticas. En un intento por evitar lo que sólo unos pocos se atrevían a considerar como una remota hipótesis, en una carta abierta sin precedentes, el primer ministro británico, Tony Blair, el presidente de la república francesa, Jacques Chirac y el canciller alemán, Gerhard Schröder, hicieron un llamamiento al Senado para que ratificase el CTBT y reconsiderase los peligros que su negativa supondría para la no-proliferación de armas de destrucción masiva. Además, los tres dirigentes hicieron hincapié en el gran daño que la negativa infligiría a los esfuerzos realizados hasta la fecha por los países occidentales en materia de control de armamentos.²

Tras la negativa del Senado, Jacques Chirac manifestó sentirse “consternado” por la “forma arrogante” en la que éste había desoído sus peticiones, adoptando una decisión que tendrá consecuencias negativas para el proceso de no-proliferación y desarme. Otros Estados no tardaron en unirse a las críticas. China instó a EE UU a que predicase con el ejemplo ratificando el Tratado, en lugar de cuestionar la política de armamento de terceros Estados. Rusia advirtió a EE UU que su actitud podría afectar a todo el sistema legal de tratados en vigor sobre el control de armamentos nucleares, especialmente el Tratado START II y el de Misiles Anti-Balísticos (ABM) de 1972. Por su parte, el Secretario General de la OTAN, Lord Roberston, expresó su deseo de que el Senado reconsiderase su decisión tras las elecciones del presente año.

Las razones del rechazo

Se ha producido por vez primera una disociación entre los objetivos presidenciales y los del Senado estadounidense en materia de desarme y control de armamentos por la cuestión del CTBT, no así en otras cuestiones dentro del mismo ámbito, en dónde existen algunos síntomas preocupantes de la nueva actitud de EE UU. Sirva como ejemplo su posición poco entusiasta con respecto a las disposiciones de verificación de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas (en vigor desde 1997) o bien, su escasa contribución a las negociaciones para la adopción del protocolo de verificación de la Convención de Armas Biológicas (CAB). Esta nueva política de negarse a someterse a las verificaciones internacionales de sus actividades es también evidente en otros ámbitos, como los de las minas antipersonas (conviene recordar que Washington no ha ratificado aún la Convención de Ottawa), o el Protocolo de Kioto sobre reducción de la emisión de gases con efecto invernadero acerca del cual, el propio vicepresidente Al Gore ha declarado que no impone ningún tipo de obligación para su país.³

² Tony Blair, Jacques Chirac y Gerhard Schröder, “A Treaty we all need”, *The New York Times*, 8 de octubre de 1999.

³ Véase al respecto Vicente Garrido Rebolledo, “EE UU y el desarme nuclear. ¿Regreso al pasado?” en *Política Exterior*, N° 74, marzo-abril de 2000, pp. 21-30.

Los republicanos consideran que el CTBT no garantiza al cien por cien la seguridad de EE UU, especialmente, en un período en el que muchos Estados con capacidad nuclear, como Corea del Norte, India o Pakistán, se están dotando con misiles balísticos de largo alcance capaces de llegar al territorio estadounidense. Otro de los argumentos es que no se puede verificar el cumplimiento del CTBT de forma satisfactoria, ni que otros Estados puedan realizar ensayos nucleares —con relación a los ensayos subcríticos en los que no se produce ninguna reacción de fisión y que precisamente, debido a la insistencia de EE UU durante la negociación del Tratado, no fueron expresamente prohibidos por este—. Por último, la cuestión más controvertida: el CTBT dificulta la modernización del arsenal nuclear estadounidense sobre todo, teniendo en cuenta que aún son necesarios de 5 a 10 años para conseguir un sistema de simulación fiable que acabe con la necesidad de realización de ensayos nucleares convencionales. A dicho programa de simulación EE UU ya ha dedicado 4.500 millones de dólares. Por todo ello, los máximos detractores del CTBT (entre los que se encuentran seis ex secretarios de Defensa estadounidenses) afirman que, de ratificarse el CTBT, EE UU se encontraría “desarmado unilateralmente, por voluntad de su presidente, frente a Estados como China, Rusia, Irak, Irán o incluso, India y Pakistán (en dónde la coincidencia del golpe militar del día 12 de octubre y el debate subsiguiente acerca del futuro de su arsenal nuclear fue utilizado por los republicanos para reforzar la tesis contraria al Tratado). Finalmente, los republicanos han acusado al presidente de no haber discutido suficientemente el Tratado en el Senado, y de haberle pedido su apoyo sin que éste tuviera el tiempo de conocerlo ya que tuvo acceso al texto sólo diez días antes de la celebración del debate en la Cámara.

En el lado contrario, los demócratas y el propio presidente consideran que ninguno de los argumentos esgrimidos por la mayoría republicana en el Senado justifican suficientemente el rechazo del CTBT. La tesis central de la defensa del Tratado está basada en su filosofía, en que es tiempo de abandonar la estrategia de la disuasión nuclear, más propia de la Guerra Fría, y ofrecer al resto de los Estados con capacidad nuclear un nuevo marco de diálogo. De ese modo, la mejor forma de crear las condiciones propicias para que se produzca un desarme nuclear multilateral es ratificando los tratados de control de armamentos y desarme. Por su parte, Francia y el Reino Unido consideran que hoy la seguridad internacional depende más de la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva que de la disuasión. Una lucha en la que no caben excepciones para ningún Estado, ni siquiera, para la máxima potencia mundial.

En el plano técnico, los demócratas, respaldados por 32 Premios Nobel de física, sostienen que el CTBT no acabará con la enorme superioridad técnica de EE UU en el terreno nuclear. Por otra parte, junto al Comité de Servicios Armados del Senado, militares de la Junta de Jefes de Estado Mayor y los directores de los laboratorios nucleares de EE UU, cuestionan que sea necesaria la realización adicional de ensayos nucleares para verificar la efectividad del arsenal estadounidense. Si ni Francia ni el Reino Unido necesitan obtener más información acerca de su armamento nuclear ¿por qué iba a necesitarla EE UU? Hasta la fecha, Washington ha realizado 1.030 ensayos nucleares, es decir, más de los realizados conjuntamente por las restantes cuatro potencias atómicas más India

y Pakistán. Las razones para seguir ensayando nuevas armas nucleares son más políticas que objetivas. Están estrechamente relacionadas con el deseo de la mayoría republicana en el Senado de revisar el Tratado ABM de 1972 y permitir de ese modo que EE UU pueda desarrollar un sistema nacional de defensa anti-misiles (NMD), considerado como inoperante e innecesario cuando el presidente Clinton llegó a la Casa Blanca. La decisión de desarrollar dicho sistema, con una inversión estimada de 11.000 millones de dólares, deberá ser tomada el 22 de julio de este año de acuerdo con cuatro criterios: predisposición tecnológica, madurez de la amenaza con ICBMs por parte de los llamados Estados “parias”, los costes y las consideraciones relacionadas con la política internacional de control de armamentos. El rechazo del CTBT por parte de los republicanos debe ser entendido dentro del cuarto criterio mencionado. Si no existen consideraciones de política internacional en materia de control de armamentos que hagan imposible el desarrollo de dicho sistema (es decir, primero el CTBT y después el Tratado ABM), desaparece un obstáculo adicional para su puesta en marcha.

Poco parece importarles a la política exterior y de seguridad estadounidense general y los republicanos en particular que países como Francia hayan advertido a EE UU de los peligros que implicaría para el inicio de una nueva carrera de armamentos la puesta en marcha del NMD. Tampoco parece ser un obstáculo que, en contra de la voluntad de Rusia, se pretenda modificar el contenido del Tratado ABM y, en concreto sus artículos 1 y 3, para permitir la defensa del territorio de EE UU con misiles balísticos y el aumento en el despliegue de los interceptores de misiles permitidos (hasta ahora cien), concentrados en una única base, en los alrededores de una capital de un Estado o área de misiles ICBMs. Además, el Tratado ABM es la base de todos los acuerdos de desarme actualmente en vigor e incluso de otros actualmente en negociación, como el Tratado START II, aún no ratificado por la Duma rusa.

Por todo ello resulta inaceptable que EE UU, país que ha venido exigiendo a otros Estados el estricto cumplimiento de los tratados de control de armamentos y desarme, señale ahora, a través de una minoría de senadores republicanos intransigentes, que no merece la pena ratificar un Tratado que consideran tiene problemas de verificación de sus disposiciones. Precisamente EE UU, con 240 millones de dólares, ha sido el país que más ha invertido en la puesta en marcha de un Sistema Internacional de Vigilancia (IMS), compuesto por 321 estaciones y 16 laboratorios radionucléicos, capaces de detectar una explosión nuclear en cualquier punto del planeta, incluso aquéllas con una potencia muy inferior al kilotón. Dicho sistema, será totalmente operativo en el año 2003.

En definitiva, como señaló el diario *Washington Post* al día siguiente del rechazo del CTBT por parte del Senado “no se pueden imponer a otros Estados reglas que uno mismo no está dispuesto a aplicarse”. Esto no parece haberlo entendido la mayoría republicana, más preocupada en su votación por la política interna que por las consecuencias internacionales de su actuación. Es más, los republicanos han votado de espaldas a la opinión pública estadounidense. Días antes de celebrarse el debate en el Senado, éste se mostraba a favor de la ratificación del CTBT en un 82% (de estos, el 86% se declararon republicanos).

“No se pueden imponer a otros Estados reglas que uno mismo no está dispuesto a aplicarse”

Repercusiones internacionales

EE UU está dispuesto a explotar su superioridad nuclear tecnológica hasta el último momento, sin tener en cuenta que el proceso ya ha llegado a su fin. Aunque Clinton no ha descartado la posibilidad de que el CTBT pueda volver a ser discutido en el Senado antes del fin de su mandato presidencial, políticamente, el CTBT no tiene posibilidades en la Cámara. Sería necesario contar con 67 votos y convencer a 19 senadores para que cambien de opinión. Además, Trent Lott ha exigido al presidente que antes del reenvío al Senado del CTBT, debe enviarse solicitud por escrito a la Cámara para que reconsidere una nueva votación del texto (con el objetivo de poder introducir demoras indefinidas de cara a una segunda votación).

El voto negativo del Senado se ha producido en un momento especialmente delicado para el Tratado. A tres años de su apertura a la firma, el 24 de septiembre de 1996, y habiéndose alcanzado tan sólo 26 de las 44 ratificaciones necesarias para que el CTBT entre en vigor (154 Estados ya lo han firmado), se celebró en Viena una Conferencia de los Estados Partes para decidir las medidas a adoptar de cara a la pronta entrada en vigor del mismo. Sin embargo, sin la ratificación de EE UU el CTBT es papel mojado.

Clinton ha descrito la situación como un asunto de política interna que no tiene nada que ver con las obligaciones que EE UU tiene para con el Tratado que ha declarado, está dispuesto a rendir honor no realizando pruebas nucleares adicionales. A su vez, ha solicitado a Rusia, China, Francia y Reino Unido a continuar con la moratoria nuclear. Jurídicamente se podría decir que la declaración unilateral de un presidente de EE UU contiene una obligación cuyo cumplimiento puede ser exigido por parte de cualquier Estado, aunque, desafortunadamente, no es así. El Senado ha restado definitivamente legitimidad a la política estadounidense de desarme y control de armamentos de destrucción masiva. La declaración unilateral del presidente sólo obliga a no realizar pruebas nucleares sobre una base libre y unilateral, durante lo que resta de su mandato, pero no a futuros presidentes. De hecho, George W. Bush ha declarado que lo sucedido con el CTBT es sólo la antesala de lo que ocurrirá con el Tratado ABM, acuerdo al que considera obsoleto y que hay que abandonar por ser contrario a los intereses estadounidenses.

En noviembre se celebrarán elecciones en EE UU. Tanto el CTBT, como el futuro papel de las armas nucleares en la estrategia estadounidense, serán asuntos de debate durante la larga campaña electoral. Hasta que no se clarifique la situación, todos los acuerdos de desarme y no-prolifерación, así como los foros de negociación de los mismos estarán paralizados. Tampoco cabe esperar que la Duma rusa ratifique antes del 2001 el Tratado START II, sobre todo, teniendo en cuenta el deseo de EE UU de revisar el Tratado ABM. Más difícil será también convencer a China que ratifique el CTBT y que ponga fin a sus exportaciones de tecnología sensible a terceros Estados. La prioridad a corto plazo es conseguir que se mantenga la moratoria sobre la realización de nuevos ensayos nucleares, tarea que no va a resultar fácil sobre todo, si se asume que EE UU no está dispuesto a realizar reducciones adicionales en su arsenal nuclear con vistas a alcanzar el desarme. Compromiso que por otra parte, está expresamente recogido en el artículo VI del TNP.

Bibliografía

- Asher Arian, *Israeli Public Opinion on national Security 1999*, Memorandum N° 53, Jaffe Center for Strategic Studies, Tel Aviv University, agosto de 1999.
- Michael Barletta y Amy Sands (eds.), *Nonproliferation Regimes At Risk*, Monterey Nonproliferation Strategy Group, Occasional Paper N° 3, Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, noviembre de 1999.
- George Bunn, Rebecca Johnson y Daryl Kimball, *Accelerating Entry into Force of the Comprehensive Test Ban Treaty: The Article XIV Special Conference*, Coalition to Reduce Nuclear Dangers, Washington, D.C, 1999.
- Centre for European Security Disarmament, *The 1999 NPT PrepCom: Towards the 2000 Review Conference*, Seminar Briefing, Ginebra, 24 de marzo de 1999.
- Roy E. Horton III, *Out of (South) Africa: Pretoria's Nuclear Weapons Experience*, USAEF Institute for national Security Studies, Occasional Paper, N° 27, agosto de 1999.
- Jonathan Medalia, *Nuclear Weapons: Comprehensive Test Ban Treaty*, Congressional Research Service Issue Brief, 1999.
- Tom Milne y Henrietta Wilson, *Verifying the Transition from Low Levels of Nuclear Weapons to a Nuclear Weapon-Free World*, Research Paper N° 2, VERTIC, Londres, 1999.
- Suzanna van Moyland, *Sustaining a Verification Regime in a Nuclear Weapon-Free World*, Research Report, N° 4, Londres, 1999.
- George Perkovich, *India's Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation*, University of California Press, noviembre de 1999.
- Alexander A. Pikayev, *The Rise and Fall of START II. The Russian View*, Carnegie Endowment for International Peace, Global Policy program, N° 6, Washington, septiembre de 1999.
- Gaurav Rajen, *Cooperative Environmental Monitoring in the Coastal Regions of India and Pakistan*, CMC Occasional Papers, N° 11, Sandia National Laboratories, 1999.
- Robert L. Rinne, *An Alternative Framework for the Control of Nuclear Materials*, Center for International Security and Cooperation, Stanford University, 1999.
- Fred Roberts, *60 Years of Nuclear History: Britain's Hidden Agenda*, Jon Carpenter (ed.), Oxfordshire, 1999.
- Annete Schaper y Katja Frank, *A Nuclear Weapon Free World-Can li Be Verified?*, PRIF Reports, N° 53, Peace Research Institute Frankfurt, Frankfurt am Main noviembre de 1999.
- United Nations, *U.N. Institute for Disarmament Research 1997-1998 Report*, U.N.O., 1999.
- William Walker, *Nuclear Entrapment - THORP and the politics of commitment*, Institute for Public Policy Research, Londres, 1999.
- Amy F. Woolf, *Nuclear Weapons in Russia: Safety, Security and Control Issues*, Congressional Research Service Issue Brief, 1999.
- John Ziman, *On the Road to "Zero"? A Long Term Perspective on UK Nuclear Weapons Policy*, Special Briefing Series on UK Nuclear Weapons Policy, International Security Information Service, N° 1, julio de 1999.

- Bob Van der Zwaan, L'énergie nucléaire au XXI-e-siècle: enjeu de sécurité, Les Cahiers de l'IFRI, N° 29, Institute Francais des Relation Internationales (IFRI), Paris, 1999.
- VV.AA., *Un estudio sobre el futuro de la no-proliferación*, Monografías del CESE-DEN, N° 30, Centro Superior de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, Madrid, 1999.

Reconstruir el tejido social	149
-------------------------------------	------------

El sistema internacional de cooperación al desarrollo: una aproximación a sus actores e instrumentos/ Ayuda económica y seguridad nacional. La ayuda externa de Estados Unidos, del Plan Marshall a la posguerra fría	150
--	------------

Fumigación y conflicto. Políticas antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia	153
--	------------

**RECONSTRUIR EL
TEJIDO SOCIAL.
UN ENFOQUE CRÍTICO
DE LA AYUDA
HUMANITARIA**

Carlos Martín Beristain.
Icaria, Barcelona, 1999,
287 páginas.

Este libro nos ofrece una visión crítica de la ayuda humanitaria, así como un enfoque psicosocial sobre la problemática de las poblaciones afectadas por la violencia y las catástrofes colectivas.

Carlos Beristain, licenciado en Medicina y especialista en educación para la salud, señala de manera muy clara y concisa cuáles son los objetivos del libro: combinando la investigación y su experiencia directa, traza un arco que va desde la introducción, donde se discuten las premisas de la ayuda humanitaria, hasta los planteamientos de reconstrucción del tejido social.

El volumen se estructura en ocho capítulos. En el primero se analiza el impacto social de la violencia política y los desastres, y se definen catástrofe y emergencia como conceptos más centrados en los efectos sociales que en las características físicas de los hechos. Se aclara cómo, en las denominadas catástrofes naturales, influyen de forma decisiva factores humanos y de toma de decisiones, además de la vulnerabilidad económica y política. Por lo tanto, tras las causas naturales no debe enmascarse la realidad. Hay países (por ejemplo Somalia) donde el hambre, además de ser producto de las sequías, también lo es de la mala distribución, de la falta de políticas de prevención o

de los programas de ajuste estructural. El libro *Geopolítica del hambre* (Informe anual de Acción Contra el Hambre, Madrid, 1999) analiza de forma muy exhaustiva la problemática del hambre y el papel que tienen los Gobiernos y grupos armados en la creación deliberada de hambrunas con objetivos políticos, incluso cuando no hay causas naturales que las justifiquen. También se analiza la naturaleza de los desastres y la violencia política así como el impacto en las personas de los hechos traumáticos y de la violencia.

En el segundo y tercer capítulo se describen las fases de las catástrofes colectivas y los mecanismos psicológicos para afrontar el peligro (el miedo, las conductas de pánico o la influencia de los rumores, entre otras). Las fases de afrontamiento del peligro y las respuestas son distintas ante los desastres naturales y las situaciones de violencia colectiva, como masacres o destrucción comunitaria. Sin embargo, se pueden sistematizar en una fase previa, caracterizada por el grado de preparación de las autoridades y de la población afectada, pasando por una fase de alerta, otra de choque y reacción, hasta la fase de emergencia y resolución y la posterior adaptación y reconstrucción.

En los capítulos cuarto y quinto, “De víctimas a supervivientes” y “La fuerza de la gente”, se tratan los problemas a los que se enfrentan las víctimas a medio y largo plazo para sobrellevar las consecuencias de la violencia y las catástrofes, teniendo en cuenta las diferencias culturales y las diferentes experiencias vividas por las poblaciones afectadas. La experiencia de los cooperantes

y ONG, así como los dilemas éticos en la ayuda humanitaria y las interacciones transculturales, son analizados en los capítulos sexto y séptimo. Se plantean algunas cuestiones previas, en las que hay que enmarcar las interacciones entre culturas, junto con un repaso a las diferencias culturales que incluye tres experiencias prácticas: 1) algunas diferencias culturales en el marco de la cooperación con América Latina; 2) el choque cultural a la vuelta de cooperantes o emigrantes a sus países de origen; y 3) un ejercicio de análisis de la comunicación entre personas de cultura occidental y asiática. En el último capítulo se describen y evalúan los efectos de las actuaciones tendentes a reconstruir el tejido social, todo ello en un marco de prevención y derechos humanos: programas de salud mental, intervención en situaciones de crisis, apoyo psicosocial en catástrofes, la memoria y los procesos de reconstrucción, el sentido de la justicia y la restauración de la verdad. En cuanto a la memoria colectiva, para poblaciones afectadas por la violencia o catástrofes sociales tiene no sólo un valor terapéutico colectivo, sino también de reconocimiento social y de justicia. Para entender esta reconstrucción del tejido social conviene tener en cuenta un libro en el que participó Carlos Beristain, *La Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala (Informe REHMI)*, donde se hace un recuento de las violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por las Fuerzas Armadas y los paramilitares como por la guerrilla, durante el conflicto que los enfrentó en este país centroamericano, en un ejercicio de memoria que se consideró fundamental para cerrar heridas y

permitir al país seguir adelante tras la firma de los acuerdos de paz.

Lorena Bilbao Trecha
Unidad de Estudios Humanitarios
(CIP-Médicos sin Fronteras-
Universidad de Deusto)

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: UNA APROXIMACIÓN A SUS ACTORES E INSTRUMENTOS.

Manuel Gómez Galán y José Antonio Sanahuja
CIDEAL, Madrid, 1999, 303 páginas.

AYUDA ECONÓMICA Y SEGURIDAD NACIONAL. LA AYUDA EXTERNA DE ESTADOS UNIDOS, DEL PLAN MARSHALL A LA POSGUERRA FRÍA

José Antonio Sanahuja
Entimema. Serie Con-Textos de Ciencias Sociales, nº 4, Madrid, 1999, 126 páginas.

El espectacular crecimiento que ha experimentado la cooperación española al desarrollo en los últimos años no ha ido, lamentablemente, acompañado por una mayor reflexión y un análisis en profundidad sobre estos temas. Siguen siendo demasiado habituales las ediciones apresuradas de meros

“refritos” o de materiales simplemente divulgativos con un enfoque de pura sensibilización. Por ello la aparición de textos como los que ahora comentamos supone no sólo una excepción muy positiva, sino la constatación de que, desde ciertas entidades y personas, se tiene conciencia de que nuestra cooperación sólo avanzará y madurará si la práctica va unida a la reflexión rigurosa, la evaluación, la comparación con otras experiencias, la búsqueda de nuevos instrumentos y metodologías y, en definitiva, la unión del pensamiento con la acción.

El primero de los libros es, en el mejor de los sentidos, un manual concebido como material complementario para actividades académicas, de formación en ONG, de capacitación de profesionales, etc. La pertinencia de la publicación es clara: la proliferación de organismos, la complicación del escenario en que se desenvuelve la cooperación, la multiplicidad de instrumentos –muy diversos y en ocasiones contradictorios– a través de los cuales se canaliza la cooperación, hacen necesario ofrecer un panorama claro para que el lector pueda comprender esta complejidad. El sistema internacional de cooperación y ayuda al desarrollo se caracteriza por ser plural y descentralizado y, además, en la actualidad se encuentra inmerso en un proceso de transformación y cambio que está trayendo consigo una revisión de sus fundamentos, objetivos e instrumentos como consecuencia de los cambios en la sociedad internacional.

El libro comienza con una breve introducción a los cambios experimentados por la cooperación en los últimos años, cuando el sistema bipolar de la

Guerra Fría ha sido sustituido por otro más complejo y la cooperación tiene una funcionalidad distinta para los actores internacionales. En un mundo globalizado y en un escenario de posguerra fría, el sistema de cooperación debe dar respuesta a nuevos retos y problemas para los que, en ocasiones, no está preparado.

La publicación analiza seguidamente los diferentes actores de la cooperación y sus políticas dentro del sistema mundial, comenzando por los organismos internacionales (tanto financieros como no financieros) hasta llegar a la cooperación española y las ONG. Cada capítulo –y esto resulta muy útil tratándose de un manual– puede ser leído independientemente, sin perjuicio de que el conjunto mantenga un hilo conductor y tenga una clara lógica interna. Se presta especial atención a aquellos actores y organismos más cercanos a la práctica de nuestro país (la cooperación de la Unión Europea y la española) pero, al mismo tiempo, se presenta un panorama general de gran utilidad para aquellos que tratan de profundizar en estas materias. La iniciativa de CIDEAL (Centro de Comunicación, Investigación y Documentación Europa-América Latina) de poner en circulación este volumen es, por todo ello, muy valiosa. Sin duda se convertirá en un apoyo para cursos y otras actividades formativas, así como para el trabajo habitual de quienes nos movemos en la enmarañada red de la cooperación internacional. El trabajo de síntesis y resumen realizado por los autores –dos “viejos militantes” de la cooperación no gubernamental– va a ser, sin duda, de gran utilidad para la creciente comunidad de

cooperación española.

El segundo libro analiza de modo exhaustivo la cooperación de EE UU (desde su origen con el Plan Marshall) haciendo hincapié en la funcionalidad política de la ayuda. Se analizan las motivaciones, los instrumentos y los propósitos de la asistencia estadounidense en el periodo 1948-1998, prestando especial atención a los casos de Vietnam, Israel, Centroamérica y países del Este.

La conclusión más clara que extrae el autor es que, aunque la ayuda se haya justificado por razones humanitarias y de desarrollo, en la práctica ha respondido a intereses nacionales del donante (estrechamente relacionados con su concepción de la seguridad nacional y con el conflicto Este-Oeste). Una vez finalizada la Guerra Fría, el proceso de reformas iniciado bajo la Administración Clinton no ha sido capaz de responder a las nuevas demandas y situaciones y se encuentra en crisis.

El libro –parte de la tesis doctoral que José Antonio Sanahuja leyó hace algún tiempo– centra su atención en el origen y evolución de la ayuda externa de EE UU, en el marco de su política exterior y de las relaciones internacionales contemporáneas. Con gran lucidez se va analizando cómo ha cambiado el papel de esta ayuda y cómo el carácter hegemónico de este país, desde el fin de la Guerra Fría, ha hecho desaparecer su justificación primaria (la seguridad nacional y la lucha contra el comunismo) con la misma rapidez con la que se desmoronó el bloque del Este. En un nuevo contexto, en el que resurge el aislacionismo, la ayuda externa debe adaptarse y encontrar nuevos argumentos, pero en el caso de EE UU no se ha avanzado en esta definición.

Tal vez para el lector español uno de los capítulos más interesantes sea el dedicado a la seguridad nacional y las políticas de ajuste en el caso de Centroamérica. Esta región –situada como México “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”– fue, durante los años ochenta, prioritaria para la política exterior de la Administración Reagan y como consecuencia destino prioritario de ayuda económica y militar. Pese a la retórica de promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos en la región, lo cierto es que la democracia no ha sido promovida por sus valores intrínsecos como forma de gobierno, sino por su valor instrumental, dentro de una estrategia guiada básicamente por razones de seguridad. Como ha señalado Edelberto Torres Rivas, el resultado son “democracias de baja intensidad”, privadas de contenido real y reducidas a poco más que la celebración periódica de elecciones.

El interés de profundizar en la experiencia de la ayuda estadounidense, aparte del muy loable interés académico, se centra en establecer las diferencias con los modelos de cooperación del resto de países donantes (más en concreto con los países europeos y con la Unión Europea). Las diferencias entre la concepción y la práctica de ambos sistemas han sido y son de tal magnitud que, incluso en ámbitos como el humanitario –donde, tras la Declaración de Madrid de 1995, existía un compromiso de los donantes para trabajar sobre criterios comunes–, la Administración estadounidense se desmarcó en 1997 ligando la ayuda humanitaria a sus intereses geoestratégicos.

En definitiva, ambos libros son un material estimulante para todos

aqueellos que, desde ONG, universidades, centros de investigación o administraciones públicas, quieren profundizar en el conocimiento del sistema internacional de cooperación y en uno de sus actores: Estados Unidos. Un actor con gran protagonismo en el escenario internacional pero mucho menor en lo que se refiere a la cooperación, donde su papel es incluso discordante y, siguiendo con los símiles, “no contribuye al éxito de la función”.

Francisco Rey
Colaborador del CIP

**FUMIGACION Y
CONFLICTO.
POLITICAS
ANTIDROGAS Y
DESLEGITIMACION
DEL ESTADO EN
COLOMBIA.**

Ricardo Vargas Meza
TM Editores/TNI/Acción
Andina, Santa Fé de Bogotá,
1999, 279 páginas.

La fumigación aérea con herbicidas químicos constituye el eje sobre el que gira, desde hace veinticinco años, la política de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en Colombia. Los resultados de este programa han llevado a un círculo vicioso de desplazamiento de personas y cultivos, incremento de la deforestación y del daño medioambiental e intensificación del conflicto. Por otra parte, las fumigaciones no han disminuído

el número de hectáreas de cultivos ilícitos que, de hecho, se ha triplicado en los últimos diez años.

“Estas acciones que se han implementado a lo largo y ancho de los cultivos ilícitos para la producción de sustancias prohibidas, representan una imagen más virtual que real de la férrea intención de querer destruir en su fuente y en su comienzo el circuito ilegal. La erradicación forzosa de los cultivos materializa de manera patética el deseo de acabar físicamente con las drogas ilegales”. Con estas palabras Ricardo Vargas introduce el que, sin duda, constituye uno de los estudios más exhaustivos sobre las consecuencias socioeconómicas y medioambientales de la política impuesta por Estados Unidos a los distintos Gobiernos colombianos. A lo largo del estudio se ponen de manifiesto una serie de factores que, aunque vinculados al uso de las fumigaciones en el contexto de la guerra contra las drogas, contribuyen a un aumento de la gravedad del conflicto interno. “El trato militar del fenómeno de las drogas ha venido contribuyendo de modo creciente a borrar las fronteras entre el tema de las drogas y el ámbito del conflicto armado”, asegura Vargas.

Uno de esos factores es lo que el autor denomina “proceso de desmodernización consciente del Estado”. El Estado promueve su propia deslegitimación, al no desarrollar acciones que reafirmen su condición de garante de los intereses generales, lo que es incompatible con un proyecto de modernidad.

Dos ejemplos sirven para ilustrar este proceso. Por una parte, ninguno de los diferentes gobiernos que se han alternado

desde que se inició formalmente la fumigación ha elaborado auditorías ambientales serias, enfocadas a una defensa del patrimonio ambiental del país, simplemente se han utilizado para constatar los resultados de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Por otra parte, la criminalización de los habitantes de las zonas cocaleras y la ineficacia de los conductos oficiales para las demandas sociales llevan a que la respuesta armada aparezca como el único mecanismo de réplica, lo que provoca una relegitimación política de la insurgencia.

Un segundo factor de agravamiento del conflicto lo constituyen las violaciones a los derechos humanos. El tratamiento de las fumigaciones como un asunto de seguridad de Estado y como una estrategia de guerra ha llevado, en ocasiones, a que se soslaye el orden legal y se multipliquen las violaciones de los derechos fundamentales de las comunidades. La construcción del concepto *narcoguerrilla* acentúa la criminalización de los productores e impide una intervención que tenga como punto de partida el diálogo y la concertación.

A pesar de las pruebas que avalan la ineficacia de la guerra química a las drogas, el Gobierno del presidente Pastrana está

negociando con el Programa de Naciones Unidas de Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID - UNDCP por sus siglas en inglés) un convenio por el que se iniciarían una serie de pruebas en terreno abierto con el hongo *Fusarium oxysporum*, versión biológica de los herbicidas químicos.

A lo largo del informe se hace patente la incompatibilidad de los programas de erradicación forzosa con políticas alternativas de desarrollo o con aquellas que busquen una reducción de daños en la producción. Los herbicidas químicos no sólo destruyen las plantaciones ilícitas, sino también los productos agrícolas destinados al autoconsumo y los cultivos alternativos que hay en marcha en diferentes regiones del país. De los microherbicidas biológicos se desconocen aún los efectos.

Fumigación y conflicto surge en el marco de una campaña promovida por el Transnational Institute (TNI) de Amsterdam, la plataforma Acción Andina contra la guerra química y biológica a las drogas, y la participación de la AG-Schweiz Kolumbien y el CIP. Más información en la página de internet del TNI (<http://www.tni.org/drugs/>).

Virginia Montañés
Periodista y colaboradora del CIP